**Dictámenes correspondientes a la Décima Primera Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**13 de noviembre del año 2018.**

Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Coahuila de Zaragoza, presentada por la Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández, del grupo parlamentario “Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con relación a la asignación de Diputaciones bajo el principio de Representación Proporcional.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes y Acuerdos en cartera:

**A.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 133 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y se crea la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV, del artículo 22 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 11, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Rosa Nilda González Noriega, del Grupo Parlamentario “del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; a la iniciativa de decreto por el que se crea la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza; así como a la iniciativa popular por la que se propone la reforma de diversos artículos de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila, planteada por los ciudadanos Briana Aguilar Campos (Raymundo Alejandro Aguilar Campos), mujer trans. promovente de las modificaciones al registro civil para la identidad sexo/genérica en el Estado de Coahuila de Zaragoza y Noé Leonardo Ruiz Malacara, Presidente y Representante legal de la Comunidad San Elredo A.C.

**B.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cardioprotección del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**C.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa con proyecto de decreto para que se adicione el artículo 900 bis al Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y para que se adicione un párrafo al artículo 28 de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, con relación a la ejecución de acuerdos de mediación validados y celebrados al amparo de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**D.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo al oficio de la C. María Concepción Delgado Lara, mediante el cual solicita a este H. Congreso su reintegración al Cabildo del Municipio de Francisco I. Madero.

**E.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo al oficio del Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual informa de la aprobación de un Dictamen, en el que se exhorta respetuosamente a los Congresos Locales de las Entidades Federativas, para armonizar su legislación local con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

**F.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo al oficio del Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual informa de un pronunciamiento en el que se hace un llamado a los Congresos Locales que aún no lo han hecho, armonicen su legislación a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Infantil.

**G.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo al oficio de Alianza Anticorrupción, mediante el cual solicitan a este H. Congreso asumir un compromiso democrático con la Ciudadanía Coahuilense para revisar y vigilar los siguientes procesos pendientes de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Coahuila de Zaragoza, presentada por la Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-**  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 06 del mes de abril del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma del primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Coahuila de Zaragoza, presentada por la Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Coahuila de Zaragoza, presentada por la Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

Como Ustedes recordarán, la asignación de las y los diputados de representación proporcional, durante la pasada elección, fue impugnada por diversos actores, la cadena impugnativa llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pasando por la Sala Regional Monterrey.

Una las cuestiones que generó controversia y fue materia de resolución de los órganos jurisdiccionales, tuvo que ver con la contradicción que existe entre el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Local y el inciso a) párrafo 1 del artículo 18 del Código Electoral.

En efecto, mientras el primer párrafo del artículo 33, en su parte final, señala que tendrán derecho a la asignación de diputados de representación proporcional los partidos políticos, que obtengan cuando menos el 2 % de la votación, el artículo 18 del Código Municipal, en su párrafo 1, inciso a) establece que tendrán derecho los partidos que obtengan, cuando menos, el 3% de la votación.

El 13 de octubre del año pasado, la Sala Regional Monterrey, al resolver el expediente SM-JRC-21/2017 y sus acumulados, señaló:

“De lo anterior, se desprende que la porción normativa contenida en el artículo 33, párrafo primero, de la Constitución Local que refiere que las diputaciones de representación proporcional serán asignadas a aquellos partidos políticos que obtengan cuando menos el 2% de la votación valida emitida en el Estado para la elección de Diputados, no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Federal y genera una distorsión en el sistema.”

“En consecuencia, procede inaplicar el artículo 33, párrafo primero de la Constitución local, en la porción normativa que dice ... A aquellos partidos políticos que obtengan cuando menos el 2% de la votación valida emitida en el Estado para la elección de Diputados, para quedar de la siguiente forma:”

Los dos párrafos anteriores están contenidos en las páginas 30 y 31 de la resolución de mérito.

Hay que tener presente que los órganos jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son los tribunales constitucionales en materia electoral, lo anterior, con excepción de las Acciones de Inconstitucionalidad en materia electoral, de las cuales conoce, en exclusiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De ello se sigue que la porción normativa final del primer párrafo del artículo 33 de la Constitución del Estado fue inaplicada por ser contraria a lo que dispone el artículo 116 de la Constitución General de la República.

Ahora bien, también es importante precisar que cuando una norma jurídica es declarada inconstitucional, al resolver una acción de inconstitucionalidad, el efecto es la expulsión de la norma del orden jurídico nacional, pero la inaplicación de una norma jurídica por no ser acorde con la Constitución Federal, no tiene el mismo efecto. Esto ocurre, sustancialmente, porque en la acción de inconstitucionalidad se hace un control abstracto de la constitucionalidad, mientras que la inaplicación es el resultado de un control difuso de la misma que presupone, forzosamente, un acto de aplicación de la norma.

Esto implica, aunque suene absurdo, que la porción normativa que establece el 2 %, aunque haya sido inaplicada, conserva formalmente su vigencia. Por ello se propone suprimir la porción normativa cuya inaplicación resolvieron los tribunales constitucionales en materia electoral.

Esta porción normativa, que se contiene en la parte final del primer párrafo del artículo 33 de la constitución y que se propone eliminar dice: “Entre aquellos partidos políticos que obtengan cuando menos el 2% de la votación valida emitida en el Estado para la elección de Diputados.”

Con esta reforma se armoniza el artículo 33 de la Constitución Local, con el artículo 18, párrafo 1, inciso a) del Código Electoral y el artículo 116, fracción IV, inciso f).

Finalmente, aporto copia de la sentencia recaída sobre el expediente SM-JRC-21/2017 y sus acumulados, donde de la página 25 a la 31, se contienen las razones jurídicas para demostrar que la porción normativa que se propone eliminar, es contraria a lo dispuesto por la Constitución Federal.

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia estimamos conveniente la reforma contenida en la presente propuesta legislativa ya que la misma tiene por finalidad armonizar el artículo objeto del presente estudio, con el artículo 18 del Código Electoral y el artículo 116 de la Constitución General.

Quienes dictaminamos observamos que, como bien se señala en la exposición de motivos, esta disposición ha sido sujeta al análisis de los tribunales electorales, quienes han determinado que, efectivamente existe una discrepancia entre lo plasmado en el artículo 33 de nuestra constitución y lo previsto en el artículo 116 de la Constitución General y en el artículo respectivo del Código Electoral, lo cual genera una “distorsión del sistema”.

En este sentido, quienes dictaminamos estimamos procedente la reforma a este artículo, dentro del cual se propone suprimir la porción normativa cuya inaplicación resolvieron los tribunales constitucionales en materia electoral, observando que la misma debe ser acorde a lo previsto en los artículos 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Federal y el artículo 18, párrafo primero, inciso a) del Código Electoral de nuestro Estado.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ÚNICO.-** Se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 33.** El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años y se integrará con dieciséis diputados electos según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales y con nueve diputados electos por el principio de representación proporcional, los cuales serán asignados en los términos que establezca la ley.

**…**

**…**

**…**

**T R A N S I T O R I O S**

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**Segundo.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2018.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 133 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y se crea la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV, del artículo 22 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; a la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 11, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Rosa Nilda González Noriega, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; a la iniciativa de Decreto por el que se crea la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza; así como a la iniciativa popular por la que se propone la reforma de diversos artículos de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila, planteada por los ciudadanos Briana Aguilar Campos (Raymundo Alejandro Aguilar Campos), mujer trans. promovente de las modificaciones al registro civil para la identidad sexo/genérica en el Estado de Coahuila de Zaragoza y Noe Leonardo Ruiz Malacara, Presidente y representante legal de la comunidad San Aelredo A.C.; y

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesiones celebradas por el Pleno del Congreso los días 15 de Mayo de 2018**,** 12 de junio de 2018, 23 de octubre de 2018,15 del mes de noviembre de 2017 y 28 de junio de 2017, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, las iniciativas a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dichos acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 133 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y se crea la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV, del artículo 22 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; a la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 11, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Rosa Nilda González Noriega, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; a la iniciativa de Decreto por el que se crea la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza; así como a la iniciativa popular por la que se propone la reforma de diversos artículos de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila, planteada por los ciudadanos Briana Aguilar Campos (Raymundo Alejandro Aguilar Campos), mujer trans. promovente de las modificaciones al registro civil para la identidad sexo/genérica en el Estado de Coahuila de Zaragoza y Noe Leonardo Ruiz Malacara, Presidente y representante legal de comunidad San Aelredo A.C.; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se crea la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; la iniciativa de Decreto por el que se crea la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza**;** la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV, del artículo 22 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; así como la iniciativa popular por la que se propone la reforma de diversos artículos de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila, planteada por los ciudadanos Briana Aguilar Campos (Raymundo Alejandro Aguilar Campos), mujer trans. promovente de las modificaciones al registro civil para la identidad sexo/genérica en el Estado de Coahuila de Zaragoza y Noe Leonardo Ruiz Malacara, Presidente y representante legal de comunidad San Aelredo A. C., se basan entre otras, en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

Todos los seres humanos tenemos una identidad, la cual, constituye una parte fundamental de nuestra vida, pues nos define como personas. La identidad es indispensable para evaluar quiénes somos, cómo nos sentimos, cómo actuamos y qué visión tenemos de la vida. De la misma forma, la identidad es una condición ineludible, para poder acceder a otros derechos humanos.

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad, esta incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Y es la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás. [[1]](#footnote-1)

La inscripción en el Registro Civil y la concesión de un nombre, una nacionalidad y un género le proporciona a las y los recién nacidos la capacidad jurídica. Es decir, su reconocimiento como miembros de la sociedad, lo cual les concede una serie de derechos y obligaciones. Además, les dota de acceso a los diferentes servicios necesarios para desarrollarse y construir su vida y su porvenir, como lo son la educación y la salud. [[2]](#footnote-2)

Durante muchos años, las personas transexuales han sufrido discriminación en todos los ámbitos de su vida diaria, desde las burlas y humillaciones públicas por parte de un sector de la sociedad abiertamente transfóbico, hasta los arrestos y arbitrariedades cometidas por agentes policiales, la burocracia y las instituciones públicas.

Actualmente una de las formas institucionales de discriminación en contra de este grupo vulnerable es precisamente la negativa de que las personas transexuales puedan acceder al cambio de nombre y género de sus actas, ya que, para hacerlo, la autoridad pone una serie de requisitos que muchas veces son difíciles de cumplir, como lo es la contratación de un abogado y los trámites judiciales que en la mayoría de los casos son prolongados y gravosos.

Por estas razones, resulta indispensable realizar las adecuaciones correspondientes a las normas registrales con el objetivo de que todas las personas, sin importar sus condiciones personales, estén en posibilidad de ejercer su derecho a la identidad con total plenitud, dado que, los constantes y vertiginosos cambios sociales en materia de derechos humanos de las personas pertenecientes a la diversidad sexual obligan a que las medidas relativas a la ley de la familia y el registro civil sean más incluyentes y protectoras.

Sabemos que todavía falta mucho para concretar el respeto absoluto a las personas transexuales, pero no todo es negativo; el trabajo de los colectivos y organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual han ampliado poco a poco la esfera de los derechos fundamentales de la comunidad LGBTTTIQ, generando el potencial para sociedades más democráticas e igualitarias.

De la misma forma, el Partido de la Revolución Democrática, se ha distinguido a nivel nacional por tener una agenda ampliamente incluyente y por ser los primeros en promover los derechos de las personas de la diversidad sexual. Hemos compartido la primera fila al lado de la sociedad civil, haciendo realidad en la Ciudad de México la Ley de Sociedades de Convivencia, la Reforma al Código Civil para reconocer jurídicamente el cambio de identidad de las personas trans, la reforma al Código Penal para tipificar los crímenes de odio por orientación sexual, las reformas a la ley de salud para garantizar tratamiento a personas transexuales, el matrimonio civil igualitario y la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

En ese sentido y siguiendo nuestros principios democráticos proponemos una modificación al artículo 133 de la Ley para la Familia con el objetivo de que las personas transexuales puedan cambiar su identidad de género a través de la vía administrativa ante la Dirección Estatal del Registro Civil. Este procedimiento permitirá eliminar los prolongados trámites judiciales que conlleva el cambio de datos en las actas de nacimiento, así como los costos elevados de los mismos.

El reconocimiento del cambio de identidad de género vía administrativa es parte de una tendencia internacional generalizada en favor de los derechos de las personas transexuales. En América Latina, países como Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador y Bolivia, incluyen en sus normas leyes de identidad que facilitan el acceso al cambio de nombre a miembros de este colectivo, sin que tengan que acudir a la vía judicial.

En nuestro país legislaciones como las de la Ciudad de México y diversas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han traído avances progresivos sobre la materia, lo que nos obliga a las entidades federativas a no quedarnos atrás y aprobar las medidas legislativas necesarias para impulsar los derechos de la comunidad transexual.

Las reformas que proponemos permitirán reconocer, en el texto normativo vigente, las exigencias sociales y posibilitarán adecuación de los actos y hechos del estado civil de las personas físicas a la realidad social; permitiendo reforzar la certeza y seguridad de los actos registrales, siempre en un contexto de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Por lo que toca a la propuesta de Ley del Registro Civil, el año pasado, el anterior titular del poder ejecutivo presentó una iniciativa para la creación una nueva norma, sin embargo, la misma fue turnada a comisiones en la legislatura pasada sin que se haya podido dictaminar, en ese sentido, hemos decidido retomar el proyecto de ley y hacerle algunas modificaciones que tienen que ver con identidad de género, personas en situación de vulnerabilidad y constancias de concubinato. El objetivo es fortalecer el marco normativo registral propuesto y permitir a los grupos vulnerables ejercer plenamente sus derechos.

En ese sentido hemos decidido retomar las argumentaciones que se dieron en la exposición de motivos original, por lo que tiene que ver con la estructura y sistematización de la norma jurídica, pues no es nuestra intención apropiarnos de un trabajo legislativo que no es totalmente nuestro. La exposición de motivos de la iniciativa inicial se redactó en los términos siguientes:

Los actos y hechos del estado civil de la persona física no implican únicamente la simple inscripción en el Registro Civil, se pueden considerar como partes integrantes de un libro de vida, que permite conocer el nacimiento, origen, estado civil, filiación, nacionalidad, edad o muerte de cada persona.

La importancia que conlleva la inscripción de los actos registrales se traduce en los derechos que de esta resultan, el derecho de niñas y niños a ser inscritos en el Registro Civil inmediatamente después de su nacimiento[[3]](#footnote-3) implica el derecho a un nombre, a una nacionalidad y establece derechos familiares, se afirma que este es el punto de partida para acreditar la identidad, la personalidad y la capacidad jurídica de las personas, derechos y atributos de los que derivan, entre otros, el derecho a la educación, a la protección de la familia, a manifestar libre y conscientemente el deseo de contraer matrimonio, decidir el número de hijos, el derecho a recibir alimentos, derecho al trabajo y a la seguridad social, al cumplir la mayoría de edad se puede ejercer el derecho a votar o a ser electo; todo estos contenidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales[[4]](#footnote-4) y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos[[5]](#footnote-5), promulgados por el Estado Mexicano en 1981.

Con la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011, el respeto de los derechos humanos encuentra un marco legal de protección que no se constriñe al ámbito local, sino que en virtud de esta reforma, todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos además, en los tratados internacionales.

Es así como “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”[[6]](#footnote-6).

A partir de esta reforma el Gobierno del Estado de Coahuila dio inicio a la adecuación de su marco jurídico, teniendo como premisas la igualdad, no discriminación, dignidad y libertad en sus acepciones más universales.

El 26 de junio de 2012 se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, una adición al artículo 238 BIS del Código Civil del Estado con la finalidad de que la variación del nombre se agregue como supuesto para la rectificación administrativa, de igual forma se deroga lo relativo a la adopción semiplena, subsistiendo la adopción plena en la que los lazos entre los adoptantes y adoptados(as) se tienen como consanguíneos y, en interés superior del menor se reserva la información primigenia, también se establece que la adopción internacional se regirá por los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito; el 24 de diciembre de 2013 se reforma el artículo 14 de la Ley del Registro Civil del Estado con la finalidad de garantizar que los extranjeros sin importar su calidad migratoria, puedan celebrar actos del estado civil; el 16 de septiembre de 2014 se reforma el artículo 253 del Código Civil del Estado a fin de garantizar la igualdad y no discriminación en relación a no establecer como restricción el sexo de los solicitantes para contraer matrimonio, se deroga la prohibición respecto al derecho a adoptar de los compañeros civiles; el 04 de septiembre de 2015 se reforma el artículo 255 del Código Civil del Estado que estableció la edad de 18 años para contraer matrimonio, garantizando así la prohibición del matrimonio infantil (precoz), se adiciona de igual forma el artículo 369 BIS que establece el divorcio administrativo que implica la voluntad libre y consiente de ambos cónyuges en consentir en el divorcio, garantizando el libre desarrollo de la personalidad de los solicitantes; el 15 de diciembre de 2015 se emite el Decreto de creación de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

Armonizar la legislación del Registro Civil al marco jurídico dispuesto en la Ley para la Familia del Estado de Coahuila de Zaragoza permitirá que los derechos y obligaciones en está contenidos, sean reflejo de esa visión preponderante de “fortalecer el marco jurídico e institucional para que los derechos sean respetados, garantizados, promovidos y protegidos…”.[[7]](#footnote-7)

En este tenor en primer término se pretende resaltar la importancia del uso del lenguaje de género, Marta Lamas ha indicado que el interés por la academia femenina de abogar por establecer el concepto de *género,* es establecer la distinción entre construcciones sociales y culturales de las biológicas[[8]](#footnote-8), de igual forma afirma la autora que el lenguaje es “un medio fundamental para estructurarnos culturalmente y para volvernos seres sociales”[[9]](#footnote-9), Wagner reitera que el comportamiento verbal sirve como “fundamento de la sociabilización y que el idioma fomenta el uso de estereotipos sexuales, el uso de la lengua, como medio de expresión y comunicación, refleja el pensamiento de la comunidad”[[10]](#footnote-10), de aquí la importancia de visibilizar, de no asumir que lo que se diseña o indica para los hombres circunscribe a las mujeres, o viceversa; imprimir el lenguaje de género en los textos normativos a fin de que los cambios sociales de hombres y mujeres se vean reflejados en la preceptos legales, se traduce en la inclusión e igualdad que debe existir entre hombres y mujeres, en combatir las desigualdades, no sólo en el pensamiento sino en el quehacer público.

El libre desarrollo de la personalidad, vinculando estrechamente a la dignidad humana punto focal del respeto a los derechos humanos, y sobre el cual la Corte ha sostenido que “el libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento a los derechos a la identidad personal, sexual y de género…[[11]](#footnote-11)”, y en este sentido reconocer la acción de las personas en relación al reconocimiento de su identidad de género, como un derecho de autonomía individual, “suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones para materializarlas”[[12]](#footnote-12) esto conlleva a garantizar que se respeten los “espacios vitales” mediante una mediada estatal[[13]](#footnote-13) como es la propuesta del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento de la identidad de género de aquellas personas que así lo requieran y que contiene el presente proyecto.

La Constitución del Estado establece en su artículo 1° que todas las personas son iguales ante la ley, que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, además señala la Corte que “la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona”, se traduce en un mandato dirigido a toda autoridad y particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo a fin de no ser humillado, degradado o cosificado[[14]](#footnote-14), en este sentido establecer que la simple apariencia de deficiencias en las funciones o estructuras corporales no es determinante para limitar el derecho a contraer matrimonio, fortalece el derecho a la igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana, de igual forma se cumple con lo que la misma Corte a determinado “la obligación de no introducir o eliminar de su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas”[[15]](#footnote-15).

El presente proyecto determina que el Registro Civil aplicará todo mecanismo que garantice el ejercicio, goce y respeto de los derechos humanos, de acuerdo al *principio pro persona* establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es atendiendo a la norma que, en virtud de su interpretación, sea la que más ampliamente proteja o garantice derechos fundamentales o, en sentido contrario, atender a la norma o interpretación más restringida a fin de limitar el ejercicio de derechos, la Corte ha establecido en este sentido que este principio se encuentras referido “únicamente para la interpretación de normas con el objeto de establecer el contenido y alcance de los derechos humanos y, de este modo, otorgarles un sentido protector a favor de la persona humana”[[16]](#footnote-16).

De igual forma proceder, de conformidad con lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) respecto al *control de convencionalidad* que debe haber entre la norma jurídica interna y la Convención Americana sobre Derechos Humanos e incluso, sobre la interpretación de la Convención que ha realizado la misma CIDH[[17]](#footnote-17), así se establece que el *control de convencionalidad* es función y tarea de cualquier autoridad y no sólo del Poder Judicial, en el marco de la propia competencia[[18]](#footnote-18) **(**Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2013). Resolución que se reitera en 2014 al determinar que en el ámbito de su competencia “todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un ‘control de convencionalidad”. **(**Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014)[[19]](#footnote-19).

Se incorporan además a la presente propuesta, los requisitos de procedencia para cada acto o hecho del estado civil de las personas físicas, que garantizarán la homogeneidad en su aplicación por cada Oficial del Registro Civil en la entidad, uniformando así los criterios y reforzando la certeza y seguridad jurídica de cada acto registral, ya que cierto es que cada acto u hecho del estado civil de las personas físicas es fundamental para acceder a diversos derechos y requieren ser inscritos de manera fehaciente.

Se incorpora el uso de medios electrónicos, con el objetivo de facilitar los procesos de tramitación a las personas que pretendan iniciar procedimientos de aclaración, rectificación administrativa y certificados de inexistencia, lo que representará un beneficio económico para el público usuario al evitar su traslado hasta las oficinas de la Dirección del Registro Civil o de las distintas Oficialías Coordinadoras, impulsando además así la simplificación administrativa.

Se añade un capítulo relativo a las inscripciones de actas con situación de extranjería, el cual contempla los requisitos de procedencia y lineamientos para la inserción y un capítulo que refiere a los Certificados de Inexistencia de nacimiento y defunción, el cual se describe los procedimientos para la tramitación de los mismos así como demás constancias que el Registro Civil emite en el marco de su competencia, como constancias de soltería, constancias de concubinato y registro extemporáneo.

De igual forma se incorpora lo relativo a las Oficialías Coordinadoras del Registro Civil, que observa su marco de competencia y su circunscripción, igualmente se suma el capítulo referente al desarrollo del examen para ser Oficial del Registro Civil.

Se ha diseñado un capítulo para la aplicación de sanciones administrativas y a la par se acompaña un nuevo procedimiento administrativo para la aplicación de estas sanciones, inclusiones que permitirán asegurar el cumplimiento del texto normativo, aunado a lo anterior se ha estructurado el procedimiento de visitas de inspección que consolidará el funcionamiento correcto de cada Oficialía del Registro Civil en la entidad.

Estas propuestas para actualizar y homologar el texto normativo vigente, a las exigencias sociales y a los avances tecnológicos, posibilita adecuar los actos y hechos del estado civil de las personas físicas a la realidad social y operativa, permitiendo reforzar la certeza y seguridad de los actos registrales, siempre en un contexto de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

**TERCERO.-** Previo al estudio y análisis de las iniciativas objeto del presente dictamen quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia estimamos oportuno hacer una serie de consideraciones respecto al formato y metodología de análisis utilizado, estimando oportuno referir que en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley orgánica de este H. Congreso, que dispone en sus párrafos sexto y séptimo que “tratándose de dictámenes de iniciativas de reforma parcial a una ley, en estos deberán incluirse todas las propuestas que en tiempo y forma hayan presentado las diputadas y los diputados, el Gobernador del Estado, los ciudadanos y las demás entidades facultadas para presentar iniciativas de ley, cuando versen sobre un mismo tema o asunto de fondo” y que “tratándose de iniciativas para crear leyes nuevas, si existen dos o más sobre el mismo rubro o materia, se tomará de cada una lo que se considere, previo estudio, análisis y acuerdo de la o las comisiones correspondientes, más apropiado para elaborar el dictamen final, incluyendo en este las menciones y aclaraciones a que haya lugar”, en este dictamen nos abocamos al estudio de la iniciativa de Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV, del artículo 22 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 11, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Rosa Nilda González Noriega, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

En este mismo orden de ideas quienes integramos la presente comisión tomamos la determinación de que para mejor proveer debíamos allegarnos de tantos elementos como fuere posible, por lo que en atención a lo dispuesto en los artículos 123, 124, 125 y demás relativos de la ley orgánica de este órgano legislativo en el presente dictamen se toman en consideración dos iniciativas propuestas a la legislatura pasada, de las que se nos dio cuenta en el informe sobre los asuntos que fue puesto a nuestra consideración en la reunión de esta comisión celebrada el 29 de enero del año en curso. Las referidas iniciativas son las siguientes:

Iniciativa de Decreto por el que se crea la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Iniciativa Popular por la que se propone la reforma de diversos artículos de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por los C.C. Briana Aguilar Campos Raymundo Alejandro Aguilar Campos), mujer Trans, promovente de las modificaciones al Registro Civil para la identidad sexo/genérica en el Estado de Coahuila de Zaragoza y Noe Leonardo Ruiz Malacara, Presidente y Representante Legal de Comunidad San Aelredo, A.C.

Una vez referido lo anterior, los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, consideramos que las iniciativas planteadas, vienen a formar parte de un ciclo de ajustes jurídicos a los ordenamientos locales, encauzados a buscar el bienestar colectivo, puesto que las mismas vienen a actualizar y homologar la Ley del Registro Civil vigente, a fin de atender a los requerimientos actuales de la sociedad, y hacer de ésta, una ley acorde al nuevo marco jurídico que rige nuestro País y nuestro Estado.

Como bien se señala en las exposiciones de motivos, con la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011, el respeto de los derechos humanos encuentra un marco legal de protección, que obliga a las legislaciones locales a iniciar con las adecuaciones de los marcos jurídicos, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales para que todo ser humano sea respetado, tratado con igualdad, no discriminación, dignidad y libertad en sus acepciones más universales.

Es así, que partiendo de los principios que deben regir en todo ordenamiento legal, establecidos en la reforma federal antes señalada, a partir del año 2012, podemos observar que en nuestro Estado el Código Civil se ha venido adecuando y homologando.

En el mismo sentido en el año 2015, se emitió por este órgano legislativo, el Decreto de creación de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, que tiene como fin normar las relaciones familiares, así como delimitar los derechos y obligaciones de cada parte integrante del núcleo familiar, con especial atención a la protección y garantía de los derechos de niños y niñas, y es que, si bien es cierto que el derecho de familia en sus inicios era reconocido en la legislación como un ámbito de regulación especial de las relaciones privadas que debía ser parte del derecho civil, por ser esta la rama del derecho privado por excelencia, con el desarrollo de su estudio, se logró sostener que su naturaleza jurídica es sustancialmente diferente a pesar de ser parte del derecho privado, es decir, que si bien el derecho de familia sí pertenece al derecho privado esto no significa que deba ser parte del derecho civil porque éste se rige por principios que son incompatibles con los fines que persigue el Estado en relación con la familia.

Es a raíz de la creación de la Ley para la Familia, y de todas las homologaciones y adecuaciones a los diversos ordenamientos generales y locales que ha venido desarrollándose, que consideramos necesario el que se adecúe y armonice el contenido de la Ley del Registro Civil, por lo que quienes dictaminamos, concluimos que es acertado el que se establezca un nuevo ordenamiento, ya que consideramos que eso puede garantizar que su contenido sea acorde a las nuevas bases constitucionales y legales en la materia.

Una vez referido lo anterior quienes conformamos esta Comisión dictaminadora, analizamos los proyectos de nuevas leyes, de manera primigenia y observamos una gran coincidencia en el contenido de ambas.

Al respecto, podemos señalar que de conformidad a los proyectos de ley propuestos, ambos tienen por objeto el reglamentar la organización y funcionamiento del Registro del Civil, y plantean lo siguiente:

* Se contempla de igual manera que la ley vigente, el Registro Civil como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno que le estará jerárquicamente subordinado, con la finalidad de hacer constar de manera auténtica, todos los actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas físicas.
* Establece la organización y funcionamiento del Registro Civil, que contará con una Dirección, a la que corresponderá la organización, dirección, vigilancia y administración de las oficinas del Registro Civil y de las unidades administrativas adscritas a ella. Dicha Dirección también estará a cargo de la coordinación, vigilancia, control y supervisión de las Oficialías.
* Fija el contenido de los libros y actas levantadas en el Registro Civil.
* Se prevé el uso de medios electrónicos en la ley, siempre que sea factible de acuerdo con las plataformas tecnológicas, bases y sistemas propios del Registro Civil, se podrán promover por las personas interesadas que pretendan iniciar los trámites de aclaración, rectificación y certificados de inexistencia.
* Se incluyen los supuestos, requisitos y procedimientos para la expedición de los certificados de inexistencia y de los registros extemporáneos de nacimiento y de defunción.
* Se señalan los requisitos de expedición de las constancias de soltería, de registro extemporáneo, así como relativas a la no localización de acta.
* Se crea el procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género.

Sobre este punto, los integrantes de la presente comisión dictaminadora tomamos en consideración, precedentes emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el caso del Amparo Directo Civil 6/2008, en el cual la corte efectuó la interpretación sistemática del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 3, 5 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el principio 3 de los Principios de Yogyakarta, del cual derivó el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Asimismo la corte manifestó que relacionado con este derecho, se encuentran el derecho a la identidad personal definido como el derecho que tiene toda persona a ser una misma, en la propia conciencia y en la opinión de los otros, y el derecho a la identidad de género, que incluye la orientación sexual y primordialmente como se percibe una persona, de acuerdo a sus psique, emociones, sentimientos, etcétera.

Para la Suprema Corte, la sexualidad es un elemento esencial, que parte de la esfera más íntima de una persona, y por tanto la libre decisión de la sexualidad está protegida por la constitución, en consecuencia, las personas tienen el derecho a cambiar de nombre y sexo en sus documentos oficiales cuando los asignados al nacer, no reflejan lo que consideran es su identidad, no hacerlo, además de violar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, puede violentar el derecho a la salud, como se desprende de lo establecido en la tesis P.LXX-2009 registrada bajo el rubro “Derecho a la salud”. En este orden de ideas, tratándose de la reasignación del sexo de una persona transexual, es necesaria la expedición de nuevos documentos de identidad, a fin de lograr el estado de bienestar general pleno que aquel derecho implica.

Dentro de este análisis, también tomamos en consideración la sentencia que derivó del amparo en revisión 131/2017, en el cual la Primera Sala determinó que el artículo 759 del Código Civil para el Estado de Veracruz, contenía una disposición que implicaba una discriminación indirecta y por lo tanto vulneraba lo consignado en el artículo 1º de la Constitución mexicana, al no permitir que la adecuación de la identidad de género se realice vía administrativa, pero sí que otras modificaciones esenciales se realicen por esa vía.

Al respecto, se precisó que el cambio de nombre y en general la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad para que éstos sean conformes a la identidad de género auto-percibida constituye un derecho protegido tanto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos como por la Constitución, pues la adecuación de la identidad de género permite garantizar el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la privacidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho al nombre; por lo que los Estados tienen la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para tal fin.

En relación con esto último, la Primera Sala concluyó que el procedimiento idóneo (formal y materialmente administrativo) debe cumplir con los siguientes cinco requisitos: a) deben estar enfocados a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b) deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) deben ser confidenciales, además, los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de género pero deben tomarse medidas a fin de evitar defraudar a terceros; d) deben ser expeditos, y en la medida de lo posible, deben tender a la gratuidad; y, e) no deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales.

En el mismo orden de ideas, esta comisión dictaminadora tomó como base para este análisis precedentes de tribunales de derechos humanos, opiniones consultivas de organismos protectores de estos derechos y lo previsto en distintos instrumentos internacionales en la materia, así como los testimonios y peticiones consignados en la exposición de motivos de la iniciativa popular planteada por los ciudadanos Briana Aguilar Campos (Raymundo Alejandro Aguilar Campos) y otros integrantes de la Asociación Civil “ San Aelredo” mediante la cual se promueve la modificación de diversos artículos de la Ley del Registro Civil a efecto de instituir un procedimiento mediante el cual se haga el levantamiento de una nueva acta de nacimiento en la que se reconozco una nueva identidad de género.

Del estudio de lo anterior quienes dictaminamos llegamos a la conclusión de que actualmente, una de las formas institucionales de discriminación en contra de las personas transexuales es precisamente la negativa de que las personas puedan acceder al cambio de nombre y género de sus actas, ya que, para hacerlo, la autoridad impone una serie de requisitos que muchas veces son difíciles de cumplir, como lo es la contratación de un abogado y los trámites judiciales que en la mayoría de los casos son prolongados y gravosos, lo cual es inconcebible en este momento histórico, pues como sabemos a partir de la reforma en materia de derechos humanos en nuestro país, todas las autoridades en nuestro respectivo ámbito de competencias estamos obligados, en términos de lo previsto en el artículo 1 de la Constitución General, a promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos y a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

Es en este sentido, que la modificación legal propuesta busca garantizar el acceso de este grupo vulnerable a su derecho a la identidad, lo cual es sumamente importante al ser este derecho presupuesto para el goce de otros derechos humanos.

Para los integrantes de esta comisión, el principio de igualdad es uno de los valores superiores del orden jurídico que debe servir de base para la producción normativa ya que dicho principio evita que existan normas que, al proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad, al generar un trato discriminatorio.

Otro aspecto a valorar en la revisión de las disposiciones relativas a este tema, fue el de emitir una norma que también garantizara los principios de seguridad y certeza jurídicas, los derechos de tercero y el orden público, al efecto, para quienes dictaminamos resultó importante lo asentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis T.LXXIV/2009 registrada bajo el rubro “reasignación sexual”. No existe razonabilidad para limitar los derechos fundamentales de una persona transexual, impidiéndole la adecuación de sus documentos de identidad, bajo el pretexto de preservar derechos de terceros o el orden público; y la Tesis P. LXXIII/2009 registrada bajo el rubro “reasignación sexual, la expedición de una nueva acta de nacimiento por ese motivo, no se traduce en la inexistencia de los hechos o actos acontecidos bajo la identidad anterior ni en la extinción de los derechos y obligaciones del interesado”, que a la letra respectivamente señalan:

**REASIGNACIÓN SEXUAL. NO EXISTE RAZONABILIDAD PARA LIMITAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, IMPIDIÉNDOLE LA ADECUACIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, BAJO EL PRETEXTO DE PRESERVAR DERECHOS DE TERCEROS O EL ORDEN PÚBLICO.**

Tratándose de la reasignación sexual de una persona transexual y, por tanto, de la adecuación de sus documentos de identidad, mediante la rectificación de su nombre y sexo, evidentemente se producen diversos efectos tanto en su vida privada como en sus relaciones con los demás, en las que innegablemente entran en juego los derechos de terceros, así como el orden público, como ocurre en aspectos como el matrimonio, sucesiones, relaciones laborales, servicio militar, filiación, actos contractuales, antecedentes penales, etcétera. Sin embargo, la protección a terceros y al orden público se garantiza a través de diversos mecanismos legales que no impliquen o permitan la lesión o el sacrificio de los derechos fundamentales de aquella persona, pues de lo contrario, se afectaría de manera total el núcleo esencial de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal y sexual, a la salud -en su concepción integral- a la propia imagen, vida privada e intimidad y, por consiguiente, a su dignidad humana y no discriminación, en tanto que la plena identificación de su persona, a partir de la rectificación de su nombre y sexo es lo que le permitirá proyectarse, en todos los aspectos de su vida, como el ser que realmente es, reconociéndose así, legalmente, su existencia.

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXXIV/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

**REASIGNACIÓN SEXUAL. LA EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA ACTA DE NACIMIENTO POR ESE MOTIVO, NO SE TRADUCE EN LA INEXISTENCIA DE LOS HECHOS O ACTOS ACONTECIDOS BAJO LA IDENTIDAD ANTERIOR NI EN LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL INTERESADO.**

La expedición de una nueva acta de nacimiento en la que conste el cambio de nombre y sexo de una persona transexual, no se traduce en la desaparición de su historia, por lo que todos aquellos actos que hubiere realizado bajo su identidad anterior y que traían aparejados efectos jurídicos, siguen produciéndolos y le son exigibles, salvo en los casos en que la propia legislación determine la extinción o modificación de los mismos; de ahí que, necesariamente, la expedición de la nueva acta de nacimiento tratándose de reasignación sexual, conlleve la anotación marginal en su acta primigenia y la constancia en los correspondientes asientos registrales, así como que la reserva de estos datos tenga excepciones; correspondiendo, en cada caso concreto, a las autoridades competentes resolver las posibles controversias o conflictos que, posteriormente al cambio registral, pudieran llegar a presentarse.

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXXIII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Es así como los integrantes de esta comisión, acordamos establecer al respecto lo siguiente:

**ARTÍCULO 124.** Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género.

Procederá el reconocimiento de la identidad de género ante la Dirección, en los términos de la presente sección y demás disposiciones aplicables, para lo cual la persona interesada deberá presentar:

1. Solicitud debidamente detallada en la que conste el consentimiento libre e informado de que se reconozca su identidad de género.
2. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia.
3. Original y copia fotostática de una identificación oficial.

La Dirección una vez resuelto el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, remitirá la resolución administrativa a la Oficialía que corresponda a efecto de que reserve y margine el acta primigenia, en libros y base de datos y levante una nueva acta de nacimiento con los datos contenidos en la resolución administrativa.

Respecto del acta reservada no se publicará ni expedirá ninguna, salvo mandamiento judicial.

Concluido el procedimiento se enviarán los oficios con la información, en calidad de confidencial, a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional Electoral, Procuraduría General de la República, Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Poder Judicial de la Federación; así como a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud del Gobierno Estatal, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Registro Nacional de Población e Identificación Personal y a la Unidad Central Estatal del Registro Civil que corresponda.

Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados, serán oponibles a terceros desde de su levantamiento.

Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta, no se modificarán ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona; incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán inmodificables, salvo en los casos en los que la ley determine su extinción y modificación.

**ARTÍCULO 125.** Además de lo señalado en el artículo 124 de esta Ley, en el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser de nacionalidad mexicana.

II. Tener 18 años cumplidos.

III. Manifestar el nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia.

IV. Manifestar el nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género solicitado.

**ARTÍCULO 126.** La Dirección girará oficios, con carácter de información confidencial, cuando sea solicitado por autoridad competente, bajo criterios de estricta proporcionalidad.

**ARTÍCULO 127.** El acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género debe contener los datos que establece el artículo 58 de la Ley para la Familia, en el entendido que en el rubro de sexo se asentará el género femenino o masculino.

**ARTÍCULO 128.** La autoridad administrativa no podrá oponerse o negarse a la realización del procedimiento administrativo de cambio de género, salvo por las causas de:

1. Vicios al consentimiento libre e informado del solicitante y;
2. Fraude a la ley.

Así mismo, la cancelación o nulidad de las nuevas actas de nacimiento inscritas por reasignación de identidad de género no procederá por la vía administrativa, quedando a salvo los derechos de las personas interesadas de promoverla por la vía judicial que corresponda.

En este orden de ideas estimamos que la norma en los términos en los que está prevista en el proyecto garantiza la libertad, igualdad, no discriminación por razón de género, el libre desarrollo de la personalidad y la no injerencia arbitraria a la vida privada de todas las personas y los derechos de terceros y el orden público.

* Se contempla un capítulo relativo a las inscripciones de actas con situación de extranjería (actualmente no contemplado en la ley vigente), en los que los solicitantes para inscripción de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, deberán de presentar los documentos siguientes:

1. Solicitud por escrito firmada por quien se presenta a realizar la inserción.
2. Identificación oficial con fotografía del solicitante.
3. Acta extranjera debidamente legalizada o apostillada por la autoridad competente, en original.
4. Clave Única de Registro de Población, entre otros.

* Para iniciar el procedimiento de designación de Oficiales de Registro Civil:
  + Cada aspirante presentará la solicitud, anexando los documentos que acrediten la idoneidad para el cargo, los requisitos son:
    1. Ser de nacionalidad mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos.
    2. No ser ni haber sido ministro de algún culto religioso.
    3. Ser de reconocida probidad y honradez.
    4. No haber sido condenado por delito intencional que merezca pena privativa de libertad.
    5. De preferencia tener título oficial de Licenciado en Derecho y/o contar con conocimientos en la materia de Derecho Registral Civil y Familiar.
    6. Acreditar los exámenes o pruebas de conocimiento que le sean aplicados por la Dirección.

En este apartado es necesario referir que una de las propuestas de reforma parcial a la ley del registro civil analizadas, es la promovida por la Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván, y persigue por finalidad modificar el requisito que se establece en la ley vigente consistente en contar preferentemente con título oficial de Licenciado en Derecho o de Profesor y tener conocimientos en materia de Derecho Registral Civil, al estimar esta disposición discriminatoria y contraria a lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para la promovente dicha porción normativa no respeta los principios de eficiencia, mérito y capacidad, de otras profesiones, respecto a las de licenciado en derecho y profesores por lo que propone se incorpore la redacción siguiente:

“Tener título oficial de Licenciado en Derecho o de cualquier otra licenciatura y/o su equivalente educativo y contar con conocimientos en materia registral”.

Si bien es cierto los integrantes de esta comisión estamos de acuerdo en algunos de los planteamientos que hace la Diputada, después de un arduo ejercicio de análisis concluimos que atendiendo a la naturaleza de la institución del registro civil y dada la importancia de la función que realiza consistente en hacer constar de manera auténtica todos los hechos y actos del estado civil de las personas y los efectos que ello conlleva en la garantía de diversos derechos humanos, que el imponer entre los requisitos para fungir como oficial del registro civil el de contar con el nivel de estudios de licenciatura o su equivalente y conocimientos en materia registral, pudiera traer como consecuencia una imposibilidad fáctica, y legal de nombrar oficiales en algunos lugares remotos del estado y ello perjudicaría gravemente a ciertos sectores de la población.

En virtud de lo anterior es que dicha propuesta no quedó plasmada en el proyecto de decreto consignado en este documento.

Por lo que hace a la iniciativa de la Diputada Rosa Nilda González Noriega, relativa a establecer que las autoridades del estado y los municipios deberán admitir sin mayor requisito las certificaciones de las actas del registro civil que se les presenten, y no podrán exigir que tales certificaciones sean expedidas con fecha reciente, quienes dictaminamos estamos de acuerdo con la promovente, en que las actas son documentos públicos que hacen prueba plena de lo que en ellas consta, y que las mismas no tienen una vigencia, por lo que se acordó incorporar al proyecto de decreto, la propuesta planteada por la Diputada, con algunas modificaciones, a efecto de establecer “siempre que no contengan alteración, tachadura, enmendadura o entrerrenglonado, y sean legibles en su totalidad” y ello con el propósito de dar mayor certeza y seguridad jurídica.

El proyecto de Decreto también prevé lo siguiente:

* + La Dirección notificará a los interesados que cumplan con los requisitos para presentar el examen.
  + El examen constará de dos etapas y se desarrollara de la siguiente manera:

1. El aspirante contará con el apoyo de un analista designado por la Dirección para explicar el proceso de captura.
2. La asesoría no se comprenderá dentro del lapso concedido para el examen y no excederá de treinta minutos.
3. Concluida la capacitación el aspirante elegirá un tema al azar.
4. Para la redacción del asentamiento se le concederá un término de una hora.
5. Una vez terminada la primera etapa se iniciará con el examen escrito, al cual también se le concederá una hora para su desarrollo.
6. Cada uno de los integrantes podrá además hacer las preguntas que considere pertinentes en relación con ambas pruebas.
   * Concluida la sesión el jurado levantará el acta relativa al examen, la cual deberá contener todas las circunstancias de la sesión y será firmada por quienes hayan intervenido en la misma.
   * El jurado calificará de forma independiente cada etapa, que para ser considerada aprobatoria deberá ser mínima de ocho.
   * Por conducto de la Dirección notificará a la o el aspirante dentro de los 8 días hábiles siguientes, el resultado.
   * Con el acta firmada se formará un expediente y se remitirá una copia del mismo a la Secretaría de Gobierno, ésta remitirá al titular del Ejecutivo del Estado, el informe del jurado para el otorgamiento del nombramiento como Oficial.

* Se prevé lo referente a las visitas de inspección y su respectivo procedimiento, las cuales podrán ser ordinarias y especiales. Las primeras se realizarán por cumplimiento del calendario establecido y las segundas por queja de usuario.
* Se establecen las infracciones, sanciones y el procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones, para los Oficiales del Registro Civil.
* En relación a las infracciones y sanciones para los servidores públicos de la Dirección del Registro Civil, se sujetarán en lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**RÉGIMEN TRANSITORIO**

* Esta ley entrará en vigor a los 60 días hábiles siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
* Se abroga la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila, publicada el 25 de julio de 2003.
* La Persona titular del Ejecutivo dentro del plazo de 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta ley, expedirá las adecuaciones que resulten necesarias al Reglamento Interior del Registro Civil.
* Dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta ley, deberán realizarse las adecuaciones a los formatos, medios electrónicos, e información publicada en el portal del Registro Civil para adecuarlas a los términos del presente Decreto.
* Todos los asuntos que se encuentren en trámite seguirán tramitándose de conformidad con las disposiciones vigentes al momento que fueron iniciados.
* Dentro del plazo de 60 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, se deberán de realizar las adecuaciones necesarias a las leyes, reglamentos, y demás disposiciones que resulten procedentes.

Es por todo lo anteriormente señalado, que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, consideramos que la iniciativa objeto de estudio, responde a las exigencias sociales y permite dar certeza y seguridad civil, en un contexto de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, ya que representa al Registro Civil como una institución de orden público e interés social que contribuirá y responderá de manera responsable, a través de la elaboración de un nuevo marco jurídico, buscando un orden y unificado el actuar de los servidores públicos bajo el más estricto apego a la transparencia, honestidad y respeto a los derechos humanos, dentro de los procesos y servicios.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se crea la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**LEY DEL REGISTRO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**TÍTULO PRIMERO**

**OBJETO DE LA LEY**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 1.** Esta Ley es de orden público y de observancia obligatoria en el régimen interno del Estado de Coahuila de Zaragoza. Su objeto consiste en reglamentar la organización y funcionamiento del Registro del Civil.

**ARTÍCULO 2.** Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acta: Documento que da fe pública del estado civil de las personas físicas, asentada por las o los Oficiales del Registro Civil.

II. Aclaración administrativa: Enmienda, variación, adición o reemplazo de algún dato o circunstancia que se consignó u omitió al practicar la inscripción de un acta del estado civil, por medio del procedimiento respectivo.

III. Anotación marginal o asiento: Asiento secundario puesto al margen, al calce o en su caso, al reverso de las actas del estado civil, que hacen referencia a una modificación, rectificación o aclaración en el acta que corresponda.

IV. Apéndice: Complemento que se integra con los documentos que sirven de base para la inscripción de un acta.

V. Constancia: Es el documento emitido por funcionarios del Registro Civil en el cual se da testimonio de un hecho o acto en materia registral, diferente de las actas del registro civil y de las copias certificadas.

VI. Copia Certificada: Extracto fiel de un acta, autenticada por la firma y sello del funcionario autorizado para ello, expedida en la forma autorizada o papel simple.

VII. Dirección: La Dirección del Registro Civil.

VIII. Expediente: Instrumento integrado por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite.

IX. Extranjero: Persona que no posee la calidad de mexicano de acuerdo al artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

X. Forma única: Documento aprobado por el Registro Nacional de Población que contiene medidas de seguridad y en el cual se imprimen los datos que corresponden a un acta o copia certificada del registro civil.

XI. Identidad de género: La convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe así misma, la cual se puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta de nacimiento.

XII. Ley: Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

XIII. Ley para la Familia: Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

XIV. Oficial: Oficial del Registro Civil.

XV. Oficialía Automatizada: Oficialía que cuenta con equipo de cómputo, internet y en su caso está interconectada a la Dirección.

XVI. Oficialía no Automatizada: Oficialía que no cuenta con equipo de cómputo, internet y no está interconectada a la Dirección. Inscribe y expide los actos registrales mecanográficamente.

XVII. Papel simple: Hoja que contiene elementos de seguridad para verificar la información contenida en la certificación, tendrá el mismo valor probatorio y jurídico que la forma única.

XVIII. Rectificación administrativa: Referida a la corrección del nombre propio en los términos del capítulo correspondiente.

XIX Reglamento: Reglamento Interior del Registro Civil para el Estado de Coahuila.

XX. Resolución: Decisión escrita por la que la Dirección resuelve en definitiva las cuestiones planteadas a petición de parte sobre aclaraciones administrativas.

XXI. Solicitud: Formato que la o el interesado firma ante la autoridad responsable para plantear su requerimiento.

XXII. Unidad administrativa: Área adscrita a la Dirección con facultades y obligaciones establecidas en el Reglamento.

XXIII. Usuario: Persona que recibe un servicio o trámite.

**ARTÍCULO 3.** De acuerdo al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, si esta Ley usa el género masculino deberá ser interpretada en sentido igualitario para hombres y mujeres, entendiendo que adquieren toda clase de derechos y deberes jurídicos de forma igualitaria.

**ARTÍCULO 4.** El Registro Civil es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno que le estará jerárquicamente subordinado. Su función es de interés público. Su objeto consiste en hacer constar de manera auténtica, todos los actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas físicas, mediante la intervención de personas dotadas de fe pública, denominadas Oficiales del Registro Civil, o en su caso, Oficiales del Registro Civil Adjuntos, a través de un sistema organizado de publicidad.

La coordinación, supervisión y evaluación del Registro Civil corresponderá a la Secretaría de Gobierno, por conducto de la Subsecretaría o unidad administrativa que se señale en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno o conforme lo instruya el o la titular de la misma.

**ARTÍCULO 5.** El Registro Civil es público. Tendrán acceso a él todas las personas interesadas en conocer el contenido de las inscripciones existentes y de los documentos relacionados con las mismas, en tanto no se indique como reservada por ministerio de ley u orden judicial.

La Dirección promoverá ante la comunidad, a través de las campañas de difusión que estime convenientes, el registro y la trascendencia de la formalización de los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas físicas.

También difundirá, por los medios idóneos, sobre la naturaleza de los servicios que presta, los procedimientos correspondientes y el monto de los derechos que deberán cubrirse por los mismos.

**ARTÍCULO 6.** La certificación será el medio de publicidad de las actas, asientos y documentos, que se encuentren en los archivos del Registro Civil.

Las certificaciones podrán ser positivas o negativas. Serán positivas cuando reproduzcan literalmente o en extracto, un acta, asiento o documento, seguidas de una fórmula que determine la concordancia entre aquéllas y éstos. Serán negativas cuando, con base en los datos contenidos en los libros o en los índices, se limiten a indicar la inexistencia de un asiento o de un documento relativo a un hecho o acto determinado.

En toda certificación se incluirá el lugar y la fecha de su emisión; el nombre y la firma de la o el servidor público que tiene encomendada la función de autenticar y el sello de la oficina correspondiente.

**ARTÍCULO 7.** Toda persona podrá solicitar y obtener a su costa copia certificada de las actas, asientos, documentos y apuntes relacionados con ellas, existentes en los libros, índices y apéndices correspondientes.

**ARTÍCULO 8**. Las copias certificadas y constancias deberán expedirse en las formas autorizadas.

Las copias certificadas y las certificaciones serán autenticadas por la Dirección, conforme lo determine la presente Ley y de acuerdo al sistema de asignación previsto en la misma, cuando se trate de actas, asientos, documentos o apuntes que obren en el Archivo General del Registro del Civil. En este caso, el sistema de asignación incluirá a quien ocupe la titularidad de la Dirección, de la Subdirección Jurídica, de la Oficialía Mayor, las y los Registradores y a quienes la Secretaría de Gobierno autorice por medio de acuerdo administrativo que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

La autenticación de los hechos y actos que hayan sido registrados en las Oficialías, se realizará por los propios encargados de las Oficialías, titulares o adjuntos en su caso, y en cuyas Oficialías consten los hechos o actos registrados.

**ARTÍCULO 9.** La persona titular de la Dirección establecerá, mediante disposiciones de carácter general o particular, un sistema de asignación mediante el cual se ejercerá la función de autenticación.

El sistema de asignación deberá, por lo menos, contemplar:

I. El turno en el que intervendrá el personal a quien, conforme el artículo que antecede, se le otorgue la facultad de autenticación.

II. El período de tiempo durante el cual se ejercerá la atribución de autenticar.

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección podrá variar el orden y el tiempo previamente establecido, a efecto de garantizar la continuidad, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la atribución correspondiente.

Para los efectos anteriores, la Dirección será responsable de realizar o, en su caso, vigilar la realización de los cambios respectivos en el sistema interior de autenticación, a efecto de que puedan ejercer tal función quienes ocupen las jefaturas de las unidades administrativas facultadas para ello.

**ARTÍCULO 10.** La certificación podrá autentificarse con firma autógrafa o por cualquier otro mecanismo que se desarrolle en virtud de las tecnologías de la información y comunicación.

Estos podrán ser firma electrónica, clave, código o cualquier otra forma de autentificar por medios electrónicos, la autorización del funcionario competente, según el sistema que implemente la Dirección. La Dirección, deberá utilizar mecanismos confiables para evitar la falsificación de documentos a través de los códigos, sellos digitales y demás medidas que se desarrollen.

Para efectos de firma electrónica y utilización de tecnologías de la información se estará a lo que disponga la Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de Tecnologías Digitales de Información para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás relativas.

**ARTÍCULO 11.** La facultad para autenticar las copias certificadas y/o las certificaciones, corresponderá de manera exclusiva a quienes esta Ley les otorgue dicha facultad, la cual no podrán delegar en persona alguna.

**ARTÍCULO 12.** Las copias certificadas y las certificaciones emitidas por las y los servidores públicos facultados para ello conforme a esta Ley, y que sean autenticadas a través de firma electrónica, clave, código o cualquier otra forma de autenticar por medios electrónicos, tendrán el mismo valor jurídico y probatorio que las suscritas en forma autógrafa.

**ARTÍCULO 13.** El estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias relativas al Registro Civil, salvo lo dispuesto en los artículos 37, 76, 80, 337 y 338 de la Ley para la Familia.

Las copias certificadas y las certificaciones tendrán el carácter de documentos públicos. Cuando la certificación no apareciere conforme al acta a que se refiere, se estará a lo que de ésta resulte, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda.

Las autoridades del Estado y los municipios deberán admitir, sin mayor requisito, las certificaciones de las actas del Registro Civil que se les presenten para efectuar los trámites correspondientes a cada dependencia gubernamental, y no podrán exigir que tales certificaciones deban de haber sido expedidas con fecha reciente al acto a tramitar, siempre que no contengan alteración, tachadura, enmendadura o entrerrenglonado y sean legibles en su totalidad.

**ARTÍCULO 14.** Para establecer el estado civil adquirido fuera del territorio del Estado, pero dentro de la República Mexicana, se observará lo dispuesto en la fracción IV del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**ARTÍCULO 15.** Para establecer el estado civil adquirido fuera de la República Mexicana, se observará lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley para la Familia, en el Título Tercero, Capítulo Décimo de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

**ARTÍCULO 16.** Las y los Oficiales que intervengan, en el ámbito de su competencia, en actos o hechos del estado civil o familiar de extranjeros, no podrán negarles, independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos del estado civil ni la expedición de actas relativos al nacimiento, reconocimiento de hijos e hijas, matrimonio, divorcio, defunción, pacto civil de solidaridad y su terminación, sin establecer mayores restricciones que las señaladas de manera general para los mexicanos.

**ARTÍCULO 17.** Ante cualquier acto u hecho no contemplado en la presente Ley, en el que el respeto, protección y garantía de los derechos humanos se vulneren, se aplicará por el Registro Civil, cualquier mecanismo que, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y los tratados internacionales, tienda a garantizar el goce y ejercicio de estos derechos, previo acuerdo dictado por la persona titular del Poder Ejecutivo o en su caso, por la persona titular de la Secretaría de Gobierno y, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**TÍTULO SEGUNDO**

**LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO**

**DEL REGISTRO DEL CIVIL**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 18.** El Registro Civil contará con una Dirección, a la que corresponderá la organización, dirección, vigilancia y administración de las oficinas del Registro Civil y de las unidades administrativas adscritas a ella. Dicha Dirección también estará a cargo de la coordinación, vigilancia, control y supervisión de las Oficialías.

La Dirección tendrá su sede en la capital del Estado.

**ARTÍCULO 19.** Quien ocupe el cargo de titular de la Dirección deberá ejercer las atribuciones que le otorguen esta Ley u otras disposiciones aplicables. En el desempeño de las funciones, se podrá auxiliar de quienes ocupen las jefaturas de las unidades administrativas que se determinen en el Reglamento.

Además contará con las atribuciones de un Oficial, quedando facultado para dar fe pública de los hechos y actos jurídicos vinculados al estado civil de las personas físicas.

**ARTÍCULO 20.** Las atribuciones que correspondan a cada unidad administrativa, así como las facultades y obligaciones de quienes ocupen las jefaturas de las mismas, se determinarán en el Reglamento.

Las Unidades Administrativas contarán con el número de empleados que determine el correspondiente Presupuesto de Egresos en el Estado.

**ARTÍCULO 21.** El Registro Civil estará integrado por las Oficialías que se requieran según el número de habitantes por municipio o localidad, o bien según su extensión territorial.

El acuerdo de la persona titular del Ejecutivo del Estado que contenga la determinación del número de la Oficialía y su respectiva competencia territorial, deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO 22.** La Dirección supervisará y vigilará que sean realizados, en los términos de las disposiciones aplicables, los registros cuyos derechos hubieren sido objeto de estímulos o subsidios fiscales mediante resolución de carácter general emitida por el titular del Ejecutivo del Estado o por la Secretaría competente, así como de aquellos cuyos derechos exima de pago en atención a los programas de asistencia social y demás que se implementen por las instancias competentes en beneficio de los grupos o sectores más vulnerables en la entidad y de aquellos que implemente la propia Dirección.

**TÍTULO TERCERO**

**LOS LIBROS Y LAS ACTAS DEL REGISTRO DEL CIVIL**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 23.** Las actas del Registro Civil se recopilarán en ocho libros que se llevarán por triplicado o cuadruplicado, según se trate de Oficialía Automatizada o no Automatizada respectivamente. Las actas respectivas podrán constar por escrito o en medios magnéticos o electrónicos. En ellas se estampará la firma autógrafa o electrónica.

Los libros deberán contener:

I. El primero, actas de nacimiento.

II. El segundo, actas de reconocimiento.

III. El tercero, actas de tutela, así como las inscripciones de las que declaren la necesidad de asistencia y representación para administrar bienes.

IV. El cuarto, actas de matrimonio.

V. El quinto, actas de divorcio.

VI. El sexto, actas de defunción e inscripción de las ejecutorias que declaren la ausencia o la presunción de muerte.

VII. El séptimo, actas del pacto civil de solidaridad.

VIII. El octavo, actas de terminación de los pactos civiles de solidaridad.

**ARTÍCULO 24.** Toda acta deberá inscribirse en el número de ejemplares que correspondan al registro y en ellos, deberán constar las firmas autógrafas o electrónicas de la o el Oficial y de quienes comparecen, cuando así corresponda.

**ARTÍCULO 25.** Las actas del Registro Civil sólo se inscribirán en las formas siguientes: nacimiento, reconocimiento de hijos e hijas, matrimonio, defunción, divorcio, registro de pacto civil de solidaridad y terminación del mismo, inscripción de las sentencias ejecutoriadas que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela, las que declaren la necesidad de asistencia y representación para administrar bienes.

En caso de adopción plena sólo se inscribirá acta de nacimiento.

**ARTÍCULO 26.** Las y los Oficiales deberán llenar las actas autorizadas con los datos exigidos por la Ley para la Familia, esta Ley u otras disposiciones aplicables, cubriendo con rayas horizontales los espacios sobrantes.

**ARTÍCULO 27.** Ninguna autoridad podrá ordenar, cualquiera que sea su categoría y/o competencia, que se extraigan de las oficinas del Registro Civil los libros, apéndices y demás documentos que le pertenezcan y obren bajo su responsabilidad. Se exceptúan de esta regla a la persona titular del Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Gobierno, de la Dirección o por mandato de autoridad judicial competente.

Las y los Oficiales, salvo las excepciones a que se refiere el párrafo que antecede, no obedecerán las órdenes que se libren para tal efecto, debiendo únicamente remitir bajo su estricta responsabilidad los apéndices y demás documentos al taller en donde deban ser encuadernados y otorgar copia cuando se les solicite por autoridad competente.

**ARTÍCULO 28.** Además de los ocho libros a que se refiere el artículo 23 de esta Ley, las y los Oficiales formarán los apéndices que sean necesarios, con los apuntes y documentos que presenten los interesados y con la constancia del pago de los derechos correspondientes, foliándose progresivamente y anotando en cada apéndice el número del acta respectiva y el sello de la Oficialía.

**ARTÍCULO 29.** En toda acta del Registro Civil se hará constar la fecha de registro, que comprende el año, mes, día y, en su caso, hora en que se presenten los interesados. Se tomará razón detallada de los documentos que se exhiban y se asentarán los nombres, la edad, la profesión, el domicilio y la nacionalidad de los que en ellas sean mencionados en cuanto fuere posible. Deberán contener además la Clave de Registro e Identificación Personal.

Las Oficialías autorizadas para emitir la Clave Única de Registro de Población, deberán invariablemente insertar la clave en las copias certificadas de nacimiento.

**ARTÍCULO 30**. En las actas del Registro Civil no podrá asentarse, ni por vía de nota o advertencia, anotación distinta de lo que deba ser declarado para el acto preciso a que ellas se refieren y lo que esté expresamente prevenido en esta Ley y la Ley para la Familia.

**ARTÍCULO 31.** Los libros del Registro Civil se formarán anualmente con los ejemplares que correspondan a cada registro, y no deberán superar doscientas hojas por cada tomo. Las formas únicas en que consten las actas deberán contener el número de folio, estar selladas y firmadas por las o los Oficiales.

**ARTÍCULO 32.** Dentro de los cinco días siguientes a que concluya el mes cada Oficial remitirá a la Dirección los ejemplares que correspondan al Archivo General, mismos que deberán ir debidamente sellados y firmados.

**ARTÍCULO 33.** Los registros de nacimiento y defunción que se realicen fuera del plazo, conforme lo dispuesto por la Ley para la Familia y demás disposiciones aplicables, sólo se efectuarán mediante la presentación del certificado de inexistencia, además de los requisitos que le sirvan de sustento de acuerdo a lo que determine la presente Ley.

**ARTÍCULO 34.** Las personas que intervengan como testigos en el asentamiento de las actas del Registro Civil deberán demostrar por medio de documentos oficiales, ser mayores de edad. Los testigos serán en el número que, para cada acto o hecho del Registro Civil, determine la Ley para la Familia. Se preferirá a aquéllos que designen los comparecientes, aun cuando sean parientes de los mismos.

**ARTÍCULO 35.** Asentado el hecho o acto y extendida el acta, ésta será leída a las y los interesados por la o el Oficial. El acta deberá ser firmada por quienes comparecen y si alguno no puede o no sabe firmar, lo hará otra persona a su ruego y se imprimirá la huella digital de quien no firmó. También se hará constar que el acta fue leída y que quienes comparecen quedaron conformes con su contenido.

**ARTÍCULO 36.** Si alguna de las personas interesadas, quisiere imponerse por sí mismo del tenor del acta, quedará facultado para hacerlo y si no pudiere leer, la persona que designe de entre las y los presentes, la leerá a su ruego.

**ARTÍCULO 37.** Si un acto comenzado se entorpeciere por cualquier motivo, la o el Oficial inutilizará el acta marcándola con dos líneas transversales, debiéndose expresar la causa que suspendió el acto. En estos casos, la o el Oficial deberá firmar el acta y, en su caso, quienes comparecen al acto. En caso de negativa de éstos, se asentará la causa de la misma.

**ARTÍCULO 38.** En todo asentamiento se observarán las prevenciones siguientes:

I. Las actas constarán en idioma español. Se numerarán ordinariamente, valiéndose de números arábigos, utilizando al efecto cinco dígitos.

II. Las fechas de registro se anotarán con números arábigos utilizando dos dígitos, tanto para el mes como para el día, de igual manera se procederá con la hora. En el caso de los años, éstos se anotarán completos con cuatro dígitos. Las fechas de nacimiento y defunción se anotarán con números arábigos utilizando dos dígitos para el día, los años se anotarán completos con cuatro dígitos y el mes con letra.

III. En ningún caso se emplearán abreviaturas.

IV. No se harán raspaduras, ni se permitirá borrar lo escrito. Cuando sea necesario testar alguna palabra o frase, se pasará por ella una línea delgada de manera tal que pueda leerse lo escrito. Antes de autorizar el acta se salvará con toda claridad lo entrerrenglonado y testado con la leyenda “lo testado no vale, lo correcto es…”.

En el supuesto previsto por el artículo 350 de la Ley para la Familia, la testadura se hará por completo, de modo que las palabras o frases correspondientes queden absolutamente ilegibles, advirtiéndose al final que “lo testado no vale”.

**ARTÍCULO 39**. En toda inscripción de sentencias se observará lo siguiente, se transcribirán a renglón seguido: Tribunal que la dictó, número de expediente y tipo de procedimiento, los puntos resolutivos de la sentencia y la fecha de ejecutoria de ésta.

La o el Oficial efectuará la anotación marginal en el acta que corresponda.

**Artículo 40.** Los indígenas y sordomudos, para la inscripción de los actos y hechos del estado civil de las personas físicas, tendrán derecho a un intérprete en su lengua o lenguaje de comunicación, que podrá ser elegido o presentado por ellos mismos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que marca la Ley para la inscripción del acto de que se trate.

La o el Oficial podrá proponer las o los interesados la autoridad federal o local competente en la materia.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**LOS LIBROS DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO**

**Y DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS**

**SECCIÓN ÚNICA**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 41.** El registro de nacimiento deberá efectuarse dentro de los sesenta días de ocurrido.

Quienes sean Oficiales deberán registrar toda solicitud de nacimiento que se le presente, previo cumplimiento de los requisitos.

La primera copia certificada del acta de nacimiento se expedirá en forma ágil y de manera gratuita.

**ARTÍCULO 42.** Para efectuar un registro de nacimiento, se deben cumplir con los requisitos siguientes:

I. Comparecencia de los padres, en caso de que no puedan acudir se estará a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley para la Familia.

II. Presentar el certificado de nacimiento del menor emitido por la institución de salud en la que el mismo hubiere nacido.

En caso de que el alumbramiento se hubiere presentado en un lugar diferente a una institución de salud, los progenitores dentro de las veinticuatro horas siguientes al nacimiento, deben dar aviso a la institución de salud más cercana, para que les sea proporcionado el certificado de nacimiento, según corresponda.

lll. Acta de nacimiento de los padres si no están casados, o en su caso, acta de matrimonio de los mismos.

IV. Identificación oficial de padres y/o madres y testigos.

V. Clave Única de Registro de Población de ambos padres.

El nombre de la madre invariablemente se tomará del certificado de nacimiento correspondiente.

Si después de registrado el nacimiento fuere emitida un resolución judicial mediante la cual se determine la paternidad o maternidad, la o el Oficial procederá a realizar las anotaciones que correspondan en las actas respectivas, conforme a dicha resolución.

Respecto al registro provisional que ordene inscribir la autoridad competente, se seguirá lo establecido en el artículo 65 de la Ley para la Familia.

**ARTÍCULO 43.** En toda acta de nacimiento se asentará la huella digital del pulgar de la mano derecha del niño o niña a registrar, a falta de éste se estampará el del pulgar de la mano izquierda, a falta de éstos se anotará la leyenda “no se estampa huella por causa justificada”. La misma obligación tendrán los mayores de 18 años que registren su nacimiento en forma extemporánea.

**ARTÍCULO 44.** Sólo en casos de extrema necesidad debidamente justificada a juicio de la persona titular de la Dirección, las y los Oficiales estarán obligados a acudir al lugar en donde el recién nacido se encuentre, para el efecto de levantar el acta correspondiente.

**ARTÍCULO 45.** De acuerdo con el artículo 59 de la Ley para la Familia, antes de asentar el acta de nacimiento de un hijo habido dentro del matrimonio, las y los Oficiales deberán cerciorarse de que los comparecientes que manifiestan ser los padres están casados entre sí, mediante la exhibición de la copia certificada del acta de matrimonio, cuando no estén casados en la Oficialía en que se efectuará el registro de nacimiento o, mediante la compulsa del libro correspondiente, en el caso de que el matrimonio se haya efectuado en la misma Oficialía en que se registra el nacimiento.

**ARTÍCULO 46.** No se expresará en el acta correspondiente que el hijo o la hija es natural, adulterino o incestuoso, en los casos a que se refieren los artículos 62 y 73 de la Ley para la Familia, ni ninguna otra que califique a la o el registrado. Tampoco se expresará que su filiación fue decretada mediante resolución firme dictada por la autoridad judicial competente, en los casos a que se refiere el artículo 365 del citado ordenamiento.

**ARTÍCULO 47.** En el caso de una niña o niño expósito, a que se refiere el artículo 65 de la Ley para la Familia, la o el Oficial, inscribirá el registro provisional y/o definitivo de nacimiento, según corresponda, en los términos que señala la Ley de la Familia.

**ARTÍCULO 48.** Para la expedición de las actas que la o el Oficial del Registro Civil levante en estos casos, deberá sujetarse a lo establecido en los artículos 65 y 67 de la Ley para la Familia.

**ARTÍCULO 49.** En los casos de adopción, se cancelará el acta de nacimiento del adoptado y, en su lugar, se levantará acta de nacimiento que contendrá los datos de la o el adoptado, de las madres o los padres adoptivos y de las y los ascendientes de éstos, así como de quienes figuren como testigos de ese acto, conservando la fecha de registro original del adoptado. A partir del levantamiento del acta de nacimiento, no se publicará ni se expedirá ninguna otra que revele el origen del adoptado ni su condición de tal, se identificará como reservada por ministerio de ley, observándose, en todo caso, lo previsto en el artículo 81 de la Ley para la Familia. En la base de datos se hará la reserva del acta primigenia a efecto de evitar su expedición.

**ARTÍCULO 50.** Si al dar aviso de un nacimiento se comunicara también la muerte del recién nacido, se extenderán dos actas, una de nacimiento y otra de defunción. En estos casos las actas se levantarán hasta antes de que trascurran seis meses de ocurrida la defunción del recién nacido, sin necesidad de obtener el certificado de inexistencia que corresponda en los términos de la presente Ley y de la Ley para la Familia.

Concluido el plazo antes señalado se deberá solicitar la expedición de los certificados de inexistencia correspondientes.

**ARTÍCULO 51.** Si después de registrado el nacimiento, se pretendiere realizar el reconocimiento de un hijo nacido fuera de matrimonio, se deberán satisfacer los requisitos exigidos por el artículo 74 de la Ley para la Familia.

La o el Oficial deberá orientar a las y los interesados respecto de los requisitos que deberán cubrir para que se realice el reconocimiento.

Respecto al orden de los apellidos, se estará a lo que disponen los artículos 18, 20, 21 y 23 de la Ley en mención.

**ARTÍCULO 52**. Si el reconocimiento se hiciere en oficina distinta de aquella en la que se levantó el acta de nacimiento, la o el Oficial que autorice el acta de reconocimiento, informará a las personas interesadas que deberán presentar el asentamiento a la Oficialía donde se efectuó el registro de nacimiento y a la Dirección, a efecto de que se realice por ambos la anotación en el acta respectiva.

**ARTÍCULO 53.** En el caso de partos múltiples la o el Oficial asentará un acta por cada uno, teniendo en cuenta el orden del nacimiento según se desprenda del certificado de nacimiento.

**ARTICULO 54.** Si el nacimiento ocurre dentro de una institución penitenciaria se señalará como domicilio el del padre, o en su defecto, el que tenía la madre antes de su detención.

**CAPÍTULO TERCERO**

**LOS LIBROS DE LAS ACTAS DE TUTELA**

**ARTÍCULO 55.** Las actas de tutela se asentarán con arreglo a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Quinto de la Ley para la Familia.

**ARTÍCULO 56.** Una vez asentada la inscripción del auto de discernimiento que declare la tutela, se procederá a efectuar la anotación en el acta de nacimiento del sujeto a tutela, observándose lo dispuesto en el artículo 54 de esta Ley.

**ARTÍCULO 57.** Cuando un juez resuelva que una tutela queda sin efectos por haber desaparecido la causa que le dio origen; o bien, porque el sujeto a ella, entró a la patria potestad por reconocimiento o adopción, deberá remitir previo pago de los derechos correspondientes y dentro de los tres días hábiles siguientes, copias certificadas de su resolución a la Oficialía que corresponda y a la Dirección, para que se proceda a cancelar el acta de tutela y la anotación marginal a que se refiere el artículo que antecede.

**CAPÍTULO CUARTO**

**EL LIBRO DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO**

**ARTÍCULO 58.** La celebración del matrimonio se sujetará a las formalidades y solemnidades que establece la Ley para la Familia.

**ARTÍCULO 59.** Toda persona que pretenda contraer matrimonio, deberá tener 18 años de edad y satisfacer lo previsto en los artículos 86 y 87 de la Ley para la Familia.

**ARTÍCULO 60**. Las y los Oficiales proporcionarán a quienes pretendan contraer matrimonio, las formas de solicitudes de matrimonio, sin perjuicio de la libertad que tienen de formular este documento de manera distinta y de acuerdo con sus circunstancias particulares.

**ARTÍCULO 61.** Los extranjeros que pretendan contraer matrimonio en la entidad, deberán cumplir con los requisitos señalados para la celebración del matrimonio, respetando lo que establece el artículo 16 de la presente Ley. Será necesario presentar en original acta de nacimiento, apostillada o legalizada y traducida al español, por perito traductor certificado.

**ARTÍCULO 62.** Si el matrimonio se pretende contraer bajo el régimen de sociedad conyugal, se deberán presentar las capitulaciones matrimoniales, las cuales deberán constar en escritura pública en el supuesto del artículo 181 de la Ley para la Familia, y se acompañará testimonio de ésta.

Si el matrimonio se desea celebrar bajo el régimen de sociedad conyugal, pero no se presentan las capitulaciones matrimoniales, el mismo, por disposición de ley, se entenderá celebrado bajo el régimen de separación de bienes.

**ARTÍCULO 63.** Si quien pretende contraer matrimonio hubiere estado bajo tutela por encontrarse bajo los supuestos a que se refiere el artículo 12 de la Ley para la Familia, se deberá acompañar a la solicitud, la resolución del juicio que haya declarado la cesación de la tutela por haber desaparecido la causa que la motivó.

La simple apariencia que suponga una deficiencia en las funciones o estructuras corporales, no es determinante para limitar el derecho a contraer matrimonio. En todos los casos el o la Oficial estará a lo que dispone el artículo 86 y demás relativos de la Ley para la Familia.

**ARTÍCULO 64.** La o el Oficial tendrá la obligación de anotar en las actas de nacimiento de los contrayentes, la razón de que han contraído matrimonio. Si el nacimiento se hubiera asentado en una oficina distinta a aquélla en que se levantó el acta de matrimonio, la o el Oficial que autorizó el mismo, indicará a los contrayentes que deben presentar copia del acta relativa a la Oficialía donde se registró el nacimiento y a la Dirección para que se realice por ambos la anotación marginal, previo el pago de los derechos que correspondan.

**ARTÍCULO 65.** En caso de que se declare la nulidad del matrimonio, la autoridad judicial competente, remitirá la sentencia a la o el Oficial y a la Dirección, quienes tendrán la obligación de hacer la anotación correspondiente en el acta de matrimonio y nacimiento de los contrayentes, en su caso, y previo el pago de los derechos correspondientes.

**CAPÍTULO QUINTO**

**EL LIBRO DE LAS ACTAS DE DIVORCIO**

**ARTÍCULO 66.** Las actas de divorcio se levantarán de acuerdo con las disposiciones relativas al Título Tercero, Capítulo Séptimo de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza

**ARTÍCULO 67.** De acuerdo con el artículo 103 de la Ley para la Familia, la autoridad judicial que decrete un divorcio, deberá remitir inmediatamente a la Dirección y a la Oficialía que corresponda, copias certificadas de la sentencia que decrete el divorcio y los datos de identificación de las actas de nacimiento y de matrimonio de los divorciados, a efecto de que se levante por la o el Oficial el acta respectiva dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la sentencia y, por ambos, se efectúe la marginación correspondiente, previo el pago de los derechos que correspondan, además la o el Oficial del Registro Civil que levante el acta de divorcio deberá requerir de las o los interesados la Clave Única de Registro de Población.

**ARTÍCULO 68.** La autoridad judicial que resuelva que un divorcio queda sin efectos, deberá remitir copia certificada de su resolución a la o el Oficial que corresponda y a la Dirección en los términos del artículo anterior, para que se proceda a cancelar el acta de divorcio y las anotaciones marginales que conciernan, previo el pago de los derechos correspondientes.

**ARTÍCULO 69.** La copia certificada de la sentencia a que se refieren los artículos 67 y 68 de esta Ley y los demás documentos relativos, pasarán a formar parte del apéndice que corresponda.

**ARTÍCULO 70.** El divorcio administrativo debe promoverse ante la o el Oficial de su domicilio conforme al artículo 241 de la Ley para la Familia, y se deberá presentar los siguientes requisitos:

I. Solicitud por escrito.

II. Copia certificada actualizada del acta de matrimonio.

III. Copia certificada del acta de nacimiento de los interesados.

IV. Certificado médico de no gravidez.

V. Identificación oficial con fotografía.

VI. Acta de nacimiento de hijos.

VII. Documento que acredite la liquidación de la sociedad conyugal, ante notario o juez competente.

VIII. Clave Única de Registro de Población.

**ARTÍCULO 71.** El divorcio voluntario notarial promovido por notario público, deberá inscribirse ante él o la Oficial que celebró el matrimonio, quien levantará el acta correspondiente. Debiendo presentar para ello:

I. Acta circunstanciada fuera de protocolo por la que se consideran divorciados.

II. Identificación oficial con fotografía.

**CAPÍTULO SEXTO**

**EL LIBRO DE LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN**

**ARTÍCULO 72.** Las actas de defunción se asentarán de conformidad con las disposiciones del Título Tercero, Capítulo Octavo de la Ley para la Familia.

Las inscripciones deberán realizarse dentro de los sesenta días de ocurrido el deceso.

Tratándose de un registro fuera del plazo al que se refiere el párrafo que antecede, se deberá acompañar el certificado de inexistencia que corresponda.

**ARTÍCULO 73.** No se podrá realizar ninguna inhumación o cremación sin autorización por escrito que otorgue la o el Oficial, quien deberá exigir la presentación del certificado de defunción correspondiente emitido por médico legalmente autorizado para ello. Tampoco podrá procederse a la inhumación sino hasta después de que transcurran veinticuatro horas del fallecimiento, excepto en los casos en que se ordene lo contrario por autoridad competente.

**ARTÍCULO 74.** Para tener por comprobado el fallecimiento de una persona, la o el Oficial exigirá que se le presente sin alteración alguna, el certificado médico de defunción, en el que consten las generales que se conocieren del difunto, el lugar o domicilio en que haya ocurrido el deceso, la hora del fallecimiento y las causas de éste. Además deberá contener nombre, firma y número de cédula profesional del médico que emite el certificado, así como el sello de la institución médica que corresponda, número de certificado y fecha de expedición y acompañarse de los siguientes documentos:

I. Acta de nacimiento del finado.

II. Acta de matrimonio del finado, en su caso.

III. Identificación de la o el declarante y de testigos.

IV. Copia certificada de la sentencia si se declara la defunción por la autoridad judicial competente.

V. Clave Única de Registro de Población.

**ARTÍCULO 75.** En el acta de defunción se asentarán los datos que la o el Oficial adquiera del certificado médico. El acta de defunción será firmada por la o el declarante y dos testigos de identidad del fallecido. Para tal efecto, se consideran testigos preferentes de identidad del fallecido, sus parientes, si los hay o, en su defecto, sus vecinos.

**ARTÍCULO 76.** Cuando por circunstancias especiales así valoradas por la o el Oficial, no pueda presentarse el certificado médico de defunción, orientará a quien pretenda la inscripción, dirigirse a la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, o cualquier otro de la localidad con cargo o sin cargo oficial o, en último caso, los prácticos, a fin de que se expida gratuitamente el certificado médico de defunción correspondiente.

**ARTÍCULO 77.** Cuando el Ministerio Público averigüe un fallecimiento, dará parte a la o el Oficial para que asiente el acta respectiva, extendiendo al efecto el certificado médico que corresponda con los datos que la o el médico legista asiente en el certificado. Si se ignore el nombre del difunto se asentarán las señas de la o el finado, las de los vestidos y objetos que con él se hubieren encontrado y, en general, todo lo que pueda conducir a identificar a la persona.

La o el Oficial asentará en el espacio correspondiente a anotaciones, que se inscribe a petición del Ministerio Público, anotando número de oficio, fecha y lugar y en su caso, si es información reservada.

Siempre que se adquieran mayores datos, se comunicarán a la o el Oficial para que los anote en el acta correspondiente.

**ARTÍCULO 78.** En los casos de inundación, terremoto, naufragio, incendio o cualquier otro siniestro, desastre, catástrofe y/o calamidad pública en que no sea fácil y/o posible reconocer el cadáver, se formará el acta con los datos que ministren las autoridades competentes, expresando, en cuanto fuere posible, las señas del mismo y de los vestidos u objetos que con él se hayan encontrado.

**ARTÍCULO 79.** En las actas de nacimiento y, en su caso, en las de matrimonio se anotarán, por la o el Oficial y la propia Dirección, los datos relativos a la identificación del acta de defunción, previo el pago de los derechos correspondientes, por lo que quien pretenda asentar la defunción deberá presentar copia certificada de esta a fin de que se efectúen las anotaciones marginales señaladas en los asientos correspondientes.

**ARTÍCULO 80.** La Dirección y las y los Oficiales deberán facilitar a la autoridad competente en materia electoral la información que corresponda a las defunciones registradas, a fin de coadyuvar en las funciones que a ella correspondan conforme a la legislación aplicable.

**ARTÍCULO 81.** Cuando deba inhumarse un cuerpo en un lugar distinto al del fallecimiento, la o el Oficial del lugar, únicamente expedirá la orden de inhumación correspondiente y al efecto requerirá copia certificada del acta de defunción.

**ARTÍCULO 82.** Si en el lugar donde ocurrió el fallecimiento no hay Oficial, el acta se asentara por la o el Oficial más próximo.

**ARTÍCULO 83.** Cuando de una exhumación se desprenda que la causa de la muerte es distinta a la asentada en el acta de defunción, la autoridad judicial competente comunicará por vía oficial a la Dirección y Oficialía correspondiente esta información, a fin de que se efectúe la anotación en el acta de defunción.

**CAPÍTULO SÉPTIMO**

**LAS ACTAS QUE DECLAREN LA AUSENCIA, LA PRESUNCIÓN**

**DE MUERTE O LA NECESIDAD DE ASISTENCIA O REPRESENTACIÓN PARA ADMINISTRAR BIENES**

**ARTÍCULO 84.** Las y los Oficiales, así como la Dirección, al recibir de la autoridad judicial copia certificada de la ejecutoria que declare la necesidad de asistencia o representación para administrar bienes o la que declare la ausencia o la presunción de muerte, en los términos de la Ley para la Familia, tendrán la obligación de levantar el acta en el formato de inscripción que corresponda insertando en el mismo la parte resolutiva de la sentencia judicial que se comunica, efectuando además, la anotación marginal respectiva en el acta de nacimiento a que pertenezca, previo pago de los derechos correspondientes.

También deberá requerir de las o los interesados la Clave Única de Registro de Población de la persona a que se refiera la inscripción.

**ARTÍCULO 85.** Cuando cese la necesidad de asistencia o representación para administrar bienes o se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se presumía, la autoridad que corresponda, dará aviso a la Oficialía y a la Dirección, para que se cancele el acta relativa y la anotación que se hubiere hecho en el acta de nacimiento respectiva.

**CAPÍTULO OCTAVO**

**EL LIBRO DE LAS ACTAS DE INSCRIPCIÓN DE LOS PACTOS CIVILES DE SOLIDARIDAD**

**ARTÍCULO 86.** La celebración del pacto civil de solidaridad se sujetará a las formalidades y solemnidades que establece la Ley para la Familia en su Título Cuarto, Capítulo Décimo Segundo y demás relativos.

**ARTÍCULO 87.** Las y los Oficiales proporcionarán a quienes pretendan contraer pactos civiles de solidaridad, las formas de solicitudes de pacto civil, sin perjuicio de la libertad que tienen los interesados de formular este documento de manera distinta y de acuerdo con sus circunstancias particulares.

**ARTÍCULO 88.** Para la celebración del pacto civil de solidaridad las y los interesados deberán acompañar a la solicitud los siguientes documentos:

I. Copia certificada del acta de nacimiento de las o los solicitantes.

II. Exámenes de laboratorio.

III. Capitulaciones en su caso.

IV. Identificaciones de solicitantes y testigos.

V. Acta de divorcio o defunción de relación anterior, o sentencia que declare la nulidad de matrimonio anterior o pacto civil de solidaridad o unión de hecho.

VI. Clave Única de Registro de Población.

Todos estos documentos formarán parte del apéndice correspondiente.

**ARTÍCULO 89.** Si alguno de las y los solicitantes hubiere estado bajo tutela por encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 12 de la Ley para la Familia, se deberá acompañar a la solicitud, la resolución del juicio que haya declarado la cesación de la tutela por haber desaparecido la causa que la motivó.

**ARTÍCULO 90.** La o el Oficial tendrá la obligación de anotar en las actas de nacimiento de los contratantes, la razón de que han celebrado pacto civil de solidaridad. Si el nacimiento se hubiera asentado en una oficina distinta a aquélla en que se levantó el acta de pacto civil de solidaridad, la o el Oficial que autoriza el mismo, exhortará a las y los interesados a presentar copia del acta respectiva a la Oficialía en que se haya registrado el nacimiento y a la Dirección, para que ambos realicen la anotación marginal respectiva, previo el pago de los derechos correspondientes.

**Artículo 91.** En caso de que se declare la nulidad del pacto civil de solidaridad, la o el Oficial tendrá la obligación de hacer la anotación correspondiente en las actas de pacto civil de solidaridad que correspondan.

**CAPÍTULO NOVENO**

**EL LIBRO DE LAS TERMINACIONES DE LOS PACTOS CIVILES DE SOLIDARIDAD**

**ARTÍCULO 92.** Las actas de terminación de pactos civiles de solidaridad se levantarán de acuerdo con las disposiciones relativas a la Ley para la Familia, en su Título Cuarto, Capítulo Décimo Sexto.

**ARTÍCULO 93.** La o el Oficial que conozca de una terminación de pacto civil de solidaridad, deberá requerir a las partes interesadas:

I. Copia certificada de sus actas de nacimiento.

II. Copia certificada del pacto civil de solidaridad.

III. Clave Única de Registro de Población de las o los interesados.

IV. Documento que acredite la liquidación de la sociedad solidaria.

V. Documento que acredite el aviso indubitable a que se refiere el artículo 262 fracción II de la Ley para la Familia.

VI. Copia certificada del acta de defunción del compañero civil.

Todos estos documentos formarán parte del apéndice correspondiente.

Decretado el mismo, la o el Oficial que corresponda remitirá a la Dirección copia certificada de los datos de identificación de las actas de nacimiento y pacto civil solidaridad, para que se proceda a realizar las anotaciones marginales en las actas correspondientes de quienes fueron compañeros civiles.

Si las actas de nacimiento o la de pacto civil de solidaridad se encuentran en otra Oficialía se procederá de acuerdo al artículo 91 de esta Ley para que se realicen las anotaciones marginales que procedan, observándose en primera instancia lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley para la Familia.

**ARTÍCULO 94.** En el acta de terminación de pacto civil de solidaridad expresará:

I. El nombre y apellidos de las o los interesados.

II. Edad, sexo, domicilio y nacionalidad.

III. La Clave Única del Registro de Población de las o los interesados.

IV. Los nombres de dos testigos de asistencia.

V. La fecha y lugar en que se celebró el pacto civil de solidaridad.

VI. Los demás datos que especifique la forma respectiva de su terminación.

**CAPÍTULO DÉCIMO**

**DE LAS INSCRIPCIONES DE ACTAS CON SITUACIÓN DE EXTRANJERÍA**

**ARTÍCULO 95.** Las actas con situación de extranjería se inscribirán de conformidad con lo que determine la Ley para la Familia y demás disposiciones aplicables.

**ARTÍCULO 96.** Las inscripciones se harán en la formas únicas autorizadas, en el caso de registro de nacimiento podrán extenderse como copia certificada tal como se transcribió la inserción, a excepción de las certificación que se emitan mediante procedimiento seguido como aclaración administrativa a fin de agregar el segundo apellido del registrado.

Para la inscripción de actas de nacimiento, matrimonio o defunción ante las y los Oficiales, se presentarán los siguientes documentos:

I. Solicitud por escrito firmada por quien se presenta a realizar la inserción. En las inscripciones de actas de defunción deberá presentarse por un familiar directo.

II. Identificación oficial con fotografía del solicitante.

III. Acta extranjera debidamente legalizada o apostillada por la autoridad competente, en original.

IV. Si el acta se encuentra en idioma distinto al español, deberá presentarse la traducción original correspondiente, por perito traductor inscrito ante el Tribunal Superior de Justicia.

V. Para la inserción de un acta de nacimiento, deberá presentarse copia certificada del acta de nacimiento del padre o la madre que acredite la nacionalidad mexicana.

VI. Para la inserción de acta de matrimonio, copia certificada del acta de nacimiento de la o el contrayente que demuestre la nacionalidad mexicana.

VII. Para la inserción del acta de defunción extranjera, se requerirá copia certificada del acta de nacimiento del finado que compruebe la nacionalidad mexicana.

VIII. Clave Única de Registro de Población.

Todos estos documentos integrarán el apéndice correspondiente.

La trascripción de las actas con situación de extranjería se hará a renglón seguido.

**ARTÍCULO 97.** Las inscripciones se insertarán en el libro que corresponda de acuerdo al acto o hecho a que hagan referencia, respetando la secuencia del número de acta.

**ARTÍCULO 98.** Tratándose de sentencias de adopción o divorcio dictadas en el extranjero y que deban cumplimentarse en el estado, la sentencia correspondiente deberá remitirse vía exhorto al juzgado que sea competente, quien una vez que sea revisada, remitirá el trámite mediante oficio a la Dirección y a la o el Oficial que corresponda a fin de cumplir con los puntos resolutivos de la sentencia.

**ARTÍCULO 99.** Las actas del registro civil asentadas ante los Consulados de México en el exterior, no requieren de posterior inserción ante las Oficialías en la entidad.

**TÍTULO CUARTO**

**DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 100.** Siempre que sea factible de acuerdo a las plataformas tecnológicas, bases y sistemas propios del Registro Civil, podrá promoverse por medios electrónicos, por persona interesada y autorizada, los trámites de Aclaración y Rectificación, en lo que proceda se aplicará lo dispuesto en Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de Tecnologías Digitales de Información para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO 101.** Si se opta por la promoción electrónica de estos trámites, la persona legitimada debidamente identificada para iniciar el procedimiento deberá manifestar expresamente en la solicitud, que los datos y documentos que se anexen al mensaje de datos, son ciertos y fidedignos, mismos que deberá adjuntar de manera digital y legibles.

**ARTÍCULO 102.** La Dirección en caso de duda o incertidumbre, podrá requerir a la persona interesada, el envío de los documentos en original, por correo certificado o mensajería.

**ARTÍCULO 103.** La Dirección garantizará que la información que corresponda a los trámites realizados por medios electrónicos cumpla con los principios de disponibilidad, eficiencia, localización expedita, integridad, conservación, legalidad y certeza, y adoptará las medidas de seguridad física, técnica y administrativa necesarias para cumplir con la accesibilidad, resguardo y respaldo que amerite.

**ARTÍCULO 104.** En el portal de internet del Registro Civil se detallarán las instrucciones y requerimientos para acceder a los trámites realizados por medios electrónicos.

**TÍTULO QUINTO**

**LAS ANOTACIONES MARGINALES DE LAS**

**ACTAS DEL REGISTRO CIVIL**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**LAS ANOTACIONES**

**ARTÍCULO 105.** Toda acta del Registro Civil relativa a otra ya asentada, podrá anotarse a petición de las o los interesados, siempre que no se trate de las que deban anotarse por mandato judicial o cuando lo disponga expresamente la ley, las anotaciones se insertarán en las certificaciones o copias certificadas que se expidan, si la ley no dispone en contrario y previo el pago de derechos correspondientes.

**ARTÍCULO 106.** Tratándose de anotaciones marginales derivadas de actos o hechos que la o el Oficial deba notificar a la Dirección, lo hará mediante oficio y dentro de los tres días hábiles siguientes al registro o inscripción del acta, en caso de omisión se sujetará a la sanción administrativa que corresponda.

**ARTÍCULO 107.** Si concluida y firmada un acta se hubiere dejado de asentar algún dato, la o el Oficial hará al margen la anotación correspondiente, debiendo firmar y sellar al concluir la anotación, esto en unión de los que intervinieron en el acto, siempre que con dicha anotación no se contradiga la esencia del acto registrado.

**ARTÍCULO 108.** Las anotaciones que de forma posterior al registro y en los términos de esta Ley, deban realizar la Dirección y las y los Oficiales, harán referencia al acta que corresponda, sea que la anotación se realice al margen o en la parte posterior del acta, sin obstruir en ningún momento el contenido de la misma.

**ARTÍCULO 109.** Si después de inscrita una anotación marginal se advierte que dejó de asentarse algún dato que se desprende del documento que le dio origen, el o la Oficial y quien corresponda en la Dirección, mediante una Fe de Erratas complementará la anotación marginal, debiendo firmar la misma.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**LA RECTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 110.** La rectificación o aclaración de un acta del Registro Civil únicamente procederá en los casos y en los términos señalados en artículos 131, 132 y 133 de la Ley para la Familia, siempre que se cumplan las formalidades previstas en los mismos.

**ARTÍCULO 111.** La resolución administrativa que conceda la aclaración o rectificación administrativa de las actas del estado civil, se enviará a la o el Oficial correspondiente a efecto de que realice las anotaciones relativas.

Contra la resolución administrativa que conceda o niegue la aclaración o rectificación del acta, los interesados podrán interponer el recurso de revisión previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

Una vez resuelta en definitiva la aclaración o rectificación, el dato o motivo de la misma no podrá ser objeto de modificación posterior. Tampoco podrá modificarse si la misma tuvo su origen en sentencia judicial.

**ARTÍCULO 112.** El juez que conozca de un juicio de rectificación deberá solicitar un informe a la Dirección a efecto de que en auxilio de las labores del juzgado, le proporcione una copia fotostática certificada del acta que se pretenda rectificar, obtenida de los libros duplicados que obren en su archivo general y manifieste si ante esa dependencia se ha registrado solicitud de rectificación.

**ARTÍCULO 113.** En todo lo no previsto en este capítulo, se aplicarán supletoriamente las disposiciones conducentes del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DEL PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN ANTE LA**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL**

**ARTÍCULO 114.** Procederá la solicitud de aclaración de actas ante la Dirección en los casos previstos por el artículo 119 de esta Ley.

La Dirección podrá delegar en quienes sean Oficiales Coordinadores la instrucción del procedimiento de aclaración hasta la citación para resolución.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las y los Oficiales Coordinadores remitirán dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, el expediente integrado con motivo de la solicitud para que aquélla resuelva conforme a derecho. Dictada la resolución, la Dirección devolverá el expediente a la Oficialía Coordinadora que corresponda, para que notifiquen a las o los interesados y remitirá la resolución a la Oficialía que corresponda para que se realicen las anotaciones correspondientes.

En caso de que de la revisión que realice la Dirección resulten inconsistencias en la integración de la solicitud, devolverá el expediente a la Oficialía Coordinadora a fin de que las subsane o bien, le requiera los elementos faltantes a la o el solicitante y la devuelva a la Dirección para efectos de su resolución.

**ARTÍCULO 115.** Los requisitos para iniciar el trámite de aclaración serán:

I. La comparecencia personal de la o el interesado ante la Dirección u Oficialía Coordinadora o, en su caso, del mandatario especial cuyo mandato conste al menos en documento privado en que aparezca ratificada la firma del otorgante ante notario público. Tratándose de menores de edad deberá comparecer quien ejerza la patria potestad o tutela y los señalados en el artículo 134 fracciones IV y V de la Ley para la Familia.

II. El llenado presencial de la forma de solicitud por la o el interesado, ante la Dirección u Oficialía Coordinadora, previa presentación de identificación oficial con fotografía.

III. Cubrir el pago de los derechos que correspondan.

No se requerirá la comparecencia si la persona interesada o quien promueve en su nombre inician el trámite en línea y se cumple con los requisitos para la procedencia del mismo.

**ARTÍCULO 116.** La solicitud de aclaración contendrá:

I. El nombre completo de la o el solicitante y demás generales que estime necesarios solicitar la Dirección.

II. El documento que presenta para identificarse.

III. Los datos de identificación del acta que se pretende modificar.

IV. Los hechos en que la o el solicitante funde su pretensión numerándolos y narrándolos sucintamente, con claridad y precisión.

V. Los documentos probatorios que demuestren el error en el asentamiento, en los términos de esta Ley u otras disposiciones aplicables.

VI. La firma o huella digital de la o el solicitante.

VII. La fecha de la solicitud.

VIII. Para los trámites realizados por medios electrónicos, la declaración de que los datos y documentos anexos concuerdan fielmente con su original, que estos son ciertos y que estarán disponibles en su forma original si al efecto se requieren.

**ARTÍCULO 117.** La Dirección resolverá dentro de un término de hasta diez días hábiles, los expedientes que ante ella se sustanciaron. Dentro de los quince días hábiles contados a partir de su recepción, resolverá sobre aquellos que se instruyeron ante las Oficialías Coordinadoras.

Los procedimientos derivados de gestiones especiales se substanciarán en veinte días hábiles contados a partir de su recepción.

**ARTÍCULO 118.** A efecto de mejor proveer, la Dirección queda facultada para allegarse de los documentos probatorios que estime convenientes.

Con la resolución la Dirección ordenará que se hagan las anotaciones correspondientes en el original de la Oficialía en que se halle el acta a que aquélla se refiere y en el duplicado de la propia Dirección.

**ARTÍCULO 119.** La Dirección, a petición de parte legítima, previa comprobación, procederá a hacer la aclaración de un acta en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de discrepancias no esenciales entre el libro duplicado y el original.

II. El uso de abreviaturas o guarismos no permitidos, el empleo de idioma distinto al español, siempre que se desprenda del documento que sirvió para la inscripción, la difícil legibilidad de caracteres, el error de escritura, mecanográfico, ortográfico, tipográfico, numérico y otros de carácter accidental, siempre y cuando resulten obvios y no se afecte con su modificación los datos esenciales del acta.

III. Cuando se trate de adicionar asientos ya extendidos y firmados de datos o circunstancias plenamente demostrados, correspondientes a los mismos y que dejaron de consignarse, al practicar el asiento, por desconocimiento de tales datos o por negligencia del o la Oficial, siempre que no se varíe esencialmente el acta.

IV. Cuando se trate de la indicación equivocada de sexo, cuando no haya duda sobre la identidad de la o el nacido y se desprenda del documento que sirva de base a la inscripción.

Las rectificaciones que se soliciten sobre el reconocimiento de la identidad de género deberán seguir el procedimiento indicado en los artículos 124, 125, 126, 127 y 128 de la presente Ley. La resolución judicial que declare el cambio de género que derive de operaciones transgénicas deberá presentarse ante la Dirección y la Oficialía respectiva, a efecto de realizar la anotación marginal que corresponda.

V. Cuando haya que variarse parcialmente algún nombre de las personas que figuren en los documentos, distintas de la o el registrado, siempre que no se afecte la filiación, parentesco o estado civil de éstos o del registrado.

VI. Cuando se proponga la complementación o abreviación del nombre propio o el cambio de alguna letra, tanto del nombre propio como de los apellidos. Si se trata del acta de matrimonio, la aclaración deberá ser solicitada por el cónyuge de cuyo error se trate.

VII. Cuando se trate de aclarar los demás datos de las o los contrayentes o de las personas que en el acta se mencionen, a excepción del régimen patrimonial; siempre y cuando los documentos que sirvan de base para acreditar el error u omisión no hayan sido modificados con posterioridad a la celebración del acto civil de que se trate.

VIII. Cuando se proponga la complementación o variación de los datos insertos en un acta de defunción, siempre y cuando no se refieran al estado civil de la o el finado, causas de la muerte, fecha y lugar del fallecimiento y nombre de la o el cónyuge, concubina o concubino o compañera civil o compañero civil.

IX. Cuando se proponga la complementación de una inscripción de acta extranjera de nacimiento, a fin de adecuar el acta con el segundo apellido del registrado.

X. Cuando se trate de aclarar cualquier otro error, siempre que no se afecte con la modificación los datos esenciales de la misma ni se afecte la nacionalidad, filiación, parentesco o estado civil de la persona a quien se refiere el acta o de quienes intervinieron en ella.

Entendiendo por dato esencial aquel que es constitutivo e imprescindible del acto registral de que se trate.

**ARTÍCULO 120.** Tratándose de duplicidad de asientos registrales inscritos en la entidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

**SECCIÓN TERCERA**

**DEL PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL**

**ARTÍCULO 121.** Procederá la rectificación de actas prevista por el artículo 137 de la Ley para la Familia, tratándose de la variación del nombre propio de la o el registrado en las actas de nacimiento, de conformidad con lo que establece el artículo 17 y demás aplicables de la Ley en mención, cuando exista desacuerdo entre el asiento y la realidad, demostrando a través de documentos fehacientes del estado civil de la o el promovente, que la persona de que se trata ha sido siempre designada con un nombre distinto del que aparece en su acta de nacimiento, siempre que no se requiera prueba distinta de la documental para acreditar la petición. Se admiten como documentos que acrediten lo anterior: acta de matrimonio, acta de nacimiento de hijos, acta de divorcio, a falta de alguno de estos la Dirección podrá solicita acreditación testimonial o de hechos ante notario público para acreditar la pretensión.

La rectificación administrativa podrá promoverse en línea o de forma personal ante la Dirección y ante las Oficialías Coordinadoras, el trámite será por comparecencia de las personas legitimadas en los términos de los artículos 115 fracción I de esta Ley y del artículo 134 de la Ley para la Familia.

**ARTÍCULO 122.** El procedimiento de rectificación administrativa de acta se verificará de la forma siguiente:

I. Se presentará solicitud por escrito con la firma o huella de la o el solicitante o, en su caso, de su representante legal ante la Dirección, requisito sin el cual, no se dará trámite al procedimiento, si se inicia el trámite por medios electrónicos se dará el mismo valor que a los documentos presentados personalmente.

II. Cubrir el pago de los derechos que correspondan.

III. Presentada la solicitud, la autoridad administrativa la analizará y admitirá en su caso, asignándole el número progresivo que corresponda.

IV. La Dirección, a efecto de mejor proveer, podrá para allegarse de los documentos probatorios que estime convenientes y solicitar mediante oficio a las dependencias y entidades correspondientes, la información que se pretenda verificar, confirmar o cotejar, haciendo mención del plazo para dar respuesta, que no excederá de tres días hábiles.

V. Integrado el expediente respectivo y desahogadas las pruebas ofrecidas, la Dirección, resolverá en los plazos señalados en el artículo 117 de esta Ley.

VI. Dictada la resolución que declare procedente la rectificación solicitada, se comunicará a la Oficialía que corresponda para que se realicen las anotaciones marginales.

Para los trámites en línea, la solicitud contendrá la declaración de que los datos y documentos anexos concuerdan fielmente con su original, que estos son ciertos y que estarán disponibles en su forma original si al efecto se requieren.

En caso de duda respecto a los documentos presentados o enviados, la Dirección podrá requerir a la persona interesada la presentación y/o envío de los documentos originales, vía correo certificado o mensajería.

**ARTÍCULO 123.** A la solicitud de rectificación de acta, deberá adjuntarse:

I. El documento oficial que presente la o el promovente para identificarse, con fotografía y huella.

II. El documento que acredite su personalidad, cuando no se tramite a nombre propio.

III. Los datos de identificación del acta que se pretende modificar.

IV. La copia fotostática certificada del libro del acta asentada en la Oficialía correspondiente, que se pretende corregir, siempre que no contenga alteración, tachadura, enmendadura o entrerrenglonado.

V. Los documentos públicos y privados que contengan el nombre o los datos correctos con que la o el interesado o su representante se ostentan.

VI. Los hechos en que la o el solicitante funde su pretensión numerándolos y narrándolos brevemente, con claridad y exactitud.

VII. Los documentos que ofrezca como pruebas, en los términos de esta ley u otras disposiciones aplicables.

Cuando la solicitud de rectificación administrativa carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos que se señalen, se informará a la o el interesado para que corrija o complemente la solicitud o exhiba los documentos ofrecidos.

**SECCIÓN CUARTA**

**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO**

**ARTÍCULO 124.** Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género.

Procederá el reconocimiento de la identidad de género ante la Dirección, en los términos de la presente sección y demás disposiciones aplicables, para lo cual la persona interesada deberá presentar:

1. Solicitud debidamente detallada en la que conste el consentimiento libre e informado de que se reconozca su identidad de género.
2. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia.
3. Original y copia fotostática de una identificación oficial.

La Dirección una vez resuelto el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, remitirá la resolución administrativa a la Oficialía que corresponda a efecto de que reserve y margine el acta primigenia, en libros y base de datos y levante una nueva acta de nacimiento con los datos contenidos en la resolución administrativa.

Respecto del acta reservada no se publicará ni expedirá ninguna, salvo mandamiento judicial.

Concluido el procedimiento se enviarán los oficios con la información, en calidad de confidencial, a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional Electoral, Procuraduría General de la República, Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Poder Judicial de la Federación; así como a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud del Gobierno Estatal, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Registro Nacional de Población e Identificación Personal y a la Unidad Central Estatal del Registro Civil que corresponda.

Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados, serán oponibles a terceros desde de su levantamiento.

Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta, no se modificarán ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona; incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán inmodificables, salvo en los casos en los que la ley determine su extinción y modificación.

**ARTÍCULO 125.** Además de lo señalado en el artículo 124 de esta Ley, en el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser de nacionalidad mexicana.

II. Tener 18 años cumplidos.

III. Manifestar el nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia.

IV. Manifestar el nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género solicitado.

**ARTÍCULO 126.** La Dirección girará oficios, con carácter de información confidencial, cuando sea solicitado por autoridad competente, bajo criterios de estricta proporcionalidad.

**ARTÍCULO 127.** El acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género debe contener los datos que establece el artículo 58 de la Ley para la Familia, en el entendido que en el rubro de sexo se asentará el género femenino o masculino.

**ARTÍCULO 128.** La autoridad administrativa no podrá oponerse o negarse a la realización del procedimiento administrativo de cambio de género, salvo por las causas de:

1. Vicios al consentimiento libre e informado del solicitante y;
2. Fraude a la ley.

Así mismo, la cancelación o nulidad de las nuevas actas de nacimiento inscritas por reasignación de identidad de género no procederá por la vía administrativa, quedando a salvo los derechos de las personas interesadas de promoverla por la vía judicial que corresponda.

**CAPITULO TERCERO**

**DE LAS INEXISTENCIAS DE REGISTRO DE**

**NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN**

**SECCIÓN ÚNICA**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 129.** Cuando un registro de nacimiento o defunción no se asiente en el plazo señalado en el artículo 57 de la Ley para la Familia; 41 y 72 de esta Ley se considerará extemporáneo, debiendo obtener de la Dirección, del lugar de nacimiento del interesado o del lugar donde ocurrió la defunción, el certificado de inexistencia correspondiente, trámite que podrá realizarse a través de las Coordinaciones del Registro Civil.

Los certificados de inexistencia de nacimiento por la vía administrativa, se extenderán a personas menores de 18 años y mayores de 60 años, únicamente.

Como caso excepcional se autorizarán los certificados de inexistencia de nacimiento a personas cuya edad esté entre los 19 y 59 años, previa verificación de los documentos por parte de la unidad administrativa que corresponda.

Los registros extemporáneos de mayores de 18 años se promoverán ante la autoridad judicial competente de conformidad con el artículo 145 y demás relativos del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO 130.** Tratándose del registro extemporáneo de nacimiento de menores de 18 años, para la expedición del certificado de inexistencia se deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Se deberá llenar la solicitud correspondiente, misma que contará con la firma o huella de la o el solicitante, o quien ejerza la patria potestad o tutela o en su caso, de su representante legal, requisito sin el cual no se dará trámite al procedimiento.

II. Certificado de nacimiento.

III. Identificación oficial de quien promueve.

IV. Acta de nacimiento de la madre o acta de matrimonio, en su caso.

El nombre de la madre que aparezca en el documento que presente (acta de nacimiento o acta me matrimonio), deberá coincidir con el que conste en el certificado de nacimiento.

V. Acreditación de hechos emitida por la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia, si no se presenta el original del certificado de nacimiento.

VI. Pago de los derechos correspondientes, en su caso.

Una vez presentada la solicitud, la Dirección procederá a la búsqueda del registro en sus archivos y base de datos del subsistema de información sobre nacimientos, de la Secretaría de Salud, para acreditar la no existencia de una inscripción anterior.

La Dirección podrá ampliar los requisitos cuando considere que los que se presentan no son suficientes para acreditar la inexistencia del registro de nacimiento.

**ARTÍCULO 131.** Tratándose del registro extemporáneo de nacimiento de mayores de 60 años, para la expedición del certificado de inexistencia, además de llenar la solicitud respectiva, se presentará:

I. Fe de bautismo.

II. Cartilla Militar, según corresponda.

III. Acta de matrimonio.

IV. Acta de nacimiento de hijas o hijos de la o el interesado.

V. Pago de derechos correspondientes, en su caso.

**ARTÍCULO 132.** La Dirección formará un expediente por cada trámite y lo identificará con un número progresivo, señalándose si corresponde a certificado de inexistencia de menores o mayores de edad.

La Dirección sustanciará el procedimiento en un término no mayor a cinco días hábiles, durante el cual se desahogarán las pruebas, si se tramita a través de las Oficialías Coordinadoras el término se extenderá a quince días hábiles.

Los procedimientos derivados de gestiones especiales se substanciarán en veinte días hábiles contados a partir de su recepción.

Comprobada la no inscripción, la Dirección emitirá el certificado de inexistencia correspondiente, en caso de duda u oposición la Dirección mediante resolución, negará la expedición del certificado de inexistencia, dejando a salvo los derechos de la o el interesado en la vía jurisdiccional.

**ARTÍCULO 133.** La vigencia del certificado de inexistencia será de sesenta días, si en ese plazo no se registra el nacimiento, deberá promoverse nuevamente, siguiendo el procedimiento que se señala en el presente capítulo.

**ARTÍCULO 134.** La inscripción de un acta de defunción supone la existencia previa de un acta de nacimiento, en el supuesto de que la persona mayor de edad fallecida no estuviere registrada, deberá promover el registro extemporáneo por la vía judicial de conformidad con el artículo 144 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás relativos de la Ley para la Familia.

**ARTÍCULO 135.** Si la inscripción de defunción no se efectúa dentro de los sesenta días siguientes, contados a partir de la fecha de expedición del certificado médico de defunción correspondiente se requerirán los siguientes documentos:

I. Se llenará la solicitud que a el efecto proporcione la Dirección, misma que contará con la firma o huella de la o el solicitante quien acreditará el parentesco con la o el finado o, en su caso, de su representante legal, requisito sin el cual, no se dará trámite al procedimiento.

II. Certificado médico de defunción.

III. Identificación con fotografía de quien promueve.

IV. Acta de nacimiento y matrimonio de la o el finado.

V. Carta del panteón o de la funeraria donde se llevó a cabo el servicio.

VI. Acreditación de hechos extendida por el Ministerio Público, por el robo o extravío del certificado de nacimiento.

VII. Clave Única de Registro de Población.

VIII. Pago de derechos correspondientes, en su caso.

En caso de que el certificado médico de defunción sea presentado en fotocopia, deberá presentar también constancia de hechos expedida por el Ministerio Público.

En el supuesto de no contar con el certificado médico de defunción deberá tramitarse el registro extemporáneo ante la autoridad judicial competente.

**ARTÍCULO 136.** Para la expedición de constancias relativas a la no localización de acta, se deberán presentar los siguientes requisitos:

I. Llenar solicitud que al efecto proporcione la Dirección.

II. Acta que pretende localizar o los datos para su localización.

III. Verificación de búsqueda en archivo.

IV. Copia de identificación del interesado.

V. Pago de derechos correspondientes.

**ARTÍCULO 137.** Para la expedición de constancias de soltería se deberán presentar los siguientes documentos previo llenado de la solicitud que al efecto proporcione la Dirección:

I. Acta de nacimiento de la o el interesado.

II. Copia de identificación con fotografía.

III. Pago de derechos correspondientes.

La Dirección dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, y una vez comprobada la no existencia de un matrimonio subsistente en los archivos y base de datos, procederá a extender la constancia respectiva.

**ARTÍCULO 138.** Para la expedición de constancias de registro extemporáneo se deberán presentar ante la Dirección los siguientes documentos:

I. Acta de nacimiento del interesado.

II. Copia de identificación con fotografía.

III. Pago de derechos correspondientes.

La Dirección dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, y una vez verificada la extemporaneidad del registro en los archivos y base de datos, procederá a extender la constancia respectiva.

**Artículo 139.** La Dirección del Registro Civil será la única entidad facultada para expedir las constancias de concubinato a las personas interesadas, lo anterior sin ningún tipo de discriminación, especialmente por género u orientación sexual, verificando que previamente se cumpla lo que dispone el artículo 248 y demás disposiciones relacionadas con el concubinato, contenidas en la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza; siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

1. Copia de identificación oficial de ambos concubinos.
2. Copia de acta de nacimiento de ambos concubinos.
3. Declaración testimonial rendida ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia firmada por ambos concubinos.
4. Copia de acta de nacimiento de los hijos en caso de que los hubiere.
5. Formato de solicitud, previamente llenado y firmado por ambos concubinos.
6. Comprobante de domicilio común.

Las autoridades registrales, una vez recibida la documentación y verificados los requisitos, procederán a expedir la constancia de concubinato, la cual tendrá validez de un año a partir de su emisión.

**TÍTULO SEXTO**

**LOS Y LAS OFICIALES DEL REGISTRO DEL CIVIL**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**BASES GENERALES**

**ARTÍCULO 140.** Para el cumplimiento de su objeto, el Registro Civil se auxiliará de las personas que, en los términos de esta ley u otras disposiciones aplicables, sean designadas como Oficiales, a quienes se les faculta de fe pública en su cargo.

La designación de los y las Oficiales podrán ser con el carácter de Titular o de Adjunto de una Oficialía.

Las y los Oficiales serán nombrados y removidos por el titular del Ejecutivo del Estado.

**ARTÍCULO 141.** Para ser Oficial se requiere:

I. Ser de nacionalidad mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos.

II. No ser ni haber sido ministro de algún culto religioso.

III. Ser de reconocida probidad y honradez.

IV. No haber sido condenado por delito intencional que merezca pena privativa de libertad.

V. De preferencia tener título oficial de Licenciado en Derecho y/o contar con conocimientos en la materia de Derecho Registral Civil y Familiar.

VI. Acreditar los exámenes o pruebas de conocimiento que correspondan, o que le sean aplicados por la Dirección, en su caso.

La persona titular del Ejecutivo podrá dispensar la presentación de los exámenes de mérito o pruebas de aptitud, cuando a su juicio, existan elementos suficientes que acrediten la capacidad y profesionalismo del aspirante a Oficial.

**ARTÍCULO 142.** Los y las Oficiales deberán hacerse cargo de todos los gastos de su oficina, incluyendo los correspondientes a la encuadernación de sus libros. No tendrán ninguna relación laboral con el Gobierno del Estado.

El personal de las Oficialías se regirá por la relación laboral que tengan con la o el Oficial correspondiente, sin ninguna responsabilidad o vinculación laboral para el Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO 143.** Los honorarios que habrán de percibir quienes sean Oficiales por su intervención en cada hecho o acto del estado civil, serán los que correspondan a los publicados anualmente en la Ley de Hacienda, y que se autoricen como tarifa por la Secretaría de Gobierno y se les comunique por conducto de la Dirección.

La tarifa autorizada oficialmente, deberá colocarse a la vista de los interesados en las Oficialías y será objeto de revisión en las visitas.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**OFICIALES COORDINADORES DEL REGISTRO CIVIL**

**ARTÍCULO 144.** La Dirección determinará el número de Oficiales que deberán fungir como Coordinadores, confiriéndoles su encargo mediante acuerdo con indicación expresa de sus atribuciones y competencia territorial.

**ARTÍCULO 145.** La Dirección tendrá en cuenta para designar a un Oficial como Coordinador, la experiencia, capacidad, conducta y responsabilidad mostrada en el desempeño de su función.

**ARTÍCULO 146.** La designación de Oficiales Coordinadores en cada región no es limitativa.

Para efectos de jurisdicción las Coordinaciones se dividen en las siguientes regiones:

I. Laguna que comprende los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Viesca y Torreón.

II. Centro-Desierto que comprende los municipios de Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura, Sacramento y Sierra Mojada.

III. Carbonífera que comprende los municipios de Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas.

IV. Sureste que comprende los municipios de Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y Saltillo.

V. Norte que comprende los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

**ARTÍCULO 147.** El o la Oficial que ocupe una Coordinación del Registro Civil tendrá las atribuciones siguientes:

I. Apoyar a la Dirección en la distribución de información contenida en leyes, decretos, circulares y acuerdos que se emitan para el mejor cumplimiento de la función de los y las Oficiales, acusando recibo de la información.

II. Auxiliar a la Dirección en la recepción y envío de los documentos que se requieran para iniciar los procedimientos de aclaración, rectificación y certificados de inexistencia, en los términos del artículo 114 y demás relativos de la presente Ley.

III. Mantener actualizado el Registro de Sellos y Firmas autorizadas de las y los Oficiales, remitiendo un original a la Dirección.

IV. Poner en conocimiento de la Dirección, por escrito, las faltas u omisiones en que incurran las y los Oficiales de su jurisdicción.

V. Coordinar con la Dirección la asistencia y participación de las y los Oficiales a las capacitaciones, cursos o talleres que se impartan.

VI. Proponer a la Secretaría de Gobierno, por conducto de la Dirección las actualizaciones sobre circunscripción de las Oficialías, en base a su conocimiento de la Región y/o sugerencias de las y los Oficiales de su jurisdicción.

VII. Formular propuestas a la Dirección para la creación de Oficialías o el cambio o cierre de las ya existentes, en base a la situación de las localidades que corresponden a su jurisdicción.

VIII. Remitir dentro de los primeros tres días de cada mes un informe de sus actividades.

IX. Elaborar y mantener actualizado un registro de todos los trámites de aclaración y rectificación administrativa, certificados de inexistencias y demás que estén autorizados a realizar por la Dirección, así como el comprobante del pago correspondiente.

X. Conservar en orden cronológico y por número de expediente, los que se formen con motivo de los procedimientos de aclaración y rectificación administrativa y en su caso, de los certificados de inexistencia.

XI. Orientar a los usuarios sobre los requisitos y procedimientos de aclaración y rectificación administrativa y certificados de inexistencia.

Las demás funciones que le encomiende la Dirección.

**CAPÍTULO TERCERO**

**PARA DESIGNACIÓN DE OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL**

**ARTÍCULO 148.** La Dirección tiene la obligación de informar a la Secretaría de Gobierno de la necesidad de designar en determinada jurisdicción a un Oficial.

Las solicitudes que reciba la Dirección respecto de quienes soliciten ser Oficial, se remitirán a la Secretaría, anexando el curriculum, listado o propuesta y demás documentos que acrediten la idoneidad de la persona para el cargo de Oficial.

Por conducto de la Secretaría de Gobierno de todo trámite se dará cuenta a la persona titular del Ejecutivo del Estado, y este en su caso, con fundamento en los artículos 140 y 141 de esta Ley, emitirá el nombramiento correspondiente.

**ARTÍCULO 149.** De considerar que la persona propuesta debe presentar el examen correspondiente para ser Oficial, la Dirección señalará día y hora para la celebración del mismo.

La propia Dirección notificará a las y los interesados y a las y los integrantes del jurado dicha circunstancia con cuando menos quince días hábiles de anticipación.

El examen deberá presentarse en la hora y lugar que señale la Dirección.

**ARTÍCULO 150.** El jurado que aplicará el examen estará integrado por la o el Director, quien lo presidirá; por la o el Oficial Coordinador del Registro Civil de la región correspondiente, y por algún representante de la Secretaría de Gobierno designado por quien sea titular de la misma.

**ARTÍCULO 151.** El examen constará de dos etapas, una práctica que consistirá en la redacción de un asentamiento de registro y, otra teórica que implica dar respuesta por escrito a distintos temas en materia registral.

En todo caso, el contenido del examen se instrumentará por la Dirección.

**ARTÍCULO 152.** El examen se efectuará en una misma sesión, y se desarrollará de la siguiente manera:

I. El aspirante contará con el apoyo de un analista designado por la Dirección para explicar el proceso de captura.

II. La asesoría no se comprenderá dentro del lapso concedido para el examen y no excederá de treinta minutos.

III. Concluida la capacitación el aspirante elegirá un tema al azar, los cuales constarán en sobre cerrado.

IV. Para la redacción del asentamiento se le concederá un término de una hora.

V. Una vez terminada la primera etapa se iniciará con el examen escrito, al cual también se le concederá una hora para su desarrollo.

VI. Cada uno de los integrantes podrá además hacer las preguntas que considere pertinentes en relación con ambas pruebas.

**ARTÍCULO 153.** Concluida la sesión el jurado levantará el acta relativa al examen, la cual deberá contener todas las circunstancias de la sesión y será firmada por quienes hayan intervenido en la misma.

Se calificará de forma independiente cada etapa, el promedio de ambas se considerará como calificación final, que para ser considerada aprobatoria deberá ser mínima de ocho. El jurado, por conducto de la Dirección notificará a la o el aspirante dentro de los ocho días hábiles siguientes, el resultado.

En caso de ser más de uno las o los aspirantes con resultados aprobatorios, el jurado deberá emitir una opinión de quien a su criterio cumple mejor con el perfil para ser designado Oficial.

Con el acta firmada se formará un expediente que conservará la Dirección y se remitirá una copia del mismo a la Secretaría de Gobierno, esta remitirá al titular del Ejecutivo del Estado, el informe del jurado para el otorgamiento del nombramiento como Oficial.

**CAPÍTULO CUARTO**

**LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS Y LAS OFICIALES DEL REGISTRO DEL CIVIL**

**ARTÍCULO 154.** Las y los Oficiales titulares, podrán solicitar a la persona titular del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Gobierno, licencia para separarse de su función o ausentarse del lugar de su residencia por más de treinta días hábiles consecutivos.

Para tal efecto, deberán presentar por escrito a la Secretaría de Gobierno, o por conducto de la Dirección, con treinta días de anticipación; la solicitud de licencia en donde manifestarán las causas y tiempo por la que se solicita.

Además, deberán mencionar, en su caso, la propuesta de la persona que como Oficial Adjunto podrá sustituirles por el tiempo que dure la licencia.

**ARTÍCULO 155.** El acuerdo que otorgue o niegue la licencia se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el que se señalará el plazo concedido y el o la Oficial Adjunto que efectuará la suplencia mientras dure la licencia.

**ARTÍCULO 156.** El Oficial a quién se hubiere otorgado licencia para separarse temporalmente de su cargo, deberá comunicar al Secretario de Gobierno su reincorporación a la función que desempeñaba en la Oficialía respectiva, con cuando menos diez días hábiles a que concluya su licencia.

**ARTÍCULO 157.** Concluido el período de licencia si la o el Oficial a quien se le concedió, manifiesta su imposibilidad definitiva para reincorporarse a la función que tenía encomendada, deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría de Gobierno, a fin de que se proceda conforme a lo previsto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.

**ARTÍCULO 158.** Las y los Oficiales pueden solicitar separarse de su función o ausentarse de su lugar de residencia hasta por quince días hábiles consecutivos, sin necesidad de licencia y previo aviso por escrito a la Dirección, a fin de que esta designe a quien habrá de suplirlo.

Si en el plazo señalado el Oficial no puede reincorporarse y así lo manifiesta a la Dirección, éste podrá ampliarse por una sola vez por igual período.

Cuando haya varios Oficiales en una misma jurisdicción, se suplirán unos a otros, cuando sólo existiere uno, la Dirección determinará al Oficial más próximo para efectuar la suplencia, en todo caso la Dirección dictará el acuerdo correspondiente.

**CAPÍTULO QUINTO**

**OFICIALES ADJUNTOS DEL REGISTRO DEL CIVIL**

**ARTÍCULO 159.** Para suplir las ausencias temporales de más de treinta días hábiles de las y los Oficiales titulares, la persona titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobierno, nombrará a las o los Oficiales Adjuntos que deberán suplir a aquéllos durante su ausencia de acuerdo al artículo 154 y 155 de esta Ley.

Las y los Oficiales Adjuntos deberán reunir los mismos requisitos que se solicitan para ser Oficial titular y les serán aplicables las disposiciones jurídicas que regulan las obligaciones y facultades de éstos.

**ARTÍCULO 160.** Quienes ocupen el cargo de Oficial Adjunto no tendrán relación laboral con el Gobierno del Estado.

Se regirán en todo caso por lo previsto en el artículo 141 de esta Ley.

**ARTÍCULO 161.** La designación de las o los Oficiales Adjuntos por el Titular del Ejecutivo podrá realizarse:

I. A través de la Secretaría de Gobierno, considerando la propuesta realizada por el Oficial que habrá de ser sustituido.

II. De entre aquellas personas propuestas de acuerdo al artículo 148 de la presente Ley.

**ARTÍCULO 162.** Hecha la designación de la o el Oficial Adjunto, quien haya de ser sustituido entregará a este los libros y demás documentos que sean necesarios para el ejercicio de su función.

De igual forma entregará los equipos que hayan sido asignados a la Oficialía correspondiente y, sobre aquellos que sean propiedad de los Oficiales sustituidos, podrá pactarse su entrega en comodato u otra figura jurídica.

Del acto de entrega la o el Visitador General adscrito a la Dirección, deberá levantar acta circunstanciada que deberá ser firmada por quien solicitó la licencia o permiso, por la o el Oficial Adjunto, el Visitador General y dos testigos de asistencia, extendiéndose una copia del acta para cada uno de los que en ella intervinieron.

**CAPÍTULO SEXTO**

**FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS Y LAS OFICIALES DEL REGISTRO DEL CIVIL**

**ARTÍCULO 163.** Son facultades y obligaciones de las y los Oficiales, ya sean titulares o adjuntos, las siguientes:

I. Dar fe pública de los hechos y actos jurídicos vinculados al estado civil de las personas físicas.

II. En el ejercicio de sus funciones, las y los Oficiales, deberán guardar la discreción y prudencia que corresponde a la importancia de su cargo. Deberán desempeñar sus funciones con probidad, honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, tratando con cortesía a cuantas personas ocurran ante ellos.

III. Rendir la protesta de ley y, una vez presentada, tomar posesión de su encargo.

IV. Asentar en las actas que se establecen en esta Ley u otras disposiciones aplicables, los actos y hechos jurídicos que correspondan.

Cuando con motivo de la solicitud de actas de nacimiento o de reconocimiento que le sean planteadas, las y los Oficiales tomen conocimiento de que no aparecen registrados datos que determinen la filiación paterna o materna del solicitante, procederán a orientarle sobre los procedimientos voluntarios para la determinación de la paternidad y maternidad o, en su caso, los procedimientos judiciales mediante los cuales pueden obtenerse.

V. Asistir con puntualidad y estar al frente del despacho de su oficina durante las horas que señale la Secretaría de Gobierno por conducto de la Dirección, sin perjuicio de que puedan actuar en horas extraordinarias, a petición de los interesados, o bien, en casos urgentes.

VI. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley para la Familia, en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

VII. Expedir y autenticar las certificaciones que se les soliciten sobre actos o hechos asentados en los libros del Registro Civil que se encuentren bajo su responsabilidad, así como imprimir copias certificadas que obren en la base de datos del estado y en su caso en el sistema nacional.

VIII. Enterar a las autoridades que correspondan, los derechos que se causen por los servicios públicos que presten, de acuerdo con las tarifas y sistemas señalados por las disposiciones fiscales vigentes y en los términos de la Ley de Hacienda del Estado.

IX. Realizar los registros cuyos derechos hubieren sido objeto:

a) De estímulos o subsidios fiscales mediante resolución de carácter general emitida por el Ejecutivo del Estado en los términos de las disposiciones aplicables.

b) Eximidos de pago por la Dirección en atención a los programas de asistencia social y demás que se implementen por las instancias competentes en beneficio de los grupos o sectores más vulnerables en la entidad, así como de aquellos que implemente la propia Dirección.

X. Devolver a Recaudación de Rentas, las formas autorizadas de expedición de copias certificadas del mes inmediato anterior que se deterioren, manchen o inutilicen por cualquier causa.

XI. Comunicar por escrito a la Dirección, las anotaciones que hayan sido asentadas en los libros del archivo de esa oficina.

XII. Conservar bajo su responsabilidad los libros, legajos, apéndices y demás documentos que utilicen para la función que se les ha encomendado, organizando su archivo de acuerdo con las bases que se señalan en esta Ley, la Ley para la Familia y otras disposiciones aplicables.

XIII. Remitir a la Dirección dentro de los primeros cinco días de cada mes, las copias de los ejemplares que correspondan al Archivo General, mismas que deberán ir debidamente sellados y firmados por la o el Oficial, Titular o Adjunto y las personas que hubieren intervenido en el acto.

XIV. Efectuar el respaldo de su base de datos y remitir en el plazo de la fracción anterior el dispositivo o medio electrónico a fin de mantener actualizada la base de datos.

XV. Rendir por escrito a las autoridades judiciales y administrativas, todos los informes que le sean solicitados o resulten necesarios y expedir, sin costo alguno, los certificados que le soliciten, siempre y cuando correspondan a su archivo.

XVI. Permitir el examen de los libros a la persona que lo solicite, siempre que dicho examen se realice dentro de la oficina y en horas hábiles.

XVII. Consultar con la Dirección, todas las dudas que surjan y que no estén resueltas por la Ley para la Familia o, en su caso, por esta Ley.

XVIII. Cumplir con los requerimientos de infraestructura, equipamiento, capacitación de recursos humanos e identidad, previamente determinados en el Manual de Identidad para Oficialías en el Estado.

XIX. Hacer uso adecuado del sistema informático implementado por la Dirección y del equipo de cómputo asignado en comodato.

XX. Efectuar las anotaciones marginales que procedan, autorizando cada una con su firma y sello oficial.

XXI. Respetar la jurisdicción territorial que les corresponda, a excepción de lo que señale esta Ley en relación a las suplencias por licencias y permisos.

XXII. Las Oficialías no Automatizadas deberán dar aviso oportuno a la Dirección, cuando la plantilla de Clave de Registro e Identidad Personal resulte insuficiente para concluir el año, así mismo concluido este, remitir la plantilla que contenga las claves que no fueron utilizadas.

XXIII. Integrar correctamente el apéndice de cada acto y/o hecho del estado civil que asiente.

XXIV. Anotar la leyenda "cancelada" en las actas, cuando no se hayan cumplido con los requisitos o cuando los interesados se hayan negado a continuar el acto; en este caso, el Oficial anotará la razón por la cual no continuó y glosará los ejemplares en el expediente correspondiente, en el informe mensual señalará esta circunstancia para los efectos a que haya lugar.

XXV. Salvar las inconsistencias cometidas al momento del asentamiento con la leyenda “lo testado no vale, lo correcto es…”, colocando una línea que atraviese la frase, pero que permita ver lo testado.

XXVI. En caso de pérdida o destrucción de un libro o de formas autorizadas, denunciará el hecho ante el Ministerio Público y remitirá a la Dirección copia de las constancias que se emitan.

XXVII. Expedir las órdenes de inhumación que correspondan.

XXVIII. Durante las visitas practicadas a las Oficialías deberá permitir la revisión de sus apéndices así como la inscripción original y base de datos.

XXIX. Abstenerse de celebrar un acto o hecho del estado civil conociendo la existencia de algún impedimento.

XXX. Celebrar en tiempo los actos y/o hechos del estado civil.

XXXI. Deberán publicar a la vista de los usuarios las tarifas autorizadas por la Secretaría de Gobierno.

XXXII. Las y los Oficiales que no hayan sido designados por la Dirección como Oficiales Coordinadores, no están facultados de realizar trámites administrativos a nombre de otra persona.

XXXIII. Atender las obligaciones y prohibiciones previstas en esta Ley, en la Ley para la Familia, en el Reglamento y demás disposiciones aplicables, en términos generales tendrán las facultades, obligaciones y prohibiciones previstas en los ordenamientos jurídicos citados.

En los casos de las fracciones IX, X y XV, las y los Oficiales, Titulares o Adjuntos, tendrán derecho a que se les restituyan las formas autorizadas empleadas o inutilizadas.

**ARTÍCULO 164.** Las y los Oficiales estarán investidos de fe pública plena para certificar los hechos y actos del estado civil de las personas físicas. La validez de dichas certificaciones sólo podrá impugnarse en juicio, debiéndose cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento.

**ARTÍCULO 165**. Las y los Oficiales serán responsables únicos de los hechos y actos pasados ante ellos y no podrán delegar, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, sus funciones en persona alguna.

**ARTÍCULO 166.** Las y los Oficiales serán responsables de las formas únicas autorizadas que para las inscripciones de actas y la expedición de las copias certificadas, adquieran y/o se les proporcionen en los términos de las disposiciones aplicables.

**ARTÍCULO 167.** Las y los Oficiales velarán por la concordancia del registro y la realidad. Deberán promover la práctica de los asientos que deban hacerse y no se hayan asentado y procurarán, por todos los medios a su alcance, que la expresión registral del hecho o del acto, sea reflejo fiel de todas las circunstancias que deban constar en el asiento.

**ARTÍCULO 168.** Las y los Oficiales entregarán a la o el interesado, un duplicado del acta que se asiente a fin de que, en todo tiempo y con los datos que en ella consten, se encuentre en posibilidad de solicitar a la propia Oficialía o a la Dirección, ulteriores copias certificadas de dicha acta.

**ARTÍCULO 169.** Los horarios en que prestan sus servicios las y los Oficiales podrán ampliarse, previo acuerdo por escrito de la Dirección, en los casos que a su juicio así se requiera, así como en aquellos otros previstos en las disposiciones legales aplicables.

El registro de los hechos y actos del estado civil, así como las anotaciones y la expedición de copias certificadas y constancias relativas a los hechos y actos del estado civil, causarán los derechos que establezca la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Ingresos y demás disposiciones aplicables.

**TÍTULO SÉPTIMO**

**DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 170.** Las visitas de inspección podrán ser ordinarias o especiales. Las primeras por cumplimiento del calendario establecido, y las segundas por queja de usuario, orden directa de la propia Dirección o por cualquier información obtenida por dependencias o particulares, que representen grave riesgo para la certeza y seguridad jurídica de la función registral.

Las visitas ordinarias se practicarán en días y horas hábiles, las especiales en cualquier tiempo.

**ARTÍCULO 171.** Para realizar las visitas ordinarias y especiales, la persona titular de la Dirección ordenará por escrito el inicio de la práctica de la visita, designando para tal efecto a la o el Visitador adscrito a la Dirección.

**ARTÍCULO 172.** El procedimiento para efectuar las visitas de inspección se substanciará de la siguiente forma:

I. La persona titular de la Dirección ordenará la práctica de la visita de inspección, que se identificará con el número de oficio que corresponda, la fecha, nombre de la o el Oficial y sus datos de circunscripción, como son localidad, municipio y número de Oficialía.

II. La visita ordinaria deberá verificarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación de dicha orden, para las visitas especiales las notificaciones se podrán realizar en cualquier tiempo.

III. La orden de visita comprenderá el objeto, alcance y fundamentos legales de la misma.

IV. En el día y hora señalada la o el Visitador que practicará la visita de inspección, se identificará ante la o el Oficial, a quien mostrara la orden con firma autógrafa.

En todo momento se respetarán los derechos y garantías de la o el Oficial, permitiéndole formular observaciones y ofrecer pruebas.

El derecho a ofrecer pruebas podrá ejercerlo dentro de los tres días hábiles siguientes, circunstancia que debe indicarse en el acta respectiva.

V. Concluida la diligencia la o el Visitador levantará el acta correspondiente, que deberá ser firmada por la o el Oficial, Visitadora o Visitador y dos testigos que al efecto se señalen.

En caso de negativa a firmar el acta, la visita no carecerá de validez y la o el Visitador, deberán asentar la razón que se manifieste.

Si de la visita de inspección se desprenden inconsistencias que ameriten sanción administrativa se seguirá lo que establece el título correspondiente.

**ARTÍCULO 173.** La o el Visitador a quien se le haya encomendado la práctica de una visita de inspección, deberá presentar a la Dirección, por escrito, un informe que contendrá las observaciones derivadas de la visita, así como las recomendaciones, en su caso.

EL plazo para rendir los informes en particular, una vez concluido el calendario correspondiente a la visita ordinaria del mes que corresponda, será dentro de los tres días hábiles siguientes a su cumplimiento.

**TÍTULO OCTAVO**

**DE LAS SANCIONES**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 174.** Las infracciones y sanciones señaladas en este capítulo, se aplicarán a las y los Oficiales, Titulares y Adjuntos, sin perjuicio de la responsabilidad que determine la Ley para la Familia u otras leyes, para el caso de faltarse al cumplimiento de sus preceptos.

Las infracciones y sanciones correspondientes al personal de la Dirección se sujetarán a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**ARTÍCULO 175.** Las sanciones consistirán en el siguiente orden, el cual prevé la gravedad de la infracción:

I. Amonestación por escrito, con apercibimiento de multa en caso de reincidencia.

II. Multa.

III. Suspensión temporal del cargo.

IV. Destitución.

Las amonestaciones y las sanciones económicas, en los casos que procedan, a las y los Oficiales, serán impuestas por la persona titular de la Dirección. Las sanciones de suspensión temporal y destitución se impondrán por la persona titular de la Secretaría de Gobierno.

En ambos casos, previo cumplimiento del procedimiento administrativo indicado en el Título Noveno de la presente Ley.

**ARTÍCULO 176.** Las sanciones económicas a que se refiere esta Ley, se impondrán tomando en consideración lo siguiente:

I. La gravedad de la infracción y el beneficio obtenido.

II. Las condiciones personales y socioeconómicas de la o el infractor.

III. Los medios de ejecución de que se valió la o el infractor.

IV. La calidad de reincidente de la o el infractor.

V. La antigüedad en el encargo.

Reincidencia es la repetición de la conducta infractora, en dos o más ocasiones.

Las multas que imponga la Dirección se considerarán, para todos los efectos legales a que haya lugar, como créditos fiscales, y deberá informar en todo caso a las autoridades correspondientes para notificar su determinación.

**ARTÍCULO 177.** Se sancionará con amonestación por escrito cuando:

I. No se comparezca ante la Dirección, con motivo de un citatorio, sin causa debidamente justificada.

II. No se acaten las instrucciones que la Dirección dicte para mejorar la actuación de los y las Oficiales.

III. No se cumpla con el horario de oficina que se tiene señalado.

IV. Se ausenten de su lugar de trabajo, sin causa debidamente justificada.

V. Se incumpla con la fracción I del artículo 147 de esta Ley.

VI. Se incumpla con lo dispuesto en el artículo 106 de esta Ley.

VII. No se acate lo establecido en el artículo 147, fracciones II, IX y X.

Las amonestaciones por escrito se aplicarán tratándose de la primera infracción, en caso de reincidencia se estará a la aplicación de las demás sanciones señaladas en la presente Ley, de acuerdo a la comisión u omisión en que incurran.

**ARTÍCULO 178.** Se sancionará con multa cuando:

I. Se reincida en los supuestos contenidos en el artículo que precede.

II. Se retarde la celebración de cualquier acto o hecho del estado civil de las personas.

III. Se autoricen actas o asienten hechos del estado civil fuera de la circunscripción territorial que les corresponda.

IV. No se coloque a la vista del público la tarifa autorizada para el cobro de los servicios que proporciona.

V. Se cobren honorarios superiores a los autorizados en la tarifa oficial.

VI. No haga uso del equipo de cómputo que le fuera proporcionado por la Dirección.

VII. No se efectúe el respaldo de la base de datos.

VIII. No remitan en el plazo establecido los ejemplares que corresponden a la Dirección, así como la unidad de respaldo de la base de datos.

IX. No estén presentes en las visitas que se realicen, previamente notificadas, sin causa debidamente justificada.

X. Proporcionen libros, apéndices y demás documentos que le pertenezcan y obren bajo su responsabilidad, a autoridades diversas a las que señalan el artículo 26 de esta Ley.

XI. No asienten las anotaciones marginales que procedan.

XII. No expidan las órdenes de inhumación que correspondan.

La multa será el equivalente de 15 a 50 veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, tomando en consideración lo establecido en el artículo 175 de esta Ley.

**ARTÍCULO 179.** Se sancionará con suspensión temporal del cargo cuando:

I. Se reincida en los supuestos de las fracciones I, IV, V, VI y VIII del artículo 178.

II. Se niegue a realizar los registros a que se refiere la fracción VII del artículo 163 de esta Ley.

III. Se ejerza dentro del domicilio de la Oficialía, profesión, carrera, trabajo diverso a la función de Oficial.

IV. No se interponga la denuncia correspondiente, por robo, pérdida o destrucción de un libro, formas autorizadas, sellos y equipo de cómputo que contenga el sistema que resguarda los actos y/o hechos del estado civil de las personas.

V. Por acuerdo emitido por la Secretaria de Gobierno, previo o iniciado un procedimiento administrativo de destitución como medida preventiva.

**ARTÍCULO 180.** Se sancionará con destitución:

I. Cuando se reincida en las fracciones señaladas en el artículo anterior.

II. Se reincida lo indicado en las fracciones II, III, VII y IX del artículo 178 de esta Ley.

III. Cuando no se asiente o inscriba el registro en las formas autorizadas, además se producirá la inexistencia del acta.

IV. Cuando no se observe lo que determina el artículo 350 de la Ley para la Familia.

V. Cuando se emitan los registros, las certificaciones y copias certificadas sin la firma registrada ante la Dirección, sea autógrafa o electrónica de la o el Oficial y de los que comparezcan.

VI. Cuando no se llenen las actas autorizadas con los datos exigidos por esta Ley y la Ley para la Familia.

VII. Cuando se incurra en la omisión o variación de los datos contenidos en las actas o certificaciones de las mismas, así como en la falsificación de actas o la inserción en ellas de circunstancias o declaraciones prohibidas por la Ley.

VIII. Cuando sean condenados por sentencia que cause ejecutoria, por la comisión de delito intencional.

IX. Cuando se emitan certificaciones de actos o hechos del estado civil y estos no obren dentro de los libros que integran el archivo de la Oficialía.

X. Cuando se haga pública o notoria su mala conducta.

XI. Cuando se haga un uso inadecuado del sistema informático implementado por la Dirección así como del equipo de cómputo.

XII. Celebrar un acto conociendo la existencia de un impedimento.

XIII. Celebrar un matrimonio en contravención al artículo 141 de la Ley para la Familia.

XIV. Negarse a realizar asentamientos de nacimiento cuando se cumplan con todos los requisitos señalados por esta Ley.

XV. Las demás que afecten la certeza y seguridad jurídica de los actos o hechos del estado civil de las personas.

**TÍTULO NOVENO**

**DEL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO PARA IMPONER SANCIONES**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 181.** La Dirección tiene la obligación de dar seguimiento al informe de resultado de las visitas realizadas, a las quejas, solitudes y/o a cualquier información obtenida por dependencias o particulares que por escrito o comparecencia, presenten en contra de las y los Oficiales.

**ARTÍCULO 182.** El procedimiento para imponer las sanciones de amonestación o multa a que se refiere la presente Ley se substanciará de la siguiente forma:

I. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la queja, informe o solicitud, la Dirección designará de entre sus Visitadores uno para la práctica de la investigación correspondiente.

II. El procedimiento se instaurará con el auto de inicio correspondiente, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado, y deberá identificarse con un número de expediente, nombre de la o el Oficial y lugar de residencia y fecha, puntualizando de forma precisa las irregularidades o inconsistencias motivo del procedimiento.

En el auto de inicio se hará mención a la o el Oficial de la oportunidad de presentar las pruebas que soporten su declaración y de exponer lo que a su derecho convenga.

III. La audiencia, deberá verificarse dentro de los diez días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación.

IV. El día, hora y lugar señalados, la o el Oficial manifestará lo que considere pertinente, respetando en todo tiempo sus derechos y garantías.

V. Si la o el Oficial no presenta pruebas, la audiencia para su ofrecimiento se efectuará dentro de los cinco días hábiles siguientes, reiterándole su derecho de exponer las declaraciones que respalden su dicho.

VI. Concluidos los plazos señalados, la Dirección dictará resolución dentro de los diez días hábiles siguientes a que concluya la última actuación, notificando de esto a la o el Oficial conforme al artículo 183 de esta Ley.

VII. De todas las actuaciones la Dirección levantará el acta circunstanciada correspondiente.

**ARTÍCULO 183.** Las notificaciones deberán efectuarse de manera personal, por conducto de la o el Visitador adscrito al Dirección o por la o el Oficial Coordinador que corresponda a la región de la o el Oficial sujeto al procedimiento.

**ARTÍCULO 184.** Para la imposición de las sanciones administrativas de suspensión y destitución se substanciará de la siguiente forma:

I. Si del informe de resultado de visita, queja o solicitud se desprende una sanción que encuadra dentro de los supuestos señalados en los artículos 179 y 180 de esta Ley, la Dirección seguirá el procedimiento indicado en el artículo 182 de esta Ley hasta antes de dictar resolución.

II. La Dirección a través de su titular remitirá a la Secretaría de Gobierno, a más tardar al día hábil siguiente de la última actuación, el expediente correspondiente al procedimiento.

La persona titular de la Secretaría de Gobierno designará al o la titular de la Coordinación General de asuntos Jurídicos de la propia Secretaría, que estará facultado para hacerse llegar de los medios de prueba que considere necesarios.

III. El responsable podrá por una sola vez, citar a audiencia a la o el Oficial para oírlo en defensa, esta audiencia deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción del expediente.

IV. Concluidos los plazos señalados la Secretaría de Gobierno, dictará la resolución definitiva que corresponda.

La substanciación del procedimiento señalado, no podrá exceder del término de sesenta días hábiles.

**ARTÍCULO 185.** La suspensión temporal podrá ser decretada hasta por seis meses.

Durante el tiempo de suspensión la dirección determinará al Oficial más próximo para efectuar la suplencia, en todo caso la dirección dictará el acuerdo correspondiente.

**ARTÍCULO 186.** Dictada la resolución que ordena la destitución de un Oficial, para un nuevo nombramiento se estará a lo que disponga el artículo 140 y 148 de esta Ley.

**ARTÍCULO 187.** Las resoluciones que resuelvan suspensión temporal o destitución se publicarán en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila.

**ARTÍCULO 188.** Contra las resoluciones emitidas puede interponerse el recurso de revisión que contempla la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se reforma el artículo 133 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue:

**Artículo 133.** Procederá la aclaración de los asientos ante la autoridad administrativa competente cuando la variación se refiera a cualquier supuesto diferente de los enumerados en el artículo precedente, de conformidad con lo previsto en la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Procederá el reconocimiento de la identidad de género ante la Dirección Estatal del Registro Civil, cuando sea solicitado por la persona interesada mediante su consentimiento libre e informado.

El procedimiento de aclaración y de reconocimiento de la identidad de género se sujetará a las disposiciones que establezca la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** Esta ley entrará en vigor a los 60 días hábiles siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Se abroga la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 59, de fecha 25 de julio de 2003; y se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

**TERCERO.** La Persona titular del Ejecutivo dentro del plazo de 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta ley, expedirá las adecuaciones que resulten necesarias al Reglamento Interior del Registro Civil, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 59, de fecha 23 de julio de 2002, a efecto de que las disposiciones de éste se ajusten al presente Decreto.

**CUARTO.** Dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta ley, deberán realizarse las adecuaciones a los formatos, medios electrónicos, e información publicada en el portal del Registro Civil para adecuarlas a los términos del presente Decreto.

**QUINTO.** Todos los asuntos que se encuentren en trámite seguirán tramitándose de conformidad con las disposiciones vigentes al momento que fueron iniciados.

**SEXTO.** Dentro del plazo de 60 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, se deberán de realizar las adecuaciones necesarias a las leyes y reglamentos, demás disposiciones que resulten procedentes.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2018.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cardioprotección del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 08 del mes de mayo del presente año, se acordó turnar a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cardioprotección del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas Comisiones Unidas, con fundamento en los artículos 90, 100, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cardioprotección del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

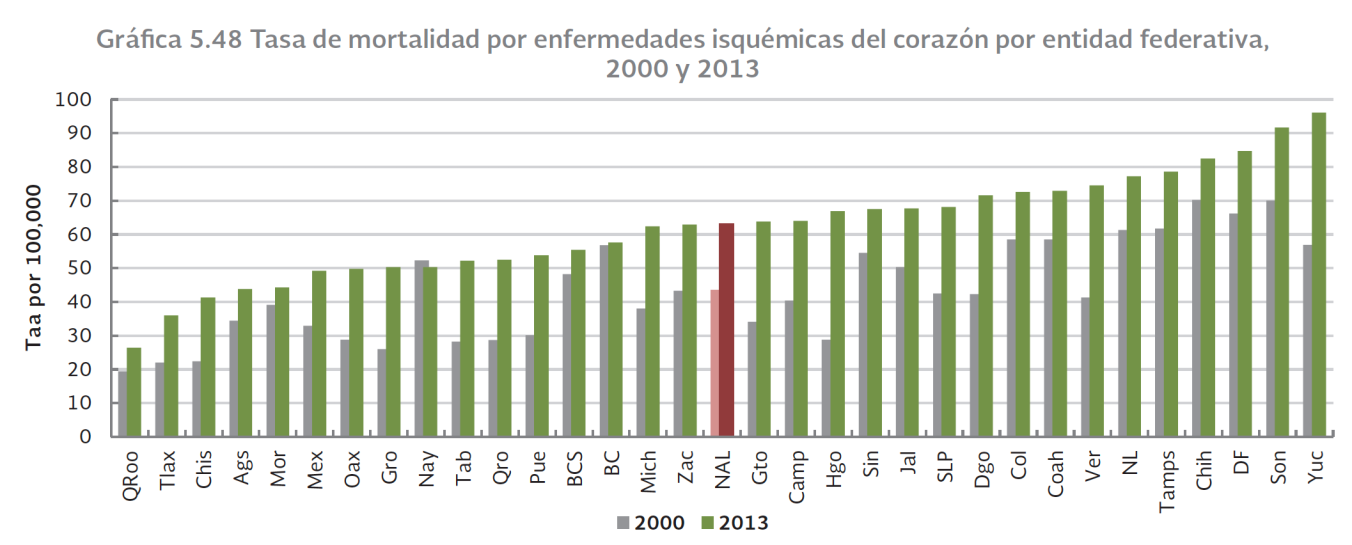
**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud en el Estado, en los últimos años el escenario epidemiológico en México ha evolucionado drásticamente, mientras que las enfermedades transmisibles han ido disminuyendo y la esperanza de vida es mayor, las enfermedades crónico degenerativas se han incrementado de tal manera que encabezan los índices de mortalidad en el país, ubicando al Infarto Agudo al Miocardio (IAM) en la segunda causa de muerte en el país.

En países desarrollados se ha advertido una baja en la mortalidad por cardiopatía isquémica desde 1970, atribuible tanto a una disminución en la incidencia como en la letalidad asociada a estas enfermedades. Esta reducción se debe al cambio en la manifestación de algunos factores de riesgo cardiovascular y al acceso oportuno a mejores tratamientos médicos y quirúrgicos, principalmente con la tecnología del uso de desfibriladores automáticos en lugares de alto flujo, así como la disponibilidad de salas de hemodinámica, sin dejar de lado la prevención primaria que es imprescindible para disminuir la mortalidad en esta enfermedad.

En nuestro país la tendencia de la mortalidad por isquemia cardiaca, se mantiene en aumento de manera paulatina. Según cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud del Estado, entre los años 2000 y 2013 el incremento fue de más del 45%, pasando de 43.5 muertes por 100,000 habitantes en el 2000 a 63.3 en el 2013. El crecimiento es más acelerado en los hombres, por lo que la brecha entre estos y las mujeres se ha venido ampliando.

Coahuila no ha sido la excepción, como puede observarse en la gráfica que nos muestra la tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón y en la que se determina el aumento que ha tenido cada entidad federativa del país desde el año 2000 al 2013.



Es por ello, que resulta de vital importancia impulsar acciones para que la sociedad civil se involucre en estrategias de reanimación cardiopulmonar, para optimizar el tiempo de respuesta ante los primeros minutos de que se inicien los síntomas de un Infarto Agudo al Miocardio, para evitar que se presente un evento de muerte súbita, pues es precisamente durante los primeros síntomas cuando puede revertirse la función eléctrica y mecánica del corazón tras una parada cardiaca, si se recibe la atención oportuna mediante reanimación cardiopulmonar con la utilización de un desfibrilador.

Precisamente el Infarto Agudo al Miocardio constituye una de las urgencias médicas más frecuentes y su desenlace depende en gran medida de la prontitud y efectividad de auxilio alcanzado.

Generalmente en los sucesos de muerte súbita sobreviene una arritmia cardiaca maligna, la cual ocasiona que las contracciones del corazón sean ineficientes y por consiguiente imposibilitan un propicio suministro de sangre para abastecer de energía y oxigenación al cerebro y a los diversos órganos y tejidos del cuerpo. Si esta grave condición sintomática no se remedia en los primeros minutos de su aparición, se restringe súbita y sucesivamente la oportunidad de tener un desenlace benigno a la maniobra de auxilio, pues por cada minuto que el corazón de una persona permanece en fibrilación ventricular, las posibilidades de sobrevivencia disminuyen un 10%, dependiendo de una serie de intervenciones críticas que si se omiten o retrasan complican gravemente las posibilidades de que los pacientes salgan adelante.

Esta situación (arritmia cardiaca maligna) puede revertirse si se utilizan técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y si además se aplica una descarga controlada de corriente eléctrica bifásica con un predeterminado voltaje y uniforme al paciente, pero si además ésta se lleva a cabo dentro de los primeros cinco minutos de iniciado el evento, resulta más efectiva, alterando con esto su variación de un evento de muerte súbita consumada, por uno de muerte súbita revertida.

Cuando ocurren estos sucesos, la cadena de supervivencia, es decir, las acciones que se deben llevar de manera sucesiva y coordinada que permitan salvar la vida de la persona que presenta una arritmia cardiaca maligna, es la siguiente: primero se debe llamar para pedir ayuda al servicio de emergencias, después se aplica la técnica de reanimación cardiopulmonar conocida como RCP, aunado al uso del Desfibrilador Externo Automático, para posteriormente ser tratado y provisto por apoyo médico especializado.

La reanimación cardiopulmonar por sí sola no es suficiente para salvar la vida de la mayoría de las personas que sufren un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, constituye un eslabón vital en la cadena de supervivencia, en la cual cualquier persona ya sea profesional de la salud o persona capacitada o entrenada, podrá brindar a través de maniobras sencillas, respiración y circulación de rescate mientras llega la asistencia médica. Estas maniobras consisten en masaje cardiaco externo con la finalidad de mantener la oxigenación y la circulación de la sangre mientras llega el DEA y la unidad de cuidados avanzados.

El uso del desfibrilador externo automático (DEA) ejerce un papel fundamental en la cadena de supervivencia, ya que el aparato evalúa el estado del corazón y determina si es necesaria la descarga eléctrica que revierta el paro cardiaco; incluso si el desfibrilador detecta que no se precisa la descarga, los datos que extrae sobre la condición del corazón son de gran utilidad para los médicos.

El desfibrilador externo automático (DEA) es un aparato sencillo y muy fácil de usar, permite transformar con una descarga de corriente, un ritmo cardiaco potencialmente letal (la fibrilación ventricular) en un ritmo cardiaco normal. Por cada minuto que pasa entre el colapso y la descarga del DEA, las posibilidades de sobrevida disminuyen en un 10%.

El desfibrilador externo automático produce una atención precisa hasta la llegada de los especialistas, de ahí la importancia de propiciar Programas de Acceso Público, supervisados médicamente, que permitan la instalación de DEA [en espacios públicos](http://www.desfibrilador.com/los-espanoles-suspendemos-en-cardioproteccion/) o eventos en los que se concentren altas cantidades de personas y así convertirse en espacios cardioprotegidos.

Una ciudad cardioprotegida es aquella que educa a la población sobre la actuación urgente e inmediata ante el paro cardio respiratorio de una persona, mediante la utilización de un desfibrilador, mientras llega ayuda médica o es trasladado a un hospital, evitando así una muerte súbita por la debida atención rápida.

Otra ventaja de estos desfibriladores es que pueden ser utilizados por cualquier persona, que sin ser personal médico, mediante una capacitación mínima podrá llevar a cabo las labores de reanimación cardiopulmonar y el uso de los desfibriladores en lugares de alta afluencia de personas, con el propósito de preservar la vida de una persona que presente este evento.

Consideramos que los Ayuntamientos, al ser el primer contacto de la sociedad con sus autoridades y por ende el más cercano a la gente, deben estar involucrados en promover y difundir la cultura sobre el uso de los desfibriladores automáticos externos y zonas cardioprotegidas y dar a conocer las ventajas de actuar con prontitud para salvar una vida.

Esta iniciativa pretende establecer como espacios cardioprotegidos, aquellos lugares con alto afluencia de personas y que disponga de los elementos necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos tras un paro cardiaco.

Conforme a diversos estudios realizados en los países en los que ya operan las zonas cardioprotegidas y considerando la experiencia en el nuestro, particularmente en las entidades federativas en los que ya se ha implementado espacios cardioprotegidos, como Sonora, Querétaro y Ciudad de México, por citar algunas, se ha estimado que es necesario la instalación de un aparato desfibrilador en los lugares en los que el número de personas usuarias diarias sea de un rango de entre 500 a 5000 usuarios, para que pueda considerarse un espacio cardioprotegido.

En México, cada año ocurren 75 mil infartos y mueren más de 30 mil personas por el mismo padecimiento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud local el 92 % de los fallecimientos se podrían prevenir durante la primera hora de síntomas. Poco más del 85% de las muertes súbitas son de origen cardiaco, el 90% de ellas se produce en entornos extra-hospitalarios y tan sólo un 5% sobrevive sin secuelas.

La única forma de conseguir una mayor supervivencia es un tratamiento adecuado y temprano de las víctimas, a través de una correcta Recuperación Cardiopulmonar (RCP), y por consiguiente la necesidad de un acceso pronto y sencillo a los Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA).

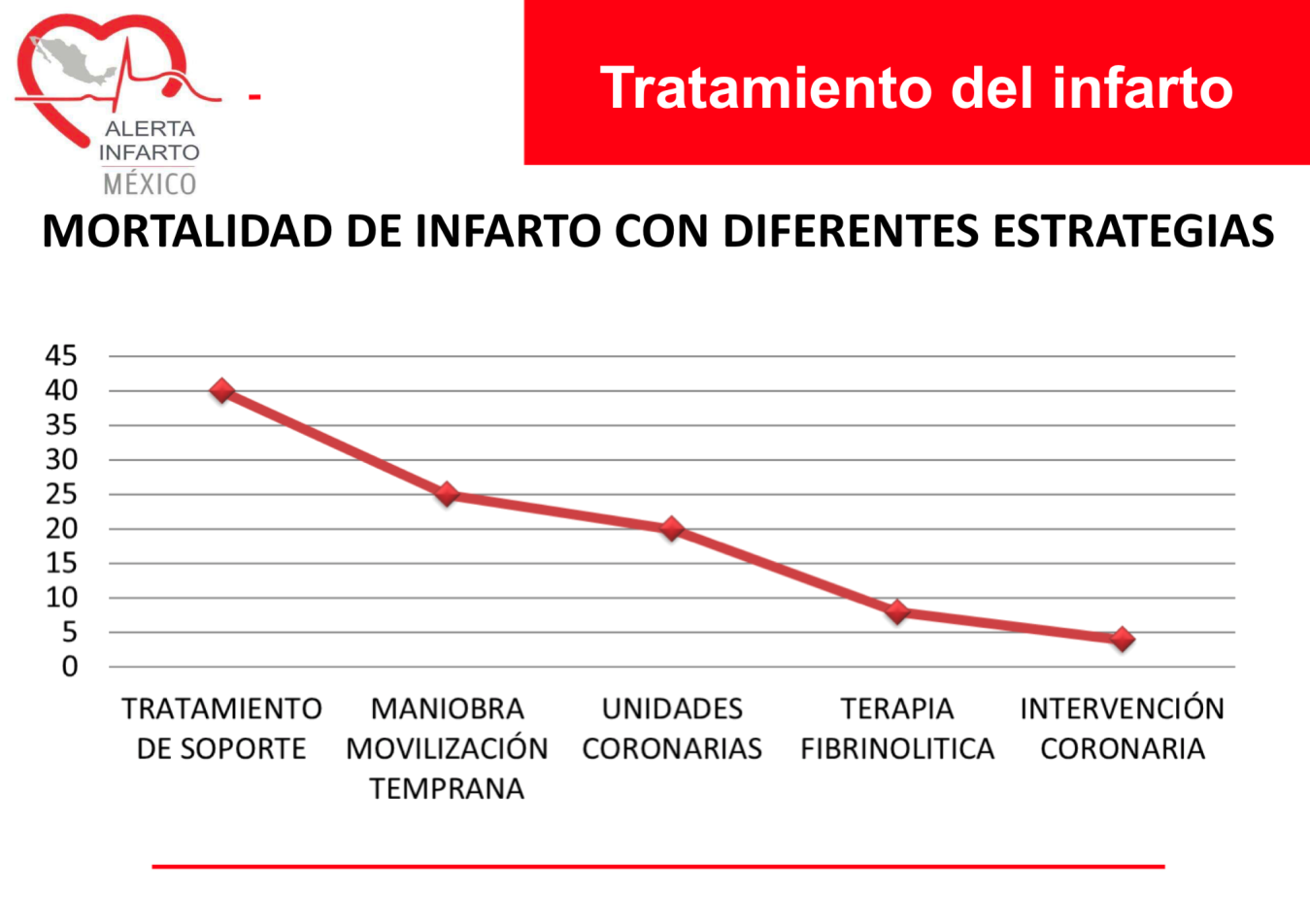
En Coahuila las enfermedades cardiovasculares ocupan la primera causa de muerte y de acuerdo a la Secretaría de Salud federal, cada semana se diagnostican en promedio 143 casos de enfermedades cardiacas. En el primer semestre del 2017, Coahuila registró 860 nuevos casos de cardiopatía isquémica, y de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI) la segunda causa de muerte es la cardiopatía isquémica.

Los eventos de muerte súbita en nuestro Estado, son sucesos frecuentes y casi nunca tienen un auxilio adecuado, por falta de una estrategia integral que fomente la educación para detectar su reconocimiento, de capacitación de la población para brindar reanimación cardiopulmonar básica y accesibilidad de equipos portátiles de desfibrilación, lo cual disminuye la posibilidad de supervivencia de los afectados o impide que estos logren sobrevivir sin secuelas permanentes

Una vez que el paciente es rescatado mediante un DAI o RCP Recuperación Cardiopulmonar de la muerte súbita y tomando en cuenta que más del 80% de las causas de muerte súbita es por enfermedad coronaria, se deberá de trasladar en ambulancia de forma inmediata a un hospital donde se tomará un electrocardiograma para descartar un Infarto Agudo de Miocardio y posteriormente tomar la decisión de administrar fibrinólisis versus iniciar manejo invasivo, si se decide esta última conducta se deberá de trasladar a una sala de hemodinámica donde deberá de practicarse un cateterismo cardiaco y posteriormente angioplastia coronaria con stent.

La mejor conducta terapéutica para tratar un paciente con Infarto Agudo al Miocardio (IAM), como se advierte en la tabla 1, es la intervención coronaria (angioplastia coronaria con stent) que se asocia a menor morbi-mortalidad, disminuyéndola hasta menos del 5% a diferencia de las otras estrategias, donde la mortalidad puede superar incluso el 40%.

Tabla 1



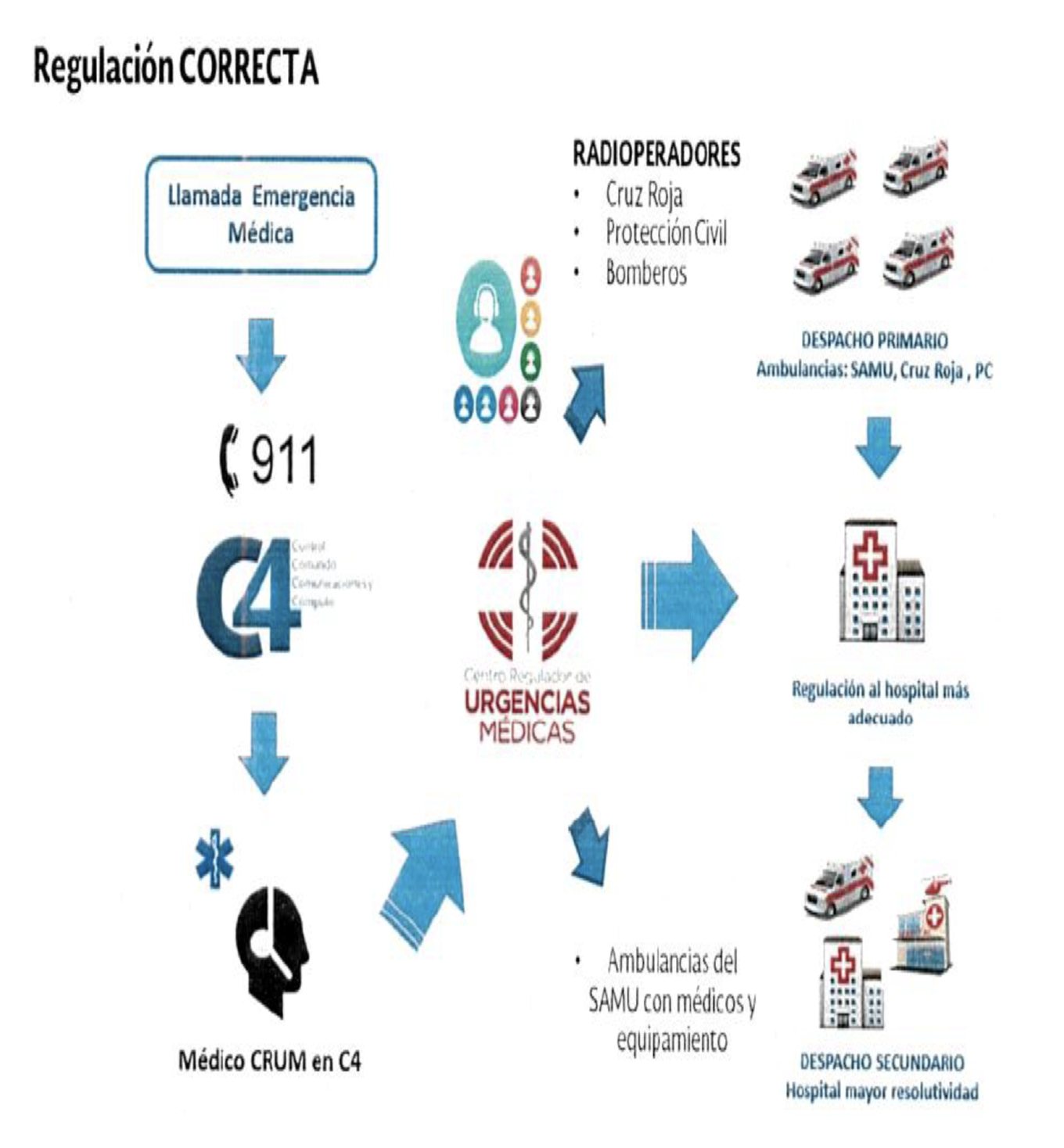
Cabe destacar que cerca del 30% de los pacientes con Infarto Agudo al Miocardio (IAM) fallecen antes de llegar al hospital, por eso es esencial contar con un servicio de ambulancia eficaz que debe ser catalogado no solo como un medio de transporte, sino como el lugar donde se realiza el diagnóstico inicial, se notifica al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) mediante la asignación de teléfono único 9-1-1, se activa el sistema de urgencias para iniciar el manejo pre-hospitalario, y posteriormente trasladar al enfermo al hospital en un lapso no mayor a 15 minutos

Los objetivos son:

1. Disminuir el tiempo en la atención del paciente
2. Identificar la presencia de Infarto Agudo al Miocardio.
3. Estratificar el riesgo de muerte y complicaciones.
4. Definir el lugar del tratamiento inicial.
5. Preparar el lugar de recepción del paciente para un tratamiento rápido y eficaz.

La Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, relativa a la regulación de los servicios de salud, establece el modelo de atención médica prehospitalaria (Tabla 2), con el objeto de fijar los criterios mínimos que se deben cumplir en la atención médica prehospitalaria, las características principales del equipamiento e insumos de las unidades móviles tipo ambulancia y la formación académica que debe tener el personal que presta el servicio en éstas.

Tabla 2. (Modelo de atención médica prehospitalario acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013)



Para que funcione de forma exitosa el *Sistema de Atención Médica Pre-hospitalaria*, se deben de conjugar las siguientes estrategias:

1. Instalación de un Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM)
2. Asignación del 9-1-1- teléfono único y gratuito.
3. Atención médica pre-hospitalaria en unidades móviles tipo ambulancias equipadas y con insumos completos.
4. Atención hospitalaria por niveles de atención, regionalizada, y personal especializado, capacitación al personal que labora a bordo de las ambulancias para profesionalizarlo.
5. Participación de la sociedad civil como primeros respondientes.

Una vez diseñado el *Sistema de Atención Médica Pre-hospitalaria* se identificarán dos tipos de hospitales, los que no cuentan con sala de hemodinamia donde se deberá de realizar la reperfusión farmacológica en el Infarto Agudo al Miocardio (IAM) y los hospitales que cuenten con sala de hemodinamia

1.- Centros hospitalarios con repercusión farmacológica (que no cuenten con sala de hemodinamia y que el traslado al paciente sea mayor a 120 minutos)

ENTRADA INMEDIATA AL SERVICIO DE URGENCIAS.

* Se disminuirá el tiempo de ingreso.
* Se confirmará el Diagnóstico.
* Si el traslado a un centro con hemodinamia es Mayor a 120 minutos, se realizará trombolisis farmacológica y posteriormente se trasladará para el cateterismo y la angioplastia dentro de las 24 horas siguientes

2.- Centros hospitalarios con sala de hemodinamia

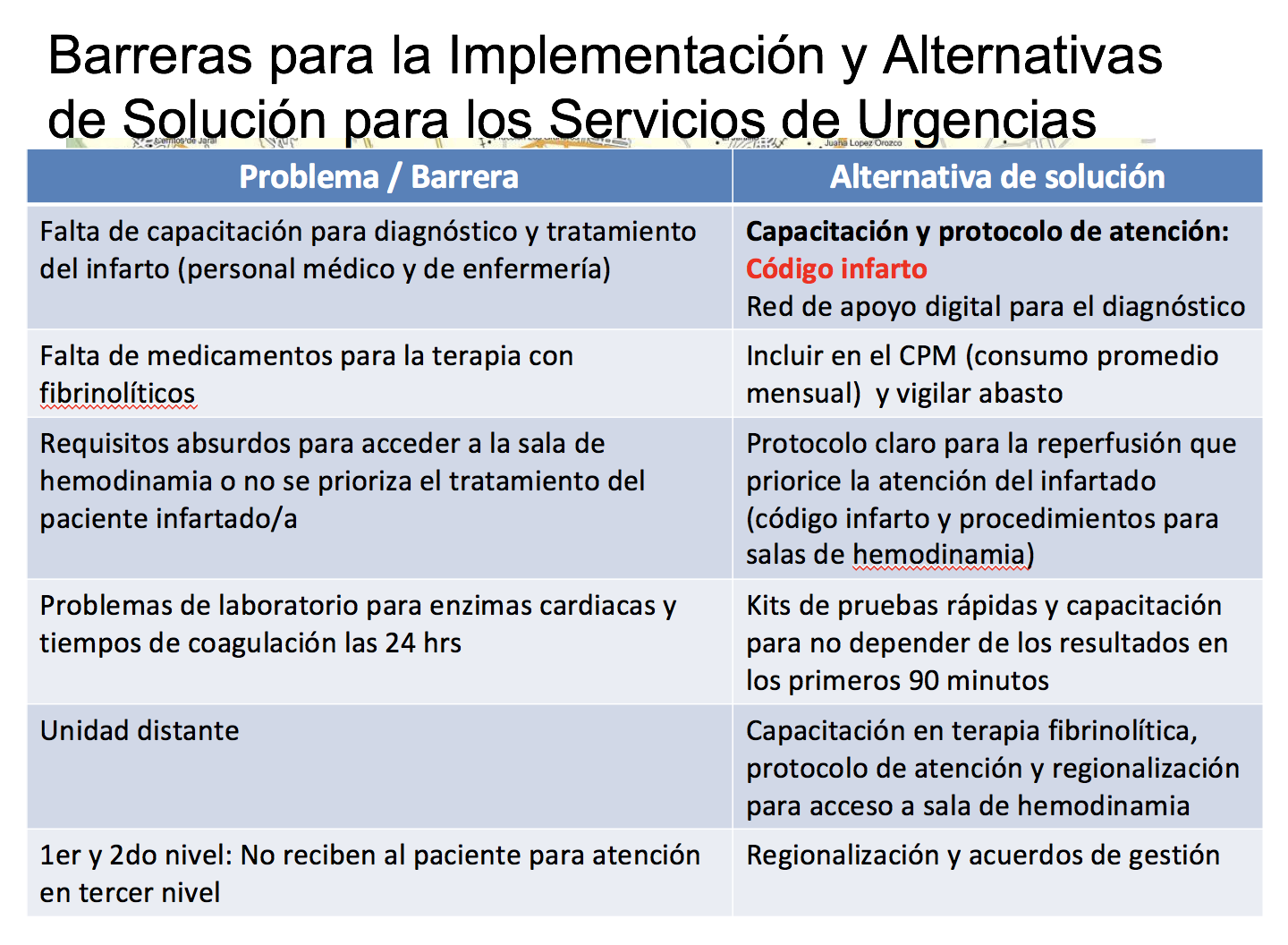
ENTRADA INMEDIATA AL SERVICIO DE URGENCIAS

* Preparación inmediata de la sala de hemodinamia
* Disminuir el tiempo de ingreso a urgencias, para confirmar el diagnóstico
* Se disminuirá el tiempo de traslado a la sala de hemodinamia y preparación del paciente.

De tal forma, afirma la Secretaría de Salud, que acorde a la distribución geográfica de Coahuila y a las ciudades con mayor población se establece la siguiente estrategia

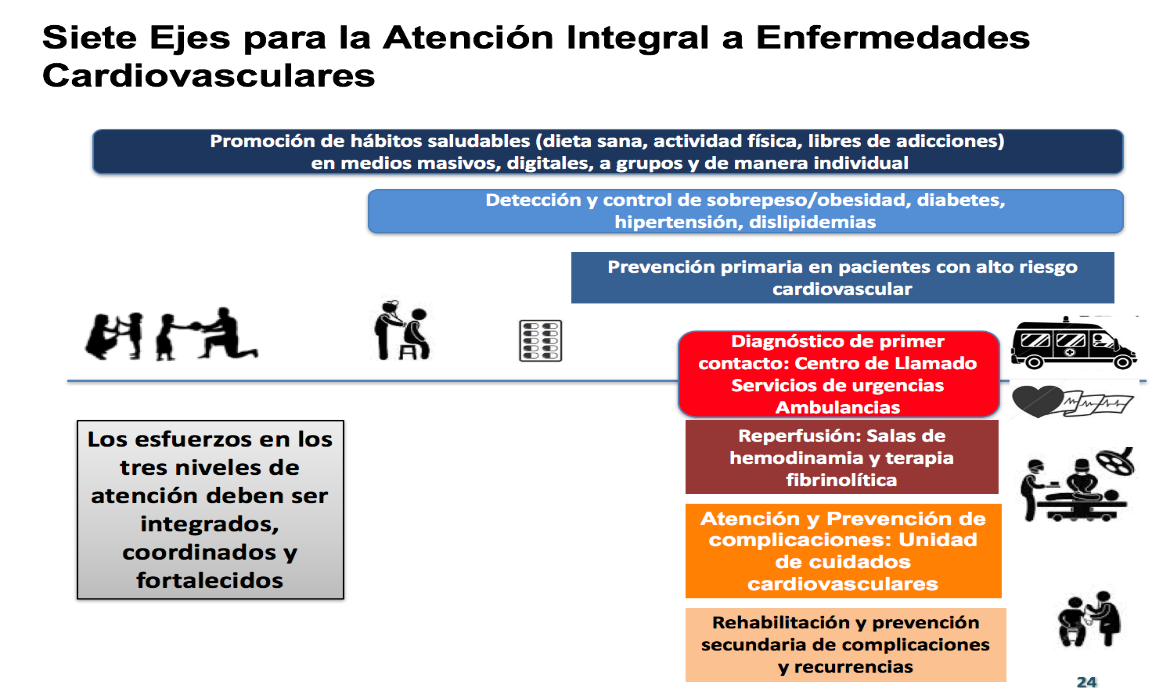
1. Equipar con salas de hemodinamia a la ciudad de Saltillo y Torreón.
2. Equipar con arcos en C vasculares a las ciudades de Monclova y Piedras Negras.
3. Equipar a las demás ciudades con medicamentos fibrinolíticos y ambulancias tipo III (ambulancias de terapia intensiva) para dar la atención en la etapa aguda del Infarto Agudo al Miocardio IAM y posteriormente trasladar al paciente a la ciudad más cercana para complementar el tratamiento (cateterismo cardiaco y angioplastia con stent coronario).

Según la Secretaría de Salud del Estado, la principal barrera para la solución de los servicios de urgencias, es la falta de capacitación para diagnóstico y tratamiento del infarto, así lo muestra la siguiente tabla:



Para la prevención y el manejo de este tipo de patología, se identificaron 7 ejes esenciales considerando como premisa que es la primera causa de muerte en Coahuila, y el objetivo principal es disminuir la mortalidad (tabla 3)

Tabla 3. (Se integra desde la prevención primaria y secundaria para tratar la primera causa de muerte en Coahuila).



Según la Secretaría de Salud, el proyecto actual se contempla equipar todos los hospitales del Estado con electrocardiógrafo para la detección oportuna del paciente cardiopatía con un Infarto Agudo al Miocardio IAM, contar con la disponibilidad de ambulancias, y de fármacos tromboliticos (alteplase, tenecteplase, etc.) y contar con 4 hospitales estratégicamente ubicados en el Estado (dos con sala de hemodinamia y dos con arcos en C) para la realización de estudios de cateterismo cardiaco y angioplastia coronaria con stent, contar con todos los insumos necesarios (carro rojo, máquina de anestesia, equipo de hemodinamia, catéteres, balones, stent coronario, etc.) equipar a las unidades de terapia intensiva que van a recibir al paciente infartado posterior al procedimiento de angioplastia, así como contar con equipo médico especialista los 7 días las 24 horas del día. Asimismo aumentar las medidas de la prevención primaria y secundaria manejando los factores de riesgo coronario (sobrepeso, obesidad, sedentarismo, diabetes, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia). El objetivo principal es disminuir la incidencia de Infarto Agudo al Miocardio (IAM) y disminuir la mortalidad, ya que el Estado de Coahuila acorde cifras del INEGI es la primera causa de muerte.

Para este proyecto, según información proporcionada por la Secretaría de Salud del Estado, se solicitan aproximadamente 220 millones de pesos anuales. Actualmente en este programa se invierte ya un total de $ 43,776,818.91 millones de pesos anuales, desglosados conforme a la tablas que se presentan a continuación:

Tabla 4: Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. Intervenciones realizadas en 2017 en pacientes con Infarto Agudo al Miocardio (IAM).

|  |  |
| --- | --- |
| **HOSPITAL** | **FIBRINOLISIS CON ALTEPLASE O TENECTEPLASE** |
| HOSPITAL GENERAL DE SALTILLO | 20 PROCEDIMIENTOS |
| HOSPITAL GENERAL TORREON | 26 PROCEDIMIENTOS |
| HOSPITAL GENERAL PIEDRAS NEGRAS | 6 PROCEDIMIENTOS |
| HOSPITAL GENERAL MONCLOVA | 8 PROCEDIMIENTOS |
| **TOTAL** | **60 INTERVENCIONES** |

Tabla 5: Gastos efectuados en Servicios de Salud y Seguro Popular en padecimientos cardiacos en el 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| TRATAMIENTO MÉDICO DEL IAM | 630,000.00 |
| GASTOS DE TERAPIA INTENSIVA | 8,100,000.00 |
| TOTAL | 8,730,000.00 |

**REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD**

|  |  |
| --- | --- |
| NÓMINA DE MÉDICOS Y ENFERMERAS | 18,000,000.00 |
| AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E INSUMOS | 12,000,000.00 |
| TRATAMIENTO MÉDICO DEL IAM | 721,597.00 |
| ATENCIONES A DIAGNÓSTICOS CARDIACOS | 1,067,355.29 |
| MEDICAMENTOS ASOCIADOS A PATOLOGÍAS CARDIACAS | 3,257,866.62 |
| TOTAL | 35,046,818.91 |
| **GRAN TOTAL** | **43,776,818.91** |

Es importante señalar que la presente iniciativa es producto del trabajo realizado en diversas reuniones sostenidas con el Secretario de Salud en el Estado, Doctor Roberto Bernal Gómez, quien desde hace meses nos manifestó la conveniencia de contar con una Ley de esta naturaleza en el Estado, en base a los datos que nos proporcionó y que sustenta el presente instrumento legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario *“Gral. Andrés S. Viesca”* del Partido Revolucionario Institucional, consideramos oportuno presentar esta iniciativa de ley, ya que es de vital importancia brindar a los coahuilenses espacios cardioprotegidos con la finalidad de disminuir el principal índice de mortalidad en Coahuila como lo es el Infarto Agudo al Miocardio (IAM), propiciando la atención inmediata a través de la utilización de los desfibriladores que se coloquen en lugares de alta afluencia de personas.

**TERCERO.-** Los integrantes de estas comisiones unidas nos abocamos al estudio y análisis de las consideraciones que motivaron la iniciativa objeto del presente dictamen, así como el contenido y alcances de la misma, de lo cual se concluyó lo siguiente:

De los datos previstos por el promovente, se muestra con claridad que existe una problemática en materia de salud pública relacionada con la mortalidad por isquemia cardiaca. De conformidad a las cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud del Estado, entre los años 2000 y 2013 el incremento de la tasa de mortalidad fue de más del 45%, pasando de 43.5 muertes por 100,000 habitantes en el 2000 a 63.3 en el 2013.

En este sentido, la exposición de motivos del proyecto alude que en México, cada año ocurren 75 mil infartos y mueren más de 30 mil personas por el mismo padecimiento, se estima que el 92 % de los fallecimientos se podrían prevenir durante la primera hora de síntomas. Poco más del 85% de las muertes súbitas son de origen cardiaco, el 90% de ellas se produce en entornos extra-hospitalarios y tan sólo un 5% sobrevive sin secuelas.

En Coahuila las enfermedades cardiovasculares ocupan la primera causa de muerte y de acuerdo a la Secretaría de Salud federal, cada semana se diagnostican en promedio 143 casos de enfermedades cardiacas. En el primer semestre del 2017, Coahuila registró 860 nuevos casos de cardiopatía isquémica, y de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la segunda causa de muerte es la cardiopatía isquémica.

Los eventos de muerte súbita en nuestro Estado, son sucesos frecuentes y casi nunca tienen un auxilio adecuado, por falta de una estrategia integral que fomente la educación para detectar su reconocimiento, de capacitación de la población para brindar reanimación cardiopulmonar básica y accesibilidad de equipos portátiles de desfibrilación, lo cual disminuye la posibilidad de supervivencia de los afectados o impide que estos logren sobrevivir sin secuelas permanentes

En este contexto y dado que los eventos de muerte súbita en nuestro Estado, podrían prevenirse si se tuviera un auxilio adecuado, el promovente plantea la creación de una ley mediante la cual se promueva la educación y capacitación de la población para brindar reanimación cardiopulmonar básica y accesibilidad de equipos portátiles de desfibrilación, lo cual incrementaría considerablemente la posibilidad de supervivencia de los afectados y permitiría que estos logren sobrevivir sin secuelas permanentes.

Así, el proyecto normativo tiene por objeto establecer y regular un sistema integral para la atención de eventos por muerte súbita que se presenten en espacios públicos y privados con alta afluencia de personas, con el fin de reducir la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón.

El proyecto de nueva ley se conforma por 15 artículos y cuatro capítulos, que corresponden a disposiciones generales, inmuebles y/o eventos como áreas cardioprotegidas, cardioprotección de núcleos poblacionales, y responsabilidades y sanciones.

El primer capítulo fija el objeto, ámbito de aplicación de la norma y contiene un glosario con términos como desfibrilador automático externo; enfermedad isquémica del corazón, muerte súbita, muerte súbita revertida, reanimación cardiovascular, entre otras.

Por su parte el segundo capítulo define lo que se considerará un área cardioprotegida, estableciendo que en las mismas se deberán instalar desfibriladores automáticos externos conforme a los parámetros que en el propio capítulo se definen. Asimismo, se prevén las obligaciones de los administradores de los inmuebles responsables de eventos públicos y privados que estén reconocidos como áreas cardio protegidas, se establece que los desfibriladores deberán situarse en lugares de fácil acceso, colocando sus instrucciones de manera clara y visible, de tal modo que se facilite su uso.

También se define que los gastos que se generen por la instalación y mantenimiento de los desfibriladores y por la capacitación del personal serán sufragados en la medida de lo posible por los responsables de la administración de los inmuebles y de los eventos considerados como áreas cardio protegidas.

Por lo que hace al capítulo tercero, establece la responsabilidad de los ayuntamientos de colocar los desfibriladores automáticos externos en sus municipios tomando como base el número de habitantes de la localidad; asimismo, fija que serán los encargados del buen uso y mantenimiento y de los gastos que se generen por estos conceptos.

Por último, el capítulo cuarto estipula las responsabilidades y sanciones, previendo que las personas que intervengan en el uso de los desfibriladores y en la reanimación cardiopulmonar en caso de algún evento de muerte súbita, no podrán ser sujetos de responsabilidad alguna salvo en los caso previstos en el reglamento que se emita por la Secretaría de Salud.

Este capítulo asimismo establece que quien haga mal uso de los desfibriladores y cause daño a los mismos estará sujeto a las sanciones de carácter penal, civil, o administrativo según corresponda.

También, prevé un plazo de 90 días naturales, a efecto de que se instalen en las áreas cardioprotegidas los desfibriladores y para capacitar al personal necesario de lo contrario serán acreedoras de un apercibimiento o clausura en su caso, entre otras cuestiones.

En este contexto, quienes dictaminamos estimamos que la iniciativa resulta una medida legislativa necesaria, racional, y proporcional que coadyuvará de manera considerable a disminuir la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en el Estado.

En virtud de las consideraciones que anteceden, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se expide la Ley de Cardioprotección del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**LEY DE CARDIOPROTECCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**CAPÍTULO I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1.** La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Tiene por objeto establecer y regular un sistema integral para la atención de eventos por muerte súbita que se presenten en espacios públicos y privados con alta afluencia de personas, con el fin de reducir la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón.

**Artículo 2.** Para efectos de esta Ley se entiende por:

1. **Desfibrilador automático externo:** Equipo electrónico automático portátil utilizado para restablecer el ritmo cardiaco de las víctimas de arritmias malignas como la fibrilación y taquicardia ventricular.
2. **Enfermedad isquémica del corazón:** Es la enfermedad ocasionada por ateroesclerosis de las arterias coronarias la cual condiciona un desbalance entre las necesidades y el aporte de oxígeno y nutrientes al músculo cardiaco.
3. **Ley:** Ley de Cardioprotección del Estado de Coahuila de Zaragoza.
4. **Muerte súbita**: Es la aparición repentina e inesperada de una parada cardiaca en una persona que aparentemente se encontraba sana y en buen estado de salud.
5. **Muerte súbita revertida:** Es el restablecimiento de la función eléctrica y mecánica del corazón tras una parada cardiaca que recibe atención oportuna mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación.
6. **Reanimación Cardiopulmonar:** Se trata de una técnica que permite mantener la oxigenación de los órganos vitales a través de compresiones torácicas solamente (RCP solo con las manos) o con ventilación artificial (para personal de salud).
7. **Secretaría de Salud:** Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza.
8. **Tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón:** Proporción de personas que fallecen como consecuencia de enfermedad isquémica con relación al total de la población.

**Artículo 3.** El Sistema Integral para la Atención de los Eventos por Muerte Súbita es el mecanismo con el que se llevará a cabo la identificación, notificación y supervisión de las áreas cardioprotegidas, conforme al Reglamento que expida la Secretaría de Salud.

**CAPÍTULO II**

**DE LOS INMUEBLES Y/O EVENTOS COMO ÁREAS CARDIOPROTEGIDAS**

**Artículo 4.** Se considerarán como áreas cardioprotegidas a aquellos inmuebles y/o eventos tanto públicos como privados en donde se concentre un alto flujo de personas, mismos en los que se deberán instalar desfibriladores automáticos externos conforme a los parámetros siguientes:

1. Un desfibrilador, si el inmueble o evento cuenta con un flujo de entre 500 y 5,000 usuarios.
2. Dos desfibriladores, si el inmueble o evento cuenta con un flujo de entre 5,001 y 10,000 usuarios.
3. Tres desfibriladores, si el inmueble o evento cuenta con un flujo de entre 10,001 y 15,000 usuarios.
4. Cuatro desfibriladores, si el inmueble o evento cuenta con un flujo de entre 15,001 y 25,000 usuarios.
5. Seis desfibriladores, si el inmueble o evento cuenta con un flujo de entre 25,001 y 35,000 usuarios.
6. Ocho desfibriladores, si el inmueble o evento cuenta con un flujo de entre 35,001 y 45,000 usuarios.
7. Veinte desfibriladores, si el inmueble o evento cuenta con un flujo de 45,001 usuarios en adelante.

En caso de eventos públicos o privados de duración temporal, como ferias, eventos deportivos, verbenas populares y demás de naturaleza análoga, los responsables podrán cumplir con la obligación requerida en el párrafo que antecede, mediante la renta de los desfibriladores automáticos externos y la contratación de personal capacitado para su uso y manejo, siempre que se garantice el adecuado funcionamiento del equipo y que el personal este autorizado por la Secretaría, conforme a lo dispuesto en el Reglamento correspondiente.

**Artículo 5.** Los administradores de los inmuebles y los responsables de los eventos públicos y privados que sean reconocidos por la Secretaría de Salud como áreas cardioprotegidas conforme al Reglamento correspondiente, serán los encargados de:

1. El buen uso y mantenimiento que se le dé a los desfibriladores automáticos externos para que éstos se encuentren siempre en óptimas condiciones para su utilización.
2. Contar dentro del personal a su cargo, con personas capacitadas en el uso de los desfibriladores automáticos externos e instruidos en las técnicas de reanimación cardiopulmonar, de conformidad a lo establecido en el Reglamento respectivo.

**Artículo 6.** Los desfibriladores automáticos externos deberán situarse en lugares de fácil acceso y adecuadamente señalizados, colocando sus instrucciones de manera clara y visible, de tal forma que se facilite su uso a cualquier persona, estos dispositivos deberán estar adecuadamente protegidos para su mayor seguridad y conservación.

Además de la señalización referida en el párrafo anterior, deberá colocarse la publicidad necesaria a efecto de difundir la ubicación de los desfibriladores automáticos externos, la cual deberá colocarse a un rango de 500 metros de radio del lugar donde esté situado el desfibrilador.

**Artículo 7.** Los Ayuntamientos deberán dar aviso a la oficina que la Secretaría de Salud determine en el Reglamento correspondiente, de cuando éstos tengan conocimiento por medio de la solicitud de autorización respectiva, sobre la realización de algún evento multitudinario que se presuma pueda contar con un flujo mayor a quinientas personas.

**Artículo 8.** Los gastos que se generen por la instalación y mantenimiento de los desfibriladores automáticos externos, así como por la capacitación del personal para su uso, serán sufragados en la medida de sus posibilidades, por los responsables de la administración de los inmuebles y por los responsables de los eventos que fueron considerados por parte de la Secretaría de Salud como áreas cardioprotegidas, en los términos del Reglamento respectivo.

La Secretaría de Salud, fijará en el citado reglamento, aquellos casos en los que la instalación de desfibriladores automáticos externos sea de carácter obligatorio.

El Titular del Ejecutivo Estatal procurará establecer incentivos fiscales que beneficien a los responsables de la administración de inmuebles y de eventos que se certifiquen como áreas cardioprotegidas, de conformidad a las posibilidades presupuestarias, para lo cual se emitirá el decreto administrativo correspondiente.

**CAPÍTULO III**

**DE LA CARDIOPROTECCIÓN DE NÚCLEOS POBLACIONALES**

**Artículo 9.** Será responsabilidad de los Ayuntamientos colocar desfibriladores automáticos externos en todos los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, basándose en los siguientes parámetros poblacionales tomando como base para establecer el número de habitantes de cada localidad el dato más recientemente publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía:

1. Un desfibrilador, en poblaciones de hasta 10,000 habitantes.
2. Dos desfibriladores, en poblaciones de 10,001 hasta 20,000 habitantes.
3. Tres desfibriladores, en poblaciones de 20,001 hasta 30,000 habitantes.
4. Cuatro desfibriladores, en poblaciones de 30,001 hasta 40,000 habitantes.
5. Cinco desfibriladores, en poblaciones de 40,001 hasta 50,000 habitantes.
6. Diez desfibriladores, en poblaciones de 50,000 habitantes en adelante.

**Artículo 10.** Los Ayuntamientos por medio de la oficina correspondiente, serán los encargados del buen uso y mantenimiento que se le den a los desfibriladores automáticos externos, para que éstos se encuentren siempre en óptimas condiciones para su utilización, acorde a lo establecido en el Reglamento respectivo.

**Artículo 11.** Los gastos que se generen por la instalación y mantenimiento de los desfibriladores automáticos externos a que se refiere el presente capítulo, correrán a cargo de los Ayuntamientos, así como la capacitación del personal que designen en coordinación con la Secretaría de Salud, para el buen uso y conservación de los equipos.

**CAPÍTULO IV**

**DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES**

**Artículo 12.** Las personasque intervengan en el uso de los desfibriladores automáticos externos y en la reanimación cardiopulmonar en caso de algún evento de muerte súbita, no podrán ser sujetos de responsabilidad alguna, salvo en los casos que establezca el Reglamento emitido por la Secretaría de Salud.

**Artículo 13.** A quien haga un uso mal intencionado de los desfibriladores automáticos externos que ocasione que éstos sufran daños parciales o totales, será sujeto de responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda.

**Artículo 14.** Las áreas cardioprotegidas que hayan sido reconocidas por la Secretaría de Salud, tendrán 90 días naturales para instalar los desfibriladores automáticos externos y capacitar a las personas que para ese efecto designen, en caso de inmuebles, apegados a lo señalado en el Reglamento correspondiente.

De no ser así la Secretaría de Salud girará apercibimiento para que un plazo no mayor de 15 días hábiles cumplimente dicha instrucción; en el supuesto de que hagan caso omiso a dicho apercibimiento y no subsanen su omisión, la Secretaría de Salud clausurará el inmueble respectivo por no cumplir con las disposiciones de esta Ley hasta que dicho requisito sea satisfecho.

**Artículo 15.** En el caso de eventos multitudinarios que hayan sido identificados y notificados por la Secretaría de Salud como áreas cardioprotegidas conforme a lo establecido en el artículo 7 de esta Ley y el Reglamento respectivo, no podrán éstos llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia sin dicha instalación y capacitación previas a su celebración.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La Secretaría de Salud deberá emitir el Reglamento a que se refiere esta Ley, a más tardar 120 días después de la entrada en vigor del presente Decreto.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Todo lo que no se encuentre previsto en la presente Ley, se estará a lo que determine la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza y el Reglamento de esta ley.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Samuel Rodríguez Martínez, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza Dip. José Benito Ramírez Rosas (Coordinador), Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares (Secretaria), Dip. Josefina Garza Barrera, Dip. Rosa Nilda González Noriega, Dip. Fernando Izaguirre Valdés. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de septiembre de 2018.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. SAMUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto para que se adicione el artículo 900 bis al Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y para que se adicione un párrafo al artículo 28 de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de mayo del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de Decreto para que se adicione el artículo 900 bis al Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y para que se adicione un párrafo al artículo 28 de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto para que se adicione el artículo 900 bis al Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y para que se adicione un párrafo al artículo 28 de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras, en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

Justo hace una década vio la luz la reforma en materia penal, en la cual se introdujeron los mecanismos alternos de solución de controversias al artículo 17 de nuestra Carta Magna, esta reforma resaltó el auge que ya se percibía en los temas relacionados a la necesidad de legislar respecto a estos mecanismos; algunos de los avances y beneficios ya probados desde entonces como lo son el fomento al respeto de la voluntad de los interesados, la celeridad y economía en los procedimientos, la depuración de la impartición de justicia, entre muchos otros, permitieron que rápidamente el enfoque penal de esa reforma cautivara a otras materias del derecho como la mercantil, familiar, civil y laboral.

Recientemente son innumerables los actores de la vida social, política y económica del país, que se han pronunciado a favor de contar con una misma ley de observancia nacional para el resto de las materias del derecho, que a la vez homologue los criterios con los que operan los mecanismos alternos de solución de controversias en las legislaciones estatales.

Coahuila destaca a nivel nacional por contar con un cúmulo de leyes vanguardistas que incrementan la calidad en la interacción entre particulares y estimulan el desarrollo socioeconómico del Estado; desde que los mecanismos alternos fueron agregados a la agenda nacional e internacional en correlación a los derechos humanos y al control convencional y constitucional, no hemos sido ajenos a su regulación y actualmente contamos con una Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias y un Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado.

Los Medios Alternos de Solución de Controversias son, junto con la jurisdicción, la forma en que el Estado Mexicano garantiza a la población el derecho de acceso a la justicia, por un lado, a través del proceso jurisdiccional se puede contender, litigar, para intentar obtener una resolución que adjudique la solución del conflicto a un juez; y por otro lado, a través de los mecanismos alternativos se puede acceder a soluciones justas que pongan fin a la controversia, a través de procedimientos como la mediación, en la que la obtención de la solución de los conflictos provenga en mayor parte a la voluntariedad de los usuarios.

La Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias establece que los acuerdos alcanzados a través de la mediación puedan alcanzar la categoría de la cosa juzgada a través de un acuerdo administrativo de validación que emite quien dirija el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial, empero el Código Adjetivo Civil no establece un procedimiento a través del cual se pueda ejecutar ese acuerdo que ha alcanzado la calidad de sentencia firme, y si bien muchos de los acuerdos de mediación se cumplen voluntariamente, lo cierto es que en los casos en que no, la ejecución del mismo podría no encontrar buen puerto en la jurisdicción porque no hemos dotado a los jueces de la materia del procedimiento específico para poder obligar al cumplimiento de los compromisos adquiridos en mediación.

El objetivo de esta iniciativa de reforma de ley, es mantenernos en esa tesitura y fortalecer el cuerpo normativo y las instituciones con las que ya contamos en la actualidad para poder continuar resolviendo conflictos sin entrar a un procedimiento judicial con regulaciones expeditas, simples y eficaces que faciliten al ciudadano usuario de un mecanismo alterno de solución a controversias el poder precisamente lograr materialmente esa solución a sus controversias, manteniendo sano el procedimiento de mediación, reduciendo costos y tratando de ocasionar el menor desgaste entre las partes diferenciándolo de un procedimiento tradicional para de esta manera lograr un incremento sustancial en el uso de dichos mecanismos.

La necesidad de esta adición al Código Procesal Civil y a la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias ha sido planteada y tiene eco en diversos sectores de la población, entre los que se incluyen integrantes del sector empresarial, abogados litigantes y desde luego el mismo Poder Judicial a través del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias y su director, quienes tienen una opinión homologada respecto a la necesidad de contar con herramientas que faciliten el acceso a la justicia expedita y reduzcan costos judiciales, cuya implementación impacta en la disminución de los asuntos tratados ante los juzgados, reduciendo su carga de trabajo.

Lo último que debemos hacer es confundir el manejo y conceptos de los mecanismos alternos de solución de controversias o dificultar el acceso de la población a estos; dicha situación sucedería si no apoyamos desde este recinto el evitar que la aplicación de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias quede sumergida en la laguna de la inoperancia por falta de pequeñas modificaciones en las leyes adjetivas.

Uno de los principios rectores de estos procedimientos es la flexibilidad. Los medios alternos de solución de controversias son concebidos como un derecho fundamental de los ciudadanos donde existe un interés por parte del Estado para que estos se conduzcan correctamente. Dentro de ello, la norma establece los estándares mínimos que deben cumplirse para permitir que las partes y quien conduce el mecanismo vayan determinando el avance y los movimientos en el proceso adecuando el formato de acuerdo con sus necesidades.

En el caso concreto la reforma de ley pretende que una vez concluidos los procesos de solución alterna de controversias, resultando en un acuerdo de mediación validado o en un laudo arbitral estos no se hagan de cumplimiento optativo, ya que si bien es cierto las voluntades de las partes son esenciales para que el procedimiento se lleve a cabo, no lo es así para el caso de un incumplimiento de lo pactado en dicho acuerdo de mediación validado o laudo arbitral pronunciado.

La ley y la reforma buscan resolver conflictos entre particulares sin necesidad de procedimientos extenuantes, la ejecución de lo pactado o pronunciado en el resultado de los procesos de medicación deberá ser en los términos en que las partes en el proceso hayan señalado, contando para los casos del incumplimiento de una de las partes con el poder coercitivo de un juez de primera instancia, que deberá coadyuvar en el proceso en virtud de lo señalado por el artículo 28 de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la vía de apremio contemplada en el artículo 900 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza que señala las *“Reglas generales en la ejecución de sentencias y convenios. Procede la vía de apremio, siempre que se trate de la ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en juicio. En dicha ejecución se observarán las siguientes reglas generales: I. Se llevará a efecto en forma adecuada para que tengan pronto y debido cumplimiento. II. Se procurará no ocasionar al ejecutado molestias o gravámenes innecesarios y que no se traspasen los límites de la resolución que se ejecuta. III. La ejecución únicamente afectará al deudor y a su patrimonio, y no a terceras personas, cuyos bienes y derechos deberán ser respetados al efectuarla. IV. Se procurará no originar trastornos a la economía llevando a cabo la ejecución en forma tal que permita conservar abiertas las fuentes de producción y de trabajo.”*

**TERCERO.-** Quienes dictaminamos, coincidimos en que un sistema de impartición de justicia que funciona bien, permite que las personas recobren la confianza en las instituciones, encuentren respuestas adecuadas a sus problemas y salgan de la informalidad y la marginación jurídica. Por el contrario, una justicia lenta e ineficiente crea un entorno de incertidumbre que afecta negativamente las condiciones de crecimiento.

Con base en este razonamiento, numerosos estudios y diagnósticos de los principales organismos multilaterales de fomento al desarrollo, como el Banco Mundial o la OCDE han señalado que la justicia es un espacio fundamental de soporte a la economía y al bienestar.

En este contexto, cobran especial importancia los centros de medios alternos de solución de controversias, que contribuyen de forma fundamental al mejoramiento de la impartición de justicia, al reducir de manera importante la tasa de litigiosidad y los tiempos para llegar a una conclusión satisfactoria para las partes, sin la necesidad de iniciar un proceso jurisdiccional.

Se estima que tan solo en el año 2013, los centros de justicia alternativa de las entidades federativas recibieron un total de 137 mil 012 solicitudes, de las cuales 129 mil 370 resultaron procedentes, correspondiendo el 31,9% de las mismas a la materia civil.

En atención a lo anterior, es que, una de las recomendaciones previstas en el informe de resultados de los foros de justicia cotidiana, es precisamente, la de ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, recociéndose que:

*“los medios alternativos de solución de conflictos (mediación, conciliación, arbitraje) -MASC- son herramientas útiles y flexibles que diversifican las vías de acceso a la justicia.* ***A pesar de que existen diversas experiencias en la materia, su aplicación y uso es aún limitado y encuentran innumerables obstáculos para emplearse y dar los resultados esperados.******Para detonar su uso resulta indispensable (…) ampliar el alcance y mejorar el diseño y operación de los Centros de Justicia Alternativa de los Tribunales Superiores de Justicia (…).***

Uno de los obstáculos identificados, es precisamente, el señalado por la promovente en la exposición de motivos de la iniciativa, consistente en la imposibilidad con la que se encuentran las y los ciudadanos que recurren a los procedimientos alternos de solución de controversias de ejecutar los laudos y resoluciones, puesto que si bien es cierto estas resoluciones de conformidad a la ley de la materia pueden alcanzar la categoría de cosa juzgada a través de un acuerdo administrativo de validación, no existe un procedimiento específico para su ejecución.

En atención a lo hasta aquí referido, es que los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, estimamos oportunas y necesarias las modificaciones propuestas por la promovente, estando seguros de que las mismas abonarán a fortalecer el derecho a la justicia de las y los coahuilenses.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**PRIMERO.-** Se adiciona el artículo 900 bis al Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 900 BIS.** La vía de apremio también será procedente cuando se trate de la ejecución de Acuerdos de Mediación validados y celebrados en los términos de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza. En dicha ejecución se observarán las reglas del artículo 900 de este Código.

**SEGUNDO.-** Se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 28.** …

En Materia Civil, la ejecución de los acuerdos que han alcanzado la calidad de cosa juzgada mediante la validación a que se refiere el párrafo que antecede, se tramitará de conformidad con lo previsto por el artículo 900, 900 Bis, y demás aplicables del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Los acuerdos celebrados ante instituciones públicas o privadas estatales o municipales, ante organizaciones sociales o personas físicas, deberán ser remitidos al Centro para ser validados por su director y contar así con la eficacia jurídica a que se refiere este artículo, a excepción de aquellos que sean celebrados ante la instancia o centro de justicia alternativa correspondiente a la Fiscalía General del Estado, cuya validación estará a cargo de su titular, con fundamento en lo que determinen las disposiciones normativas aplicables, sin perjuicio de que los asuntos de orden penal y de justicia para adolescentes deban ser validados por el juez competente.

En todo caso, el cumplimiento de lo acordado en sede ministerial extinguirá el ejercicio de la acción penal, en tanto que aquellos celebrados en el procedimiento penal producirán el sobreseimiento de éste.

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2018.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO AL OFICIO DE LA C. MARÍA CONCEPCIÓN DELGADO LARA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA A ESTE H. CONGRESO SU REINTEGRACIÓN AL CABILDO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO.**

La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, emite el presente acuerdo bajo las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERA.-** Que la Oficialía Mayor de este H. Congreso recibió en fecha 8 de agosto del presente año, un oficio suscrito por la C. María Concepción Delgado Lara, dirigido al Presidente de la Junta de Gobierno, de este H. Congreso.

**SEGUNDA.-** Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso el día 10 de agosto del presente año, se acordó turnar a esta comisión el escrito a que se ha hecho referencia.

**TERCERA.-** Que el citado escrito, refiere que la C. María Concepción Delgado Lara fue electa como Síndico de Mayoría del Municipio de Francisco I. Madero, como consta en la Publicación del Periódico oficial del Gobierno del Estado de fecha 7 de julio de 2017.

**CUARTA.-** Que asimismo, la comunicación alude que en fecha 24 de abril del año en curso la ciudadana solicitó al R. Ayuntamiento licencia para separarse del cargo por el que fue electa por el periodo de tiempo comprendido del 25 de abril al 30 de julio de este año, a efecto de participar en el proceso electoral 2017-2018.

**QUINTA.-** Que en atención a lo anterior la C. María Concepción Delgado Lara, solicita a este órgano legislativo acuerde y apruebe lo conducente en referencia a su reintegración al cabildo para retomar sus funciones.

**SEXTA.-** Que si bien es cierto de conformidad a lo dispuesto por los artículos 58 fracciones XI, XVIII, y XIX y 59 del Código Municipal en relación con el 158-U fracción I numeral 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y los artículos 90 fracciones IV, V y VI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es facultad de éste Congreso conceder licencias a los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos y nombrar a quienes deban suplir las faltas temporales o absolutas de los mismos, el caso de las reincorporaciones tiene un tratamiento distinto en virtud de lo que prevé el artículo 102 numeral 14 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, disposición relativa a las competencias, obligaciones y facultades de los ayuntamientos en materia de gobierno y régimen interior, que a la letra señala:

*14. Turnar al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, las renuncias y las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los miembros de los ayuntamientos y de los Concejos Municipales, para que se resuelva sobre las mismas, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política local y demás disposiciones aplicables. En estos casos, el ayuntamiento respectivo deberá dar aviso previamente al Ejecutivo del Estado.*

***Los ayuntamientos autorizarán por conducto del cabildo la reincorporación a sus labores de los servidores municipales que se hallen en licencia en los términos del párrafo anterior, dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la fecha en que soliciten por escrito su reingreso; en su caso, deberán celebrar una sesión extraordinaria para cumplir con este trámite en tiempo y forma, mientras no exista impedimento legal o resolución judicial o administrativa que impida al servidor público la reincorporación a su puesto.***

**SÉPTIMA.-** Que en virtud de todo lo expuesto y agotado el análisis de los documentos remitidos tenemos a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Emítase escrito dirigido a la C. María Concepción Delgado Lara, en el que se dé cuenta que este H. Congreso no puede atender su solicitud al carecer de facultades para ello, en virtud de lo previsto en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado y en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2018.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO AL OFICIO DEL VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN DICTAMEN, EN EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CONGRESOS LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA ARMONIZAR SU LEGISLACIÓN LOCAL CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.**

La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, emite el presente acuerdo bajo las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERA.-** Que la Oficialía Mayor de este H. Congreso recibió un escrito dirigido a la Presidenta de la Diputación Permanente, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, suscrito por el Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

**SEGUNDA.-** Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso el día 14 de agosto del presente año, se acordó turnar a esta comisión el escrito a que se ha hecho referencia.

**TERCERA.-** Que el citado escrito, refiere que en sesión celebrada el 8 de agosto del año en curso se aprobó dictamen de la Primera Comisión de la Comisión Permanente con Punto de Acuerdo por el que “la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas para armonizar su legislación local con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”.

**CUARTA.-** Que el 14 de julio de 2017 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, los Decretos 903 y 904 respectivamente, por los que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**QUINTA.-** Que la citada ley de orden estatal, tal y como se desprende tanto de su contenido como de la exposición de motivos que acompañó a la iniciativa que le dio origen, se encuentra apegada a las bases constitucionales, a las leyes generales en la materia y que en su elaboración se tomó como referencia la Ley Modelo de IMCO y las recomendaciones de Transparencia Mexicana, lo que se refleja en la calificación favorable que resultó de la evaluación de los ordenamientos realizada por el citado Instituto.

**SEXTA.-** Que en virtud de todo lo expuesto y agotado el análisis de los documentos remitidos por el H. Congreso de la Unión tenemos a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Emítase escrito dirigido al C. Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que se dé cuenta de que en esta entidad federativa, se han realizado ya los procesos legislativos necesarios a efecto de armonizar el marco legal con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2018.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO AL OFICIO DEL VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE UN PRONUNCIAMIENTO EN EL QUE SE HACE UN LLAMADO A LOS CONGRESOS LOCALES QUE AÚN NO LO HAN HECHO, ARMONICEN SU LEGISLACIÓN A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL.**

La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, emite el presente acuerdo bajo las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERA.-** Que la Oficialía Mayor de este H. Congreso recibió un escrito dirigido al Presidente de la Mesa Directiva, suscrito por el Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

**SEGUNDA.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 12 de junio del presente año, se acordó turnar a esta comisión el escrito a que se ha hecho referencia.

**TERCERA.-** Que adjunto al citado escrito, se encuentra un pronunciamiento a través del cual la Comisión Permanente “hace un llamado para que los Congresos de aquellas entidades que aún no lo han hecho, armonicen su legislación a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, a fin de prevenir que nunca más se repita un hecho tan doloroso como el ocurrido hace 9 años en Sonora”.

Lo anterior en virtud de que estiman que “Las familias afectadas encontraron en la Ley General (…), publicada el 24 de octubre de 2011 (…), un “pequeño consuelo a su inmenso dolor”.

**CUARTA.-** Que derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, publicada en 2011 y en atención a lo dispuesto por su Artículo Quinto y demás Transitorios, este H. Congreso emitió la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**QUINTA.-** Que la citada ley de orden estatal, tal y como se desprende tanto de su contenido como de la exposición de motivos que acompañó a la iniciativa que le dio origen, es compatible y acorde con las bases previstas en la Ley General en la materia.

**SEXTA.-** Que en virtud de todo lo expuesto y agotado el análisis de los documentos remitidos por el H. Congreso de la Unión tenemos a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Emítase escrito dirigido al C. Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que se dé cuenta de que en esta entidad federativa, se encuentra vigente desde 2014, la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Coahuila de Zaragoza, misma que es acorde a las bases previstas en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2018.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO AL OFICIO DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A ESTE H. CONGRESO ASUMIR UN COMPROMISO DEMOCRÁTICO CON LA CIUDADANÍA COAHUILENSE PARA REVISAR Y VIGILAR LOS SIGUIENTES PROCESOS PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.**

La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, emite el presente acuerdo bajo las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERA.-** Que la Oficialía Mayor de este H. Congreso recibió en fecha 16 de abril del presente año, un oficio de la Alianza Anticorrupción, dirigido a las Diputadas y Diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicitan a este H. Congreso asumir un compromiso democrático con la ciudadanía coahuilense para revisar y vigilar los siguientes procesos pendientes de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

**SEGUNDA.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 18 de abril del presente año, se acordó turnar a esta comisión el escrito a que se ha hecho referencia.

**TERCERA.-** Que el citado escrito, refiere que la problemática de corrupción nos conmina a continuar los esfuerzos por construir instituciones de combate a la corrupción realmente eficaces, honorables e independientes políticamente.

**CUARTA.-** Que asimismo la comunicación alude que para tal efecto la Alianza Anticorrupción Coahuila propone las siguientes vías de acción:

1. Revisar y en su caso reestructurar la Comisión de Selección, del Sistema Estatal Anticorrupción mediante un proceso público que asegure una auténtica participación ciudadana para garantizar la autonomía e independencia de la totalidad de sus integrantes.
2. Integrar la Comisión Anticorrupción con la participación de miembros de las 5 fracciones partidistas representadas actualmente en el Congreso del Estado.
3. Revisar y en su caso reformar, con la participación de los ciudadanos, la legislación del Sistema Estatal Anticorrupción, para asegurar su independencia técnica, administrativa y presupuestal para asegurar su incidencia real y eficaz en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
4. Establecer formalmente espacios de diálogo y trabajo con la Alianza Anticorrupción Coahuila para incorporar las propuestas de esta organización ciudadana a las iniciativas legislativas de las distintas Comisiones relacionadas con el tema.
5. Establecer la práctica de parlamento abierto durante la revisión del Sistema Estatal Anticorrupción, como principio que garantice la transparencia en dicho proceso.

**QUINTA.-** Que por último en el referido escrito, se pone a disposición de este órgano legislativo el contacto del Ing. Juan Carlos López Villarreal, a quien autorizan para oír y recibir notificaciones.

**SEXTA.-** Que en virtud de las renuncias de los CC. Blas José Flores Dávila y María del Carmen Ruiz Esparza integrantes de la Comisión de Selección designados por las Instituciones de Educación Superior y de Investigación del Estado, el 11 de septiembre del año en curso esta Legislatura aprobó el Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por el que se Emite la Convocatoria Pública para Elegir a Dos de Nueve Integrantes de la Comisión de Selección, Encargada de Designar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; dirigida a las Instituciones de Educación Superior y de Investigación del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Al respecto es necesario precisar, que dicha convocatoria se emitió de conformidad a las bases constitucionales y legales en la materia y la misma fue diseñada a partir de los principios de transparencia, máxima publicidad, objetividad e imparcialidad a fin de garantizar la autonomía e independencia de los ciudadanos que resulten elegidos.

**SÉPTIMA.-** Que la Comisión encargada de atender los procesos legislativos en materia de combate a la corrupción, era una comisión de carácter especial, creada por Acuerdo de la Junta de Gobierno, el 15 de febrero de 2017, con el objeto de dictaminar, investigar, debatir y resolver los asuntos relacionados con las adecuaciones normativas y expedición de las leyes en materia de combate a la corrupción, dando con ello cumplimiento a la reforma constitucional en la materia.

Por lo que, una vez finalizado el proceso de armonización, de conformidad a lo previsto por los artículos 72, 82, 83, 84, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado la misma se extinguió.

No obstante lo anterior, de conformidad a las facultades conferidas por la Ley Orgánica, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, es la encargada para conocer de los asuntos en la materia.

En este orden de ideas, es menester referir que la citada Comisión está integrada por 8 miembros, y en la misma se cuenta con la representación de todos los Grupos y las Fracciones Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura.

**OCTAVA.-** Que con respecto al punto de revisar y en su caso reformar la legislación en materia de combate a la corrupción, es menester referir que en el año 2017 este H. Congreso realizó las reformas a los ordenamientos locales y expidió nuevas leyes en materia de combate a la corrupción, mismas que se encuentran apegadas a las bases constitucionales y a las leyes generales en la materia y que tomaron como referencia la ley modelo de IMCO, y las recomendaciones de Transparencia Mexicana, lo que se refleja en la calificación favorable que resultó de la evaluación de los ordenamientos por parte del IMCO, lo cual puede constatarse en la dirección electrónica siguiente: <http://sna.org.mx/SistemasLocales.html>

Aunado a ello, durante el proceso legislativo en el que se gestaron estas reformas se tuvieron diversas reuniones con integrantes de las organizaciones civiles que ustedes representan, en las cuales se hicieron llegar distintas propuestas, mismas que fueron analizadas con detenimiento incluyéndose todas aquellas que resultaron procedentes, como el caso de la eliminación de la figura del fuero, por mencionar alguna.

No obstante lo anterior, en lo que va de la Sexagésima Primera legislatura se han presentado diversas iniciativas sobre el tema que están siendo analizadas y estudiadas por la Comisión competente.

**NOVENA.-** Que en lo concerniente a su petición de establecer canales de diálogo y trabajo con la Alianza, es menester referir que los integrantes de este órgano legislativo estamos siempre en la mejor disposición de fijar espacios de diálogo con la ciudadanía, tal y como se ha venido haciendo con integrantes de esta Alianza y de otros grupos de ciudadanos, asimismo es de nuestro especial interés dar respuesta a todas las peticiones dirigidas a este H. Congreso en los tiempos y formas previstos por la Ley.

**DÉCIMA.-** Que el Principio de Parlamento Abierto se ha venido incorporando como principio rector del actuar de este H. Congreso dese el año 2015 tal y como consta de los Acuerdos de fechas 20 y 28 de enero del año 2015.

**DÉCIMA PRIMERA.-** Que en virtud de todo lo expuesto y agotado el análisis del escrito de referencia, tenemos a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Emítase escrito dirigido al C. Juan Carlos López Villarreal, que contenga un extracto de las consideraciones señaladas en el presente Acuerdo.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2018.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

1. Daniel Olguín (2013). Día Nacional del Derecho a la Identidad. Disponible en: http://danielolguin.com.ar/?p=3191 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibidem. [↑](#footnote-ref-2)
3. Convención de los Derechos del Niño, artículos 7 y 8, Ciudad de Nueva York, 1989. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 13, Ciudad de Nueva York, 1966. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 3, 16, 23, 24, 25 y 26, Ciudad de Nueva York, 1966. [↑](#footnote-ref-5)
6. Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, último párrafo, reforma publicada en DOF 10 junio 2011. [↑](#footnote-ref-6)
7. Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017, en su Eje Rector 4 “Un Nuevo Pacto Social”. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lamas, Marta, Usos, dificultades y posibilidades de la categoría de género, página 10, La Ventana, número 1, 1995. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lamas, Marta, Usos, dificultades y posibilidades de la categoría de género, página 24, La Ventana, número 1, 1995. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wagner, Claudio. 2003–2004. «Lenguaje y género». *Documentos Lingüísticos y Literarios* 26-27 : 41-44. [↑](#footnote-ref-10)
11. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2009, REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis Aislada, Materia Civil. [↑](#footnote-ref-11)
12. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016, DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis Aislada, Materia Constitucional. [↑](#footnote-ref-12)
13. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016, DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS., Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis Aislada, Materia Constitucional. [↑](#footnote-ref-13)
14. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016, DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Materia Constitucional. [↑](#footnote-ref-14)
15. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016, IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Materia Constitucional. [↑](#footnote-ref-15)
16. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015, PRINCIPIO PRO PERSONA. ÚNICAMENTE ES APLICABLE PARA INTERPRETAR LA NORMA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y NO PARA INSTAURAR UN CRITERIO SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, Tesis Aislada, Materia Constitucional. [↑](#footnote-ref-16)
17. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Control de Convencionalidad, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 7, página 5. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ídem, página 9. [↑](#footnote-ref-18)
19. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Control de Convencionalidad, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 7, página 9. [↑](#footnote-ref-19)